



PROYECTO DE CÓDIGO PENAL

LIBRO	
CÓDIGO	
NÚMERO	3008
DE	E 73
FICHA INTERNA	

PROYECTO
DE
CÓDIGO PENAL

PARA LA
REPUBLICA ARGENTINA

Redactado por la Comisión de Reformas Legislativas
constituida por decreto del Poder Ejecutivo de fecha
19 de diciembre de 1904



BUENOS AIRES
TIPOGRAFIA DE LA CÁRCEL DE EXCAUSADOS

1906







DECRETO DEL PODER EJECUTIVO NOMBRANDO UNA COMISIÓN
ENCARGADA DE PROYECTAR DIVERSAS REFORMAS LE-
GISLATIVAS.

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1901.

CONSIDERANDO:

1°. Que hay necesidad evidente de dar la mayor esta-
bilidad y unidad posibles á las múltiples leyes que rigen
en la República sobre penalidad y su procedimiento, por
las graves perturbaciones que de tal multiplicidad resultan
para la buena administración de justicia, y en particular
por lo que se refiere á la permanencia del extranjero en
el territorio de la Nación;

2°. Que además de las leyes penales, existen otras nu-
merosas dictadas ya por el Congreso, ya por las Legisla-
turas de las Provincias, relativas á derechos personales y
reales y á la forma de hacer efectivos unos y otros en
el territorio de las diferentes Provincias y en el de la Ca-
pital y Territorios Federales, que hacen cada vez más di-
fícil el ejercicio y goce de la condición civil asegurada
por la Constitución á todos los habitantes de la República,
sobre las bases de igualdad y de garantías comunes;

3°. Que existe conveniencia indudable en revisar é im-
primir carácter permanente, ó por lo menos, durante un
largo período de tiempo, al Código Penal de la Nación,
el que después de frecuentes reformas generales ó par-
ciales, no ha logrado satisfacer los unánimes anhelos de

una justicia equitativa, equilibrada y concorde con el estado social de la población en las varias regiones de la República, y menos en la Capital Federal;

4°. Que las leyes orgánicas de la justicia, y las de procedimientos, si bien han realizado progresos considerables en el sentido de los principios jurídicos más adelantados en la legislación contemporánea, han producido por su multiplicidad y diversidad, un excesivo y complicado mecanismo que se traduce en retardos y carestía de la justicia misma, inconvenientes agravados por la diferencia de fueros federal, provincial y mixto, y por la posición anormal en que ha venido á colocarse la justicia en el Distrito Federal de la Capital, donde por su población é importancia económica, se condensa la mayor parte de la vida judicial del país,—situación que á todas luces es urgente regularizar á los efectos de una mayor simplificación, y de obtener una administración de justicia más activa y menos onerosa;

5°. Que el desarrollo de la legislación parcial dictada desde 1862 hasta 1904, relativa á organización y procedimientos en el fuero federal, presenta un gran conjunto de leyes dispersas que dificultan su conocimiento por el pueblo y su estudio en las aulas, aparte de que, por el tiempo transcurrido y por el espíritu liberal de la jurisprudencia desarrollada en los tribunales, reclama reformas en armonía con los adelantos de la época y el crecimiento general del país bajo todos sus aspectos: razones que imponen ya una codificación ó ya una correlación más íntima entre esas numerosas leyes sueltas é incoherentes las más veces;

6°. Que á estas consideraciones debe agregarse la diferencia de formas procesales y de garantías á que se halla sujeta la administración de justicia en las distintas provincias, las cuales, si bien se hallan contenidas en la forma de gobierno federal establecida por la Constitución, esta misma tuvo ya en vista la necesidad de uniformar las reglas de procedimiento y las instituciones judiciarias,



en cuanto y en la medida que fuera posible, como una tendencia hacia la ulterior unificación de todas por consenso de las mismas Provincias y del Congreso (C. N. art. 67, inc. 11; art. 107); y con esto manifestaron los autores de la Constitución, una vez más, el alto espíritu de previsión que es la característica de sus preceptos, sin que tales elementos parciales de centralización importasen debilitar en lo más mínimo el vínculo federativo interprovincial, desde que, como ha ocurrido en otras naciones de federalismo más absoluto, como en Suiza y en Alemania, se ha ido uniformando diversos ramos de la legislación diferencial, inspirados en los mismos anhelos de progreso público y consolidación nacional del presente Decreto; siendo de notar que ya, al discutirse la cláusula 11ª del art. 64 de la Constitución Argentina en 1853 (art. 67 actual), se hizo presente que la diversidad de legislación era un verdadero «laberinto» que debía oponer graves obstáculos al propósito de alianzar la justicia que la Constitución manifestaba en su preámbulo (*Actas del Cong. Gen. Const.* 1853, Edic. 1898, pág. 342);

7º. Que si una unificación completa no fuera posible, es indudable la conveniencia de realizar esa correlación en numerosas materias que directamente afectan el bienestar de las personas y el desarrollo de la prosperidad pública, ya sea impidiendo el más libre ejercicio de los derechos personales en las diferentes Provincias, ya gravando excesivamente las operaciones de transmisión ó disposición de los bienes, ya, en fin, en el sentido de la seguridad de las personas y de la propiedad, tan esenciales para radicar en el país una población culta y laboriosa: cuestiones todas estas que la Constitución ha previsto cuando ha declarado que «las Provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común», (art. 107), siendo evidente que caería bajo esta autorización un convenio que tuviere por objeto adoptar ciertas y determinadas reglas comunes para los fines antes ex-



presados, siempre que concurriese en él la aprobación del Congreso Federal;

8°. Que, del punto de vista de los procedimientos más eficaces para llegar á los resultados que aquí se expresan, de fundar un orden judicial firme y progresivo, se hace ya necesario acudir á los estudios directos de la condición social del país, por medio de investigaciones suficientes á fin de obtener el conocimiento posible de la verdad, sobre que ha de apoyarse la obra del legislador, so pena de vagar indefinidamente en las incertidumbres y pruebas que han caracterizado hasta ahora los códigos comunes y leyes procesales de la República, con algunas notables excepciones; á cuyo efecto se impone la necesidad de autorizar en toda la administración, las indagaciones que concurren á ilustrar más el juicio de los que se encarguen de la delicada misión de preparar los respectivos proyectos de ley;

9°. Que el personal ordinario del Ministerio de Justicia carece del tiempo material requerido para afrontar la tarea antes enunciada en toda su extensión, habiendo sido, por esta causa, usual, según los casos, el nombramiento de comisiones especiales de uno ó más jurisperitos ó peritos para redactar, corregir, reformar ó editar los códigos, como se hizo (sin referirse á los códigos y leyes de otras jurisdicciones, como los militares, rurales, marítimos, etc.) con el Código Civil en 1864 y 1900; con el de Comercio en 1870, 1886 y 1889; con el Penal en 1864, 1886, 1890 y 1903; con el de Minería en 1871, 1876, 1886, 1890 y 1896; con el de Organización del Jurado y procedimiento penal federal en 1875; con el de Procedimientos en lo Civil y Comercial en 1886 y 1894 y el de Procedimientos en lo Criminal y otras leyes en 1884, 1885, 1888 y 1895; y es tanto más aceptable el precedente en las actuales circunstancias, en que el desarrollo de todas las condiciones de la vida en la República, y las imprescindibles conclusiones de las ciencias correlativas con la legislación penal, hacen imposible la realización



por una sola persona ó por los funcionarios oficiales exclusivamente, de una labor preparatoria y definitiva de tanta magnitud, hallándose, por otra parte, aquéllos consagrados al estudio y redacción de otros proyectos de igual importancia para completar ó perfeccionar la legislación judicial y educativa de la República;

Por estas consideraciones,



El Presidente de la República,—

DECRETA:

Art. 1°. Constitúyese una Comisión encargada de la preparación de los siguientes trabajos legislativos:

- A. Revisión del Código Penal.
- B. Revisión de las leyes de organización de la Justicia ordinaria en la Capital de la República.
- C. Revisión del Código de Procedimientos en lo Criminal de la Capital.
- D. Revisión y codificación de las leyes de justicia federal, dictadas hasta 1904, comprendida la Capital y Territorios Nacionales.
- E. Bases para una Convención en que se establezca la correlación de las leyes de organización y procedimiento judicial de la Nación y de las Provincias en materia civil, comercial y penal.

Art. 2°. La Comisión se compondrá de cinco juristas, un médico y un secretario, se dará su propia organización interna, consultando el mejor desempeño de las tareas que se le encomiendan, y establecerá la forma de sus procedimientos.

Art. 3°. Esta Comisión, por intermedio de su Presidente, podrá dirigirse á todas las reparticiones dependientes del Poder Ejecutivo, y por el del Ministerio de Justicia é Instrucción Pública, á los tribunales y dependencias de los Poderes Judicial y Legislativo y á los Gobiernos de Provincia, para requerir todos los datos, informaciones y

demás elementos que considere necesarios para ilustrar su juicio, y todos los funcionarios y oficinas del Poder Ejecutivo quedan obligados á prestar los referidos servicios como inherentes á los deberes de sus respectivos cargos.

Art. 4°. Para realizar los trabajos enumerados en el Art. 1°, la Comisión puede darles la ordenación que crea más conveniente, consultando su mayor sencillez y claridad, y podrá presentarlos separadamente ó en cuerpos homogéneos, según la unidad ó afinidad de las materias que aquéllos comprendan, así como acompañarlos de memorias, informes ó notas explicativas, siempre que las considere necesarias.

Art. 5°. El Ministerio de Justicia é Instrucción Pública, proveerá á la Comisión de todos los útiles y medios que requiera durante su mandato, así como de las impresiones, copias y otros trabajos indispensables.

Art. 6°. Nómbrase para constituir la Comisión de Reformas Legislativas instituida en el presente Decreto, á los Señores: Doctor Francisco Beazley, Doctor Rodolfo Rivarola, Doctor Diego Saavedra, Doctor Cornelio Moyano Gacitúa, Doctor Norberto Piñero y Doctor José María Ramos Mejía, y Secretario al Señor José Luis Duñy.

Art. 7°. Comuníquese, publíquese y dese al Registro Nacional.

QUINTANA.
J. V. GONZÁLEZ.



Buenos Aires, 10 de Marzo de 1906.



A S. E. el señor Ministro de Justicia é Instrucción Pública.

Tenemos el honor de remitir á V. E., el Proyecto de Código Penal que hemos redactado, en cumplimiento de una parte de la tarea que nos encomendó el P. E., por decreto de 19 de Diciembre de 1904.

Con este motivo, deseamos hacer presente á V. E., cuales son las modificaciones que hemos hecho al Código vigente y cuales los motivos que las han determinado.

Podemos, desde luego, asegurar á V. E., que todos los miembros de la Comisión, penetrados de que un Código Penal, no es el sitio aparente para ensayos de teorías más ó menos seductoras, han renunciado deliberadamente y desde el primer momento, á toda innovación que no esté abonada por una experiencia bien comprobada, y que, cuando han adoptado alguna, en estas condiciones, no se han preocupado de averiguar si ella se debe á la iniciativa y al patrocinio de los clásicos ó de los positivistas.

Las preocupaciones de escuela, las discusiones teóricas, las disquisiciones académicas, no han tenido cabida en el seno de la Comisión, y cualesquiera que fueren las opiniones personales de sus miembros sobre tópicos determinados de la ciencia penal, todos han estado de acuerdo en que no era lo oportuno de sostenerlas, porque queríamos que la obra común, resultara libre de todo espíritu sectario y constituyese una zona franca, á cubierto de cualquier reproche de exclusivismo.

Libre, pues, nuestro espíritu de prejuicios de escuela y empeñados solamente en que el proyecto consulte las necesidades del país y las aspiraciones generales, hemos iniciado y terminado este trabajo, tomando como norma las bases fundamentales siguientes: 1º. La unificación, de acuerdo con los términos del decreto de 19 de Diciembre de 1904, de las múltiples leyes penales existentes en la

Cris

Bases
me
tru

República; 2°. La adopción de algunas instituciones modernas, cuya eficiencia para el castigo ó la corrección, está abonada por la experiencia de las naciones que las han implantado, y la mejora de otras ya incorporadas á nuestra legislación; 3°. La simplificación del sistema penal, de modo que pueda ser fácilmente aplicado en la República, dados sus elementos actuales; 4°. La inserción de algunas disposiciones tendientes á suplir vacíos y deficiencias que se notan en el Código, tanto en la parte general como en la relativa á los delitos y sus penas; y 5°. La ordenación en forma más lógica de las distintas materias que comprende dicho Código.

Fijadas así, en su conjunto, las bases primordiales de nuestro proyecto, pasamos á indicar el desarrollo que hemos dado á cada una de ellas.

Unificación de las distintas leyes penales

Esta base, que, como queda enunciado, está consignada en el mismo decreto que dispuso la revisión del Código Penal, ha sido observada, como V. E. lo notará, en una forma satisfactoria, porque hemos incluido en el proyecto todos los delitos previstos por las leyes especiales del 14 de Septiembre de 1865, 19 de Noviembre de 1900, de Ferrocarriles, Correos y Telégrafos, Patentes y Marcas, Electoral, etc.

Esta unificación de las distintas leyes penales, constituía una necesidad ineludible en nuestra legislación, como lo ha reconocido el P. E. y como lo indicó con fundamentos incontestables la última Comisión que se ocupó de este asunto. El Código Penal que tiene que ser único para toda la Nación, según el precepto de la Constitución, debe abarcar en sus disposiciones todos los delitos, de cualquier naturaleza que sean.

La coexistencia de distintas leyes, con distintas clases de penas y hasta con principios generales diversos, era una verdadera anomalía, tratándose de materias que deben legislarse uniformemente para todo el país.



Hemos agregado también, con el mismo propósito de uniformar todas las leyes de carácter penal, un libro sobre faltas, siguiendo en esto á la mayoría de los códigos modernos, incluso el de Alemania, y el Proyecto para la Suiza, cuyas instituciones federativas no han sido obstáculo para que la Nación se ocupe de ellas, como materia de legislación general.

Sin embargo, si esta parte del proyecto, suscitara escrúpulos de orden constitucional y se pensara que invade el dominio de las autonomías provinciales, su eliminación en nada alteraría la economía del Código. La Comisión, tiene, no obstante, la creencia de que tales escrúpulos no se han de manifestar, porque piensa que si el Congreso tiene por la Constitución la facultad de dictar el Código Penal de la Nación, en dicha facultad está forzosamente comprendida la autoridad necesaria para incluir en ese Código todos los actos ú omisiones que en cualquier parte del territorio de la Nación se consideran ilícitos y merecedores de una pena. Las Provincias conservarán siempre el poder de crear y reprimir faltas de carácter local, y como es este poder el único que constitucionalmente les corresponde en esta materia, es evidente que sus autonomías no sufren cercenamiento alguno porque el Congreso legisle sobre faltas de carácter general.

Nuevas instituciones y mejora de otras

La institución que en realidad ofrece mayor novedad en el Proyecto, porque hasta ahora no ha figurado en los Códigos anteriores, es la condenación condicional, ya implantada con reconocido éxito en Francia y en Bélgica, propuesta en Austria y Hungría, y recomendada á los legisladores de todos los países por la Unión Internacional de Derecho Penal, reunida en Bruselas el 19 de Agosto de 1889.

La Comisión considera que es esta una verdadera conquista del derecho penal moderno, y que habría sido imponderable de su parte, no incorporarla á su proyecto,



convencida, como está, de que ella realiza una obra de altísima justicia, y aparta de la carrera del crimen á muchísimos delinquentes ocasionales.

Para fundar esta opinión y á la vez como un homenaje al autor del sistema, nada más conducente que la transcripción de los siguientes párrafos del informe redactado por Mr. Berenger y presentado al Senado de Francia el 6 de Marzo de 1890. "Hace mucho tiempo que se ha reprochado á nuestra ley penal de recurrir casi exclusivamente á las penas corporales. La idea es justa si se trata de la represión del condenado familiarizado con el crimen y de una perversidad segura:—éste no puede ser accesible sino al sufrimiento físico. Ella no lo es, con respecto á aquel cuya falta, no es, por su naturaleza, exclusiva de todo sentimiento de honor. Sobre este último punto, la Comisión piensa con el autor de la proposición que la pena, así comprendida, puede tener efectos completamente contrarios al objeto que persigue; que ella puede envilecer, en vez de levantar, abatir el ánimo en lugar de sostenerlo y destruir los resortes morales, única probabilidad de salvación. La proposición substituye una pena de orden puramente moral á la pena material de la ley".

"La advertencia, con la amenaza de una severidad más grande, no es sino un medio moral. ¿No es, sin embargo, en la práctica de la vida, universal y eficazmente empleada por el padre de familia, el maestro, el patrón? ¿No es en todas partes el preliminar indispensable de toda represión razonada?"

"¿Porqué la sociedad desdeñaría emplear, en su propia preservación, el arma que tanto éxito tiene en la familia, en la escuela, en el taller? Respecto de los culpables, cuyo sentido moral no ha sido alterado, á pesar de la falta cometida —y es necesario decirlo, constituyen el mayor número entre los jóvenes, los domiciliados y los obreros que viven realmente de su trabajo—ella no tendrá menos eficacia que la prisión, tendrá sobre ésta la ventaja de suprimir sus desastrosas consecuencias".



«Hay una idea general que en todas partes se reconoce y es que indispensablemente debe haber una distinción marcada en la represión del hombre que por primera vez comparece ante la justicia y en cuya vida el hecho imputado es como un accidente, y el malhechor de hábitud contra el cual la justicia ha agotado las advertencias y para quien es un juguete desafiar sus decisiones. Para la conciencia que ha conservado intacto el sentimiento del honor y el saludable temor de la prisión, la amenaza de la pena puede producir efectos tan serios, tan eficaces como la pena misma. Puede aún suceder que sea más saludable que la pena. Sin hablar de los efectos detestables causados por los contactos de la prisión ¿cuántos desalencimientos, cuántas rebeliones contra la sociedad, no han nacido de una represión inútil? Para el reincidente, al contrario, en quien el sentimiento moral está profundamente alterado ¿quién podría negar que el solo recurso no está en el sufrimiento físico? Es necesario, pues, en tanto que posible, evitar al uno la prisión y hacerla más rigurosa para el otro.»

La Comisión no cree necesario agregar nada más á tan elocuente demostración. El hombre honorable que delinque porque la fatalidad, porque una casualidad cualquiera lo ha llevado á ese extremo, pero cuyos sentimientos permiten afirmar que no cometerá jamás una nueva infracción, no debe ser llevado á la cárcel, á la par del perdulario, si se quiere hacer acto de estricta justicia.

Por eso, y porque instituciones análogas—la condenación suspensiva y la amonestación judicial—han dado excelentes resultados en Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, etc., la Comisión propone la condenación condicional, que reputa el más perfecto y eficaz de todos estos sistemas que se proponen favorecer la condición del delincuente por primera vez.

Pero para que esta preciosa institución no salga de sus límites precisos y dé todos los frutos que de ella se esperan, se requiere la mayor prudencia en su aplicación;





es necesario que ella no se convierta en manos de los jueces, en una arma de arbitrariedad, y por eso, creemos oportuno reproducir las siguientes palabras de Dalloz que fijan con exactitud el alcance de este favor de la ley: «Ante todo, importa hacer constar que lo que la ley nueva crea en favor de ciertos condenados, no es un derecho sino una mera facultad acordada á los jueces. Corresponde, pues, al juez, examinar si el condenado que se encuentra, por otra parte, en las condiciones legales, *merece personalmente este favor*,—cuestión moral que el Juez resolverá en conciencia. De este punto de vista Mr. Berenger, trazaba al juez la regla de sus deberes, cuando decía: «No se trata de considerar el grado de gravedad de la falta, porque esta apreciación ha debido ser hecha para la aplicación de la pena, sino medir el estado moral del condenado y el grado de garantía que este estado supone.»

Adoptada esta institución, lógicamente debíamos perfeccionar y extender el principio de la individualización de la pena, base de aquella.

Este principio tan justamente sostenido y prestigiado por los más notables publicistas modernos, no es una novedad en nuestra legislación:—él está definitivamente incorporado al Código Penal que nos rige. Las atenuantes y agravantes de carácter personal, la determinación de un minimum y un maximum en las penas, la menor penalidad de ciertos delitos, ya porque no deshonran como el duelo, ya por los móviles que lo inspiran, como el infanticidio, y por fin, la deportación para los criminales incorregibles, adoptada por la última ley de reformas, son otras tantas adquisiciones fundadas exclusivamente en el principio de la individualización de las penas, principio que con razón decimos, entonces, que ha sido francamente admitido por la legislación que nos rige.

Es, Señor Ministro, que el referido principio se ha ido abriendo camino, como se lo abre siempre la verdad,—y si hay algo cierto en materia penal, es que rara vez se



presentan dos criminales iguales. Así como la medicina proclama que no hay enfermedades, sino enfermos, el derecho penal moderno reconoce que no hay crímenes, sino criminales. Cuantas diferencias, en efecto, en la gravedad de un mismo delito según quien lo comete, y según los móviles y causas á que ha obedecido. Y bien ¿no constituye esto la mejor prueba de la necesidad de considerar en la misma proporción, al menos, al delincuente que al delito, para la determinación de la pena?

Supónganse dos hurtos objetivamente iguales, pero cometido el uno por un padre de familia honorable, que necesita llevar á sus hijos el pan que no puede ganar, y ejecutado el otro por un vagabundo que emplea en embriagarse y jugar el producto de su delito. ¿Hay alguna razón de justicia que obligue á condenar á los dos á la misma pena? No, pues, y por eso la Comisión entiende que la individualización de la pena, es el principio que conduce más directamente á la verdadera justicia.

Y aquí conviene para evitar todo prejuicio, recordar las observaciones de Mr. Saleilles en su obra «L'individualization de la peine». «Lo que es necesario notar es que este movimiento de reformas, que es hoy un movimiento de carácter absolutamente científico, ha comenzado por un movimiento de reacción puramente humana, una inspiración de justicia popular, de justicia de opinión. Es el jurado quien primero ha hecho la individualización y la hace todos los días, sin saberlo. Es verdad que la hace con razón, y sin ella, pero es por eso que la ciencia trata hoy de reglamentar lo que no es sino una serie de procedimientos empíricos.»

«No se puede ser muy favorable al jurado, pero es preciso hacerle la justicia de reconocer que ha sido él, sin darse cuenta, el promotor del movimiento, y esto, desde la primera aplicación de nuestro Código Penal francés.»

«La ley, en efecto, no veía más que el crimen, y brutalmente, matemáticamente, aplicaba una pena abstracta,

sin preocuparse del criminal. El jurado tenía á su frente un hombre, un hombre cuya vida y honor tenía en sus manos. ¿Cómo habría quedado indiferente en presencia de este hombre, á lo que pasaba en su conciencia, á lo que eran todos sus antecedentes y toda su vida anterior? Acababa por absorberse de tal modo en la visión del individuo que, contrariamente á la ley, olvidaba el crimen, —y todos los días, vemos que lo olvida.»

«Se ha concluido por clasificar los crímenes, según que tienen ó no las simpatías del jurado; hay toda una categoría para los cuales el jurado olvida siempre el hecho cometido para no ver sino el sentimiento, el instinto apasionado, irresistible, tal vez, de donde ha salido el crimen. Se ha concluido por llamarlos crímenes pasionales.»

«La ley les aplica como á los otros la misma pena legal; ella los ignora. El jurado pasa por encima de la ley, y absuelve. Haciendo esto, hace individualización, y algunas veces muy injusta. Poco importa, es la revelación de un instinto de conciencia, al mismo tiempo que de un principio: se trata de hacer predominar la concepción del individuo sobre la del hecho.»

Este origen popular del principio, tan admirablemente encontrado por el autor citado, servirá para tranquilizar á todos aquellos espíritus imbuidos de ideas de escuela, y á quienes su absolutismo les hace considerar como malo todo lo que pueda creerse que tiene atinencia con las escuelas opuestas.

La individualización de las penas no es fruto de esta ó aquella escuela, ni de este ó aquel pensador; es una intuición de la conciencia, es la aplicación de la idea de la justicia tal como la siente y la entiende la humanidad actual.

No hay que olvidar, por otra parte, como lo observa el mismo autor, que en esta cuestión, y en el terreno de los hechos, las escuelas casi se tocan. «Las soluciones prácticas de la una, dice, son aceptadas por la otra; en realidad los principios teóricos quedan á salvo, pero los





medios prácticos se hacen comunes y se generalizan, que es lo esencial.»

«Recientemente, agrega, en la Revista de Liszt, Makarewicz, exponía, en una demostración magistral, que la oposición que se había tratado de establecer entre la escuela clásica y la escuela positiva, sobre el terreno del derecho penal, al menos, se reducía casi á cuestiones de palabras y que, sobre todos los puntos, en el terreno práctico, iban en cierto modo, al encuentro una de la otra y se hallaban muy próximas á estar de acuerdo.»

De conformidad con estas ideas y sin llevarlas á límites que pudieran parecer exagerados, porque no llegamos siquiera al sistema del Código de Holanda que sólo fija el máximo de la pena sin determinar minimum, hemos tenido especial cuidado de establecer para la penalidad de los delitos, una escala suficientemente extensa para que quepan en ella todas las diferencias provenientes de la naturaleza de la acción y de las condiciones personales del delincuente. Consideramos indispensable para que pueda hacerse una aplicación justiciera y proporcional de la pena, dejar límites amplios á la apreciación judicial.

Con el mismo fin, hemos abandonado el desprestigiado sistema de la enumeración de las circunstancias atenuantes y agravantes, para volver al régimen del Código Tejedor, adoptado por casi todos los Códigos modernos.

Esa enumeración es un obstáculo invencible para una buena distribución de la justicia penal. La infinita variedad de matices que presenta un delito, ya por sus causas, como por sus móviles y fines, ya por sus efectos, ya en fin, por las condiciones personales del agente, y la infinita cantidad de elementos que entran en juego para la apreciación exacta de un hecho criminal dado, hacen imposible una enumeración detallada de todas las circunstancias que pueden influir en la mayor ó menor criminalidad del acto, en la mayor ó menor responsabilidad del delincuente. Esa imposibilidad, perfectamente reconocida por todo el mundo y que ha hecho decir á los autores

que las circunstancias atenuantes y agravantes son indefinibles é ilimitadas, debe ser reconocida también por la ley, porque su empeño en olvidarse de ella, conduce fatalmente á resultados injustos. El delincuente que tiene á su favor, circunstancias, que para la conciencia, atenúan su responsabilidad, debe, sin embargo, sufrir la misma pena que el que no se encuentra en esas condiciones, porque tales circunstancias no figuran en la enumeración legal. Tampoco puede agravarse la pena, en el caso contrario, porque la circunstancia indicativa de la mayor perversidad ó temibilidad, no ha sido establecida por la ley.

Un sistema, pues, que se propone vencer lo que es invencible, y que comporta resultados tan injustos, debe ser pronto y radicalmente eliminado.

Todavía hay una razón más para esa eliminación. Suponiendo que la enumeración completa fuese posible ¿á que hacerlo si con el sistema de no enumerar, los jueces pueden y deben tomar en consideración todos los casos de atenuación ó agravación, que en realidad existen?

La Comisión al proponer esa innovación quiere que los jueces tomen en cuenta las razones de cualquier orden que puedan aumentar ó disminuir la responsabilidad, ya sea en la preparación, en la ejecución ó en las consecuencias del delito, ya provengan de la mayor ó menor gravedad del hecho material ó de la mayor ó menor culpabilidad del agente; quiere, en una palabra, que se aplique al delincuente la pena á que se ha hecho acreedor, tomando en cuenta el hecho y todas sus circunstancias y la persona y todas sus condiciones.

Para la apreciación de las circunstancias atenuantes ó agravantes, no tienen, pues, los jueces, según este sistema, otras limitaciones que las que resulten de la exacta determinación de lo que revista uno ú otro carácter. No pueden tomar como atenuante ó agravante lo que no sea ni una ni otra cosa, pero todo lo que en el concepto social y para la ciencia y la conciencia sea causa de agra-





vacación ó atenuación, debe dar lugar al recorrido de la escala en un sentido ó en otro.

Otra institución adoptada hoy casi universalmente y que también proponemos, es la libertad condicional de los penados que hayan dado pruebas de positiva reforma. Nada más justo, en efecto, si el objeto principal de la pena, es la reforma, que suspender sus efectos, cuando ella ha dado los resultados buscados. Esto en cuanto á la justicia de la institución, que por lo que respecta á sus beneficios, á sus ventajas prácticas, las siguientes palabras del informe presentado á la Cámara de Representantes de Bélgica en 1888, las demuestran de una manera concluyente: «Durante la excarcelación del condenado, ella es un estímulo de buena conducta, un germen de enmienda, una prima ofrecida al detenido arrepentido. Después de obtenida la libertad, ella contribuye eficazmente á mantener al favorecido en la vía del bien, á prevenir su caída.»

La institución que nos ocupa, tiene cierta analogía, por lo menos, en cuanto á sus fines, con lo que establecen los artículos 73 y 74 del Código vigente, pero, en nuestro sentir, la libertad condicional, tal como la proponemos, constituye un sistema más completo y más eficiente.

Derecho á pedir gracia del resto de la pena, que es lo que establece el Código, importa casi una incongruencia, porque derecho y gracia, son términos antinómicos. Pero aparte de esto, consignar que el penado tiene derecho á pedir gracia, no significa la creación de nada preciso ni de nada positivo, porque, en primer lugar, el derecho de petición está garantido por la Constitución, y en segundo lugar, porque la facultad de acordar gracia corresponde siempre al Presidente de la República, independientemente de lo que disponga el Código Penal.

Por otra parte, la gracia extingue completamente la pena y el penado queda librado al freno único de su conciencia y de sus sentimientos. En el sistema de la libertad condicional, el condenado está obligado á observar buena conducta durante todo el tiempo de la condena, so



pena de que no se le cuente en la computación de aquélla, el término que ha durado su libertad; constituye, pues, un resorte poderoso para mantenerlo en el camino del bien. La reforma, queda, asimismo, mejor comprobada; después de esta doble prueba: la de la cárcel y la de la libertad.

La gracia, es, además, un resorte que debe reservarse para los casos excepcionales que le dan su razón de ser; no debe ser una arma ordinaria de gobierno.

Todas estas razones nos han movido, pues, para proyectar esta reforma, respecto de la cual sólo agregaremos que siguiendo el ejemplo de Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Hungría, confiamos a los tribunales de justicia, la aplicación del derecho que establecemos. Nos ha parecido que el reconocimiento de ese derecho, en cada caso, es una función del resorte exclusivo del departamento judicial.

Otra innovación al Código vigente es el concepto de la reincidencia, que según el proyecto, existirá, «siempre que el condenado por sentencia firme, dictada por cualquier tribunal del país, cometiere un nuevo delito.»

La reincidencia hasta hoy ha sido considerada como si la Capital, los Territorios Nacionales y las Provincias, fueran Estados independientes, con relación a la ley penal: sólo se tomaban en cuenta los delitos anteriores cometidos en la localidad donde el reo era juzgado.

Esta situación, completamente irregular, porque es contraria a la ley fundamental del país, debe desaparecer cuanto antes. La Nación es una para el Código Penal, y en consecuencia, es reincidente, todo el que ha cometido un delito en cualquier punto del territorio nacional, y cualquiera que haya sido el tribunal que impusiere la pena. Desde que la ley es una, y desde que el territorio, para esa ley, es también uno, no caben diferencias provenientes de las distintas localidades.

Por lo tanto, si para el Código Penal no hay Provincias, ni Capital, ni Territorios Nacionales, sino la Nación,

queda justificada esta reforma que, partiendo de esa base, no tiene para nada en cuenta, al efecto de que se trata, el lugar donde se ha cometido el delito.

Conviene con este motivo hacer presente á V. E. que el complemento indispensable de esta reforma, porque sin ella sería letra muerta, es la creación de una Oficina Central de Reincidencias, donde consten, con todos los datos necesarios para la identificación del delincuente, las sentencias en materia criminal dictadas por todos los tribunales del país.

La Comisión encarece á V. E. la necesidad de esta Oficina, primero para que la ley se cumpla y segundo, porque es indispensable para combatir la reincidencia, que, como es sabido, constituye una de las grandes preocupaciones de los penalistas contemporáneos.

En cuanto al concepto de que la reincidencia debe ser general y no específica, la última ley de reformas lo ha establecido en su artículo 15 y la Comisión propone su mantenimiento, porque piensa «que la perversidad humana no es menos temible cuando se manifiesta bajo formas diferentes, y porque, como se ha observado con toda justicia, hay naturalezas de una sorprendente movilidad que recorren sucesivamente, en el mal, los caminos más distintos, viéndose á menudo, que grandes culpables, antes de perpetrar el crimen supremo, han sido condenados por la justicia por los delitos más diversos» (Daloz. Supplement V, Recidive-Réligation N°. 12).

Mantenemos también como medio de combatir la reincidencia, la pena accesoria de deportación para los delincuentes, que por el número y clase de condenas sufridas, deben considerarse incorregibles, y á quienes la sociedad en uso de su derecho, debe secuestrar por un tiempo indeterminado.

Hemos incorporado también, con el mismo objeto de impedir el avance de la reincidencia, la disposición de la ley 3335, según la cual los reincidentes por segunda vez, sufrirán la pena en un paraje de los territorios del sud.





La eficacia de la ejecución de la pena, en esta forma, es un hecho bien establecido, porque la observación ha comprobado que los delincuentes ven con verdadero temor la aplicación de dicha ley.

Igualmente, y dentro de los propósitos fundamentales de justicia, de reforma del delincuente y de prevención del delito, que han inspirado las anteriores innovaciones, la Comisión ha modificado, en cuanto á la prescripción, el criterio dominante en el Código vigente.

El solo transcurso del tiempo no puede ser suficiente para que la sociedad quede desarmada respecto de aquel que la ha ofendido en sus más primordiales derechos, como son todos los que se encuentran protegidos por las leyes penales.

¿Qué puede garantizar, en efecto, el tiempo pasado? Cuando más la habilidad del delincuente para substraerse á la acción de la justicia. ¿Y es acaso bastante, esto, para olvidar el delito y para que la sociedad se declare satisfecha? La sociedad puede y debe olvidar y perdonar las infracciones antiguas, pero sólo cuando su autor se ha hecho acreedor á esa magnanimidad, y no puede ni debe declararse satisfecha, sino en cuanto el tiempo transcurrido, ha servido para la reforma del delincuente y para su propia seguridad.

Nosotros, pues, que no vemos garantías de ninguna clase, en el sólo transcurso del tiempo, proponemos en su reemplazo, como base de la prescripción, la buena conducta del perseguido ó condenado, que, como lo hemos insinuado, consulta el triple propósito de la justicia, de la reforma del delincuente y de la prevención de los delitos.

De la justicia, porque, si ella aconseja el perdón de quien ha reparado su falta, mediante una vida honesta y laboriosa, exige en cambio, el castigo del que ha vivido burlándose de la sociedad y sus leyes.

De la reforma del delincuente y de la prevención de los delitos, porque la esperanza del perdón, estimula la buena conducta, y evita nuevas caídas.



En resumen, la sociedad no tiene interés en castigar la infracción antigua cuando la conducta posterior del delincuente le ofrece garantías suficientes de que se ha apartado definitivamente del camino del mal; en tal caso, la pena no tendría razón de ser desde que sin ella se habría conseguido lo que forma uno de sus principales objetos, esto es, la reforma del delincuente. Pero tiene interés y grande de evitar nuevos delitos y necesita entonces, por medio de la pena, buscar la reforma que el tiempo no ha logrado. De ahí la necesidad de que sea la buena conducta la base de la prescripción.

Esta innovación no es, por otra parte, sino la ampliación de la regla consignada en el artículo 16 de la última ley de reformas, que declara que la prescripción queda sin efecto si antes de vencido el término el reo comete otro delito. Nosotros nos limitamos á extender esta disposición, exigiendo buena conducta, que es algo más que no cometer delitos.

Otra innovación, que por el carácter general que reviste, nos parece conveniente indicar en este capítulo, es el sistema que hemos adoptado para legislar la culpa ó imprudencia y el encubrimiento.

Respecto de la primera, en vez de establecer reglas generales, que por su condición de tales, deberán aplicarse á todos los delitos,—sistema seguido por el Código vigente,—hemos preferido el de establecer á continuación de todo delito susceptible de ser cometido por imprudencia, la pena que le corresponde, por razón de esa circunstancia.

El motivo principal de esta reforma, en la que seguimos á los modernos códigos de Italia y Holanda, es que consideramos impropio dictar disposiciones de carácter general, y que, sin embargo, no pueden ser aplicadas sino á ciertos y determinados delitos.

Por esto, y porque las dudas é incertidumbres existentes en esta materia, hacen insegura é ineficaz la generalización, creemos que el mejor medio de legislar la



culpa es el que acabamos de exponer, debiendo agregar únicamente que nos hemos abstenido de definir y dividir la culpa, porque una y otra cosa son prácticamente imposibles, porque la apreciación exacta de la culpabilidad punible de un hecho, depende de mil circunstancias que la ley no puede prever y porque, en fin, nadie mejor que el juez que conoce todas las modalidades y motivos del acto, puede decir si éste se ha cometido con imprudencia ó sin ella.

Sobre los encubridores, pensamos que es un error jurídico manifiesto considerarlos responsables de un delito en que no han participado y que tal vez, han conocido mucho tiempo después de realizado. Por eso decía con toda razón, la Comisión anterior de reformas, que las personas responsables son exclusivamente los autores y los cómplices, y que los encubridores, no forman una tercera categoría de cooperadores.

Lo que corresponde entonces para no consignar, á sabiendas, falsos conceptos jurídicos, y en vista de la conveniencia de castigar los actos de que se hace depender la calificación de encubridores, es hacer de esos actos un delito especial ó imponer á sus autores la pena correspondiente.

Es este el método que seguimos, á cuyo efecto proponemos en la parte especial un capítulo destinado á definir y penar el encubrimiento, como lo hacen muchos Códigos extranjeros.

Simplificación del sistema penal

El Código vigente establece, entre las penas privativas de la libertad, el presidio, la penitenciaría, la prisión y el arresto.

Por causas que todos conocen, y que en realidad provienen de que en un país nuevo, no es posible, por falta de elementos, hacer en un día, lo que es obra del tiempo, dichas penas, hasta hace muy poco, estaban reducidas, en

el hecho, á sólo una—la de penitenciaría. En el establecimiento destinado al cumplimiento de esta pena, estaban aglomerados, desde los condenados á presidio hasta los que sólo debían sufrir arresto.

Esta situación, se ha modificado en algo, es verdad, en los últimos tiempos, en cuanto á los establecimientos penales de la Nación, pero todavía estamos muy distantes de tener todos los que son necesarios para que cada una de las penas que establece la Ley, se cumpla en los lugares y en las condiciones que ella quiere.

Si esto ocurre en la Nación, ¿fácil es comprender las dificultades con que tropiezan las Provincias, especialmente algunas, para hacer efectivas las distintas clases de penas que se acaban de enumerar.

Partiendo, pues, de este antecedente de rigurosa exactitud, porque lo comprueban todos los informes y memorias de la Dirección de las Cárceles y de los Tribunales del Crimen, la Comisión se planteó desde el primer momento, estos dos problemas ¿Vale la pena mantener en la Ley, penas, que en la práctica, no se cumplen? ¿Existen razones de orden científico ó simplemente de conveniencia para mantener esta diversidad de penas?

La primera cuestión fué resuelta negativamente por motivos de evidencia que se imponen y que es innecesario manifestar. No hay objeto de mantener cosas inútiles.

La segunda, fué también resuelta por la negativa, juzgándose que los efectos y fines de las penas privativas de la libertad, se consiguen ampliamente, sin necesidad de subdivisiones que no hacen sino complicar el sistema, sin provecho alguno para nadie.

El Código Penal de Holanda, que es la expresión más avanzada de la ciencia del Derecho Criminal, según la frase de Garraud, y el proyecto de Código Penal Francés, todavía en preparación, no establecen sino dos penas de esta clase: la prisión y la detención.

La tendencia moderna, revelada por estas dos recientes obras, que son el fruto de la ciencia y experiencia de ju-



risconsultos eminentes, es pues, hacia la unificación de las penas privativas de la libertad.

El porqué de esta tendencia, es muy fácil de comprender. La ciencia no respeta lo artificioso, lo que no descansa sobre bases estables, y si hay algo que pueda reputarse mero artificio es esta múltiple división de la misma pena, fundada en detalles sin importancia de su ejecución.

La ciencia no ve en el régimen de esta clase de penas, sino lo que es esencial del régimen mismo, esto es, la privación de la libertad, y la obligación del trabajo; ella no toma en cuenta lo que es puramente arbitrario, lo que no obedece á principio fijo alguno, lo que sólo importa un simple accesorio en lo fundamental del sistema.

Y este procedimiento, tan propio de la ciencia en todas sus manifestaciones, conduce lógicamente á la conclusión de que la pena que descansa sobre la doble base de la privación de la libertad y de la obligación del trabajo, y cuya acción y eficacia estriban solamente en esas condiciones, debe necesariamente ser una, porque en cualquier forma que se aplique, siempre resulta idéntica en su esencia: priva de la libertad y obliga al trabajo.

El tratadista Van Swinderen, en su excelente obra «Exquisse du Droit Penal actuel dans les Pays Bas et à l'étranger», llamado á ocuparse de esta cuestión, se pronuncia por la uniformidad de las penas privativas de la libertad en estos términos: «Yo no vacilo en responder afirmativamente, pues todo sistema penitenciario reposa sobre la doble base de la privación de la libertad y de la obligación del trabajo, lo que conduce naturalmente á la aplicación de un régimen uniforme, á aquel en que estos dos elementos se encuentren mejor combinados; y aunque el objeto de la pena no sea la mejora, la corrección, ni la regeneración, es reprochable todo sistema penitenciario que pierde de vista que toda pena debe tender al noble objeto de hacer nacer en el corazón del preso el arrepentimiento y la virtud, y que este objeto, que constituye un



deber, el Estado no lo cumple, aplicando á los unos un sistema más moralizador que á los otros. ¿Porqué clasificar las penas? No se las puede clasificar sino de la siguiente manera: 1°. en más ó menos alicitivas,—pero la disciplina de toda prisión debe ser de una severidad tal, que no puede llegar á mayor rigor, sin degenerar en crueldad; no es posible, pues, ni disminuirla, ni agravarla; 2°. En más ó menos inamantes,—pero ninguna debe tener ese carácter; 3°. En su mayor ó menor poder de intimidación,—pero ellas deben tenerlo todas en el mismo grado y sin que jamás la intimidación pueda ser obtenida con sacrificio de la justicia; y 4°. en más ó menos reformatoras, pero la ciencia penitenciaria debe siempre, sin excepción alguna, usar de todo su poder para corregir un condenado. No se puede, pues, clasificar las penas sino según su duración—única clasificación lógica. Si la pena, en efecto, intimida, es reformatora y alicitiva, su acción será tanto más eficaz cuanto más larga sea su duración. Por este sistema, la opinión pública no rechazará á aquel que haya sufrido una pena privativa de la libertad de carácter más grave, sino que colocará en la misma línea á todos los que hayan sufrido una encarcelación, con lo cual ganarán la seguridad y la moral pública. Por consecuencia, la sola pena privativa de la libertad que deben adoptar las legislaciones modernas, es la de prisión con trabajo obligatorio.

Tarde en su «Philophie penale» dice: «No menos que la dulcificación de las penas, su simplificación parece ser una consecuencia de la civilización. Comparad la extravagante colección, el atroz museo de los antiguos instrumentos de barbarie, de suplicios y de tormentos sin número que llenan los anales del Derecho Penal, con la simplicidad con la uniformidad de nuestros medios represivos, que van siempre simplificándose y uniformándose: la muerte pura y simple, sin agravación, la multa, la prisión, el trabajo».

Justificada así la solución negativa de la segunda cuestión que indicamos al principio de este capítulo, y tenien-



do presente por otra parte, la imposibilidad práctica de aplicar en nuestro país tantas penas diferentes de una misma clase, la Comisión, procediendo siempre prudentemente y colocándose, en todos los casos, en un término medio razonable, propone sólo la disminución de las penas privativas de la libertad, no obstante reconocer que la unificación está más en las tendencias modernas, y reúne mayor número de ventajas.

Las penas que el proyecto suprime son las de arresto y penitenciaria, dejando subsistentes el presidio y la prisión—ésta con un término y consecuencias diferentes de la actual,—y agregando la de detención.

La supresión de la pena de arresto es una necesidad imperiosamente sentida, porque es ya un dogma de la ciencia penal, que el encierro sin la obligación del trabajo, produce efectos completamente contrarios á los que se buscan por medio de la pena.

La conglomeración de delinquentes en una cárcel donde se lleva una vida de holgazanería, no hace sino romper y crear profesionales del delito.

La prisión, tal como esta organizada después de la Ley de reformas, es decir con la obligación del trabajo, no difiere de la de penitenciaria que establece el Código vigente, sino en cuanto á su duración y á otros detalles de menor importancia, y en el hecho, hasta se sufre en los mismos establecimientos penales.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, y que en realidad son penas completamente equivalentes, por cuya razón no hay objeto alguno en mantener las dos, hemos optado por la de prisión, dándole la extensión de la actual de penitenciaria, y pensando que ella es preferible por dos razones: 1°. porque el término es más propio desde que la penitenciaria no es una pena, sino un régimen penal, ó el establecimiento donde ésta se cumple; y 2°. por la preocupación vulgar de atribuir á la pena de penitenciaria un carácter inhumano, que se avendría mal con la aplicación de esa pena, así entendida, á delitos de poca monta.



Hemos agregado la pena de detención, teniendo especialmente en cuenta ciertos delitos y cierta clase de delinquentes. No hemos creído, por ejemplo, que los delinquentes políticos, que los funcionarios públicos que cometen algunas infracciones sin mayor gravedad en el ejercicio de sus funciones, deban ser tratados como los delinquentes comunes, colocados á la par de ellos, en los mismos establecimientos, y sometidos á la obligación del trabajo.

Los motivos que imponen esta diferencia, todos los conocen;—se trata de delitos que no deshonran, y de delinquentes que no necesitan ser reformados del punto de vista moral. La pena no debe, pues, ser igual á la de los demás delinquentes, como no es igual el concepto social que unos y otros inspiran.

En resumen, el proyecto establece como penas privativas de la libertad, el presidio con trabajos forzados en establecimientos especiales, la prisión con trabajo obligatorio y reclusión celular en las horas no destinadas al trabajo ó á la instrucción, en establecimientos también especiales, y la detención, que podrá sufrirse en cualquier cárcel y sin obligación de trabajo.

De esta manera, damos un paso hacia la unificación, pero respetamos lo que está tradicionalmente arraigado en nuestra legislación, esto es, el trabajo forzado para el presidio, el trabajo común para las penas inferiores.

Ahora, ante el hecho de que algunas provincias, por la escasez de sus recursos, no puedan crear y sostener los establecimientos penales que se requieren, hemos establecido que los condenados á presidio, prisión, deportación ó detención, serán admitidos en los respectivos establecimientos nacionales, con cuya medida queda salvado uno de los inconvenientes que podrían impedir la aplicación de las penas, tal como el proyecto las establece.

Antes de dejar de lado esta parte del trabajo, la Comisión desea hacer constar que, deliberadamente, no ha querido establecer para el presidio y la prisión, más reglas





que los trabajos forzados para el primero y el trabajo obligatorio y la reclusión celular para la segunda, porque entiendo que es de positivas conveniencias, que salvo aquellas reglas fundamentales, la organización y régimen de los presidios y prisiones, sea obra de leyes ó reglamentos especiales.

Si hay alguna cuestión palpitante en la actualidad, en la esfera del Derecho Penal, es indudablemente la que se refiere al régimen penitenciario. Ella preocupa á todos los gobiernos, es objeto de preferente atención de parte de todos los que se dedican al estudio de las ciencias sociales, y frecuentemente es discutida en congresos internacionales, que buscan con anhelo su mejor solución.

Bien pues, si este es el estado de la cuestión, ¿para qué incorporar á una ley que debe ser relativamente permanente como el Código Penal, sistemas que todavía están en tela de juicio? ¿No importaría ésto, en cierto modo, impedir ó dificultar la rápida implantación de los progresos que día á día se efectúan?

La Comisión así lo piensa, y en consecuencia, deja librado á la reglamentación, bajo la base de las reglas antes indicadas, la elección del lugar donde deban establecerse los presidios y cárceles, la distribución de los condenados en clases, la elección del trabajo, en fin, todo lo relativo á la organización del régimen que corresponda.

Procediendo así, la Comisión, no hace, por otra parte, sino seguir el sistema que se observó en la redacción del Código de Holanda: «El proyecto de la Comisión Real y el primitivo proyecto gubernativo, dice von Swinderen, contenían algunas disposiciones relativas á la organización de las prisiones, que la ley no ha adoptado, abandonándolas á una ley especial. El trabajo obligatorio, agrega, es un elemento esencial de la prisión, que debe ser consignado en la ley, en tanto que la organización ulterior, debe ser abandonada á disposiciones reglamentarias».

Pasando ahora á penas de otro orden, mantenemos

todas las del Código vigente, con excepción de la de destierro.

La de muerte, no obstante la disidencia de dos de los miembros de la Comisión, Dres. Rivarola y Beazley, fué aceptada por la mayoría, pero limitada á casos muy excepcionales, y establecida en forma tal, que aún dentro de éstos, constituirá una excepción. La Comisión propone, en efecto, para los homicidios que hoy se castigan con la pena de muerte, la aplicación de ella ó la de presidio por tiempo indeterminado, de modo que esta opción que se deja á los jueces, conducirá seguramente á restringir más la aplicación de dicha pena, y reservarla solo para algún crimen verdaderamente atroz.

El proyecto contiene también algunas disposiciones nuevas, que tienden no sólo á establecer mayores garantías de acierto, sino también á obtener una uniformidad completa en la aplicación de dicha pena en la República, porque debido á diferencias en la legislación de las provincias,—unas exigen sentencia confirmatoria y por unanimidad de votos del Tribunal Superior, y otras no,—puede ocurrir que un reo se salve de la pena de muerte en Catamarca, porque hubo un voto disidente, y sea condenado en la capital por el mismo delito, aunque concurra la misma circunstancia del voto disidente. A evitar estas injusticias, responden, pues, las disposiciones que consigna el art. 6º. del proyecto.

La pena de multa, que no puede faltar en un sistema penal para delitos leves, ya que ofrece las ventajas de no aumentar inútilmente la población de las cárceles y de no afectar la persona del delincuente, es aplicada en mayor proporción que en el código actual, y á fin de que no sea ilusoria por la insolvencia ó la mala voluntad, se dispone que en caso de no pagarse en el término que el juez señala, el condenado sufrirá prisión que no excederá de año y medio.

El destierro lo hemos suprimido, porque en la actualidad, dados los vínculos de estrecha amistad que nos unen



á todos los países, ha perdido completamente su eficacia, y porque aparte de esto, es desigual y de muy difícil cumplimiento. Es desigual, porque para el que cuenta con medios de fortuna, la residencia en otro país es una incomodidad muy soportable, en tanto que no lo es para el que carece de ellos. Y es de difícil cumplimiento, por la casi imposibilidad de impedir su quebrantamiento, sobre todo en un país de las condiciones territoriales del nuestro. X

Esta pena, además, ha sido casi exclusivamente reservada para los delincuentes políticos, y la experiencia ha demostrado que ella sólo ha servido para preparar revoluciones en el extranjero con mayor libertad. La pena de detención en la forma y en las condiciones, que establece el proyecto, la reemplaza ventajosamente.

Proponemos, sin embargo, la expulsión del país, pero no como pena, de los que habiendo cometido delitos en el extranjero, no hayan sido allí juzgados, y cumplido su pena. Al país no le conviene de ninguna manera, tener en su seno sujetos de esta clase.

Finalmente, y para concluir con este capítulo, observaremos á V. E. que habiendo instituído la condenación condicional, la Comisión entiende que ninguna pena corporal podrá ser redimida por dinero.

Esta gracia que han acordado leyes anteriores, y que es tan desigual é injusta, queda sustituida por aquella nueva institución, que permite salvar de la cárcel á todo el que lo merece, sea rico ó no lo sea.

Disposiciones tendientes á suplir vicios y deficiencias del código actual.

LIBRO 1º.

El Código vigente no contiene regla alguna sobre la aplicación de la Ley con relación al territorio. La gran mayoría de los códigos modernos, dedican, sin embargo, á este punto, su primer capítulo, y nosotros, siguiendo estos precedentes de la legislación universal, proponemos las dis-



posiciones respectivas, porque consideramos indispensable que sea la Ley misma la que fije con toda precisión su alcance jurisdiccional. A este fin responde el art. 1º. del proyecto.

Al art. 48 del Código actual, correspondiente al 3º. del Proyecto hemos agregado, para completar el principio de la retroactividad de la Ley en cuanto sea favorable al procesado y penado, la disposición que prescribe que en el cómputo de la prisión preventiva, se observará siempre la Ley más favorable para el procesado. La siguiente transcripción del acta respectiva de la Comisión, revelará con toda claridad, el concepto y el alcance del precepto agregado: «Se hace notar que de las dos leyes, una puede ser favorable al procesado en un punto, en la benignidad de la pena, pero desfavorable en el cómputo de la detención preventiva, y que en estas condiciones, hay que aplicar las dos leyes, cada una en la parte favorable».

La otra modificación que se observa al mismo artículo 48, responde al propósito de evitar la reapertura de los procesos en los casos en que se dicte una ley más benigna mientras se cumple la condena. Esta ley debe aplicarse solamente, cuando consten en el mismo proceso las circunstancias que invoque el reo como motivos de la disminución de pena.

En las disposiciones relativas á la multa, hemos suplido otra deficiencia del Código actual, estableciendo que en cualquier tiempo que el reo la satisficiera, será puesto en libertad. El interés de la ley es que se cumpla la pena principal que ella fija, y no la supletoria. En cualquier tiempo, puede pues, el reo, pagar la multa para hacer cesar la prisión.

La reparación de los perjuicios morales y materiales causados por el delito, es otro punto que el Código vigente legisla de una manera manifiestamente incompleta. Los arts. 47, 139, 176 y 225, son disposiciones aisladas que no responden á un plan uniforme, como la materia lo exige. La simple declaración de que la aplicación de la pena, es





sin perjuicio de las acciones del damnificado para pedir la correspondiente indemnización, no importa establecer nada de efectivo ni de práctico, para ese objeto, y la obligación del dote en los delitos contra la honestidad, y de la restitución de las cosas sustraídas ó defraudadas, no contemplan sino dos clases de delitos, olvidando que hay muchos otros que causan perjuicios, aún mayores.

Es indispensable, por consecuencia, la modificación de esta parte del Código, en dos sentidos: 1°. en el de que la reparación del perjuicio sea impuesta conjuntamente con la pena; y 2°. en que dicha reparación se extienda á todos los delitos susceptibles de producir un daño moral ó material.

Del primer punto de vista, la modificación se justifica plenamente, por las consideraciones expresadas por la Comisión revisora anterior, que transcribimos: «Si el delito es un quebrantamiento del orden jurídico, que debe hacerse cesar y reponerse del modo más perfecto posible, es evidente que el poder social debe proceder al restablecimiento del orden alterado, obligando al delincuente á resarcir todos los daños causados por la alteración. Una pena que solo tiende á reparar el daño moral causado á la sociedad, descuidando el resarcimiento del perjuicio real inferido á la víctima del delito, no llena los objetos racionales de la penalidad, ni justifica suficientemente el ejercicio del derecho de represión por el Estado. Histórica y teóricamente, el Estado, en materia penal, no es más que el depositario del derecho de defensa, inherente á cada hombre. La fuerza del individuo ha sido reemplazada por la fuerza del Estado en la evolución de la sociedad, pero el fin no ha cambiado, ni tiene porque cambiar: es, y tiene que ser siempre, proteger al individuo y á las instituciones protectoras del individuo» (Exposición de motivos del Proyecto de Código Penal de los Dres. Piñero, Rivarola y Matienzo, pág. 37).

La exactitud de estos razonamientos, se evidencia con solo esta pregunta: ¿sería justo que el Estado, que toma

á su cargo el restablecimiento del orden alterado por el delito, se preocupara solo de sí, y del daño indirecto que ha recibido, y olvidara al principal ofendido y el daño real que éste ha sufrido?. Tal procedimiento, por parte del Estado, importaría un acto de tan irritante injusticia, como la que cometería un padre de familia defendiendo sus intereses personales, y abandonando los del hijo que está bajo su protección.

La reparación de los perjuicios causados á la víctima del delito, debe ser, pues, un objeto tan principal, como la aplicación misma de la pena.

Ahora bien, ¿cuál es el medio más conducente para la realización de este fin?. En nuestra opinión, el de imponer al Juez, en todos los casos, la obligación de condenar al delincuente al resarcimiento de los daños y perjuicios, en la forma y con la extensión que consignamos en el título respectivo.

La objeción que podría hacerse á este sistema que de según el Código Civil, la indemnización del daño causado por el delito, sólo puede ser demandada por acción civil independiente de la acción criminal, no tiene ya fundamento, por una de esas anomalías de nuestra legislación, en el derecho positivo que rige en la Capital y Territorios Federales. El Código de Procedimientos en lo Criminal, ha derogado, en efecto, ese precepto del Código Civil, disponiendo que la sentencia, en el juicio penal, debe resolver todas las cuestiones referentes á la responsabilidad civil que hubiesen sido objeto del juicio.

Pero aparte de ésto, el principio consagrado por el Código Civil, es necesario que desaparezca en la legislación de la República, primero por razón de materia, y segundo, por motivos de conveniencia.

Por razón de materia, porque todo lo que se refiere á la pena,—y en la pena está comprendida la reparación del perjuicio, como se ha demostrado,—corresponde al Código Penal.

Por motivos de conveniencia, porque entregando á la



justicia del crimen estas cuestiones, se evita la multiplicidad de los procesos y los consiguientes perjuicios, á lo que se debe agregar que racionalmente, un hecho es mejor juzgado cuando se le examina en conjunto, que cuando se estudia sólo por partes.

Resumiendo, resulta que la modificación que en esta parte proponemos, se encuentra perfectamente fundada, y que en definitiva, ella no tiene más mérito que la incorporación al Código Penal de un principio ya establecido en otro Código Nacional, y que la jurisprudencia de los tribunales aplica constantemente, con resultados muy satisfactorios.

La reforma, del segundo punto de vista que hemos indicado, no requiere mayores explicaciones. Los delitos contra la honestidad y contra la propiedad, no son los únicos que causen perjuicios. El homicidio que deja en la horfandad y la miseria á una familia, las lesiones que imposibilitan á un hombre para ganarse el sustento diario, ó se lo impiden durante un tiempo, los ultrajes al honor que hacen perder una situación cómoda y cierran las puertas del crédito y del trabajo, la concurrencia desleal en el comercio, que conduce á la ruina, y hasta la simple interceptación de una carta, de la que puede depender todo el porvenir, son causa de perjuicios morales y materiales de tanta ó mayor importancia que el hurto y la defraudación. ¿Por qué entonces limitar la obligación de indemnizar? Nó: todo delito, de cualquier naturaleza que sea, susceptible de producir un daño material ó moral, obliga á su autor á la indemnización correspondiente.

La Comisión, penetrada de esta necesidad de reparar los daños del delito, y dispuesta á que la obligación respectiva del delincuente sea realmente efectiva, y no pueda eludirse en modo alguno, propone por fin, como medios de llegar á este resultado, los tres siguientes: 1°. Que la indemnización sea fijada prudencialmente por el Juez, en defecto de plena prueba; 2°. Que la obligación de indemnizar sea preferente á todas las que contrajere el respon-





sable, después de cometido el delito, incluso el pago de las multas; y 3°. Que el producto del trabajo del condenado á presidio ó prisión, se destine, en primer término, al pago de esa indemnización.

En las causas que eximen de responsabilidad, hemos introducido las modificaciones que pasamos á señalar.

En el inciso 1°, teniendo en cuenta que las enumeraciones son difícilmente completas, hemos substituido la que dicho inciso contiene, por un término generico que comprenda todas las causas de irresponsabilidad de origen psíquico. El término adoptado «estado de enajenación mental», llena, en nuestro sentir, aquel objeto, porque dentro de él caben todas las alteraciones de la mente y de la voluntad, ya provengan de un estado permanente ó de un estado meramente transitorio, ya sean el resultado de una enfermedad, como la locura en cualquiera de sus formas, de una anormalidad como el idiotismo, ó de una perturbación momentánea como la embriaguez, que no sea habitual, ó el justo dolor.

Complementamos la legislación sobre este punto, proponiendo la reclusión del agente en un manicomio, del que no podrá salir sino despues de comprobarse que ha desaparecido el peligro de que se dañe á sí mismo ó á los demás.

No es posible poner en la calle á un loco peligroso, y que ya ha demostrado serlo con la ejecución de un delito. Las más elementales nociones de prudencia y conservación imponen esta medida, que se practica y está establecida en otras naciones.

Tampoco constituye ésto una novedad en nuestra legislación general, porque el Código Civil autoriza el encierro de los locos en esas condiciones. Nosotros no hacemos, pues, sino seguir sus indicaciones, con la diferencia de que la ejecución de esa medida la imponemos como una obligación á cargo del Juez del Crimen, porque nos parecería completamente ilógico, que el juez que tiene en sus manos la prueba fehaciente de la locura y de sus peligros, tuviera

Restitucion de los jueces por ligeros

ra que recurrir á otro juez para ordenar el encierro. Los locos delinquentes deben depender de los Jueces del Crimen en cuanto á su libertad, y sin perjuicio de que la declaración de incapacidad, á los efectos civiles, la curatela y todo lo relativo á sus bienes y demás derechos, sean del resorte de la jurisdicción civil.

Los incisos 2º. y 3º. los hemos reúndido en uno, estableciendo la irresponsabilidad absoluta de los menores de 14 años, y borrando la distinción que aquellos hacían, según que el mayor de 10 y menor de 15, hubiese obrado ó no con discernimiento. No creemos que la sociedad tenga interés ni necesidad de castigar á niños menores de 14 años; creemos, al contrario, que la sociedad y el delincuente de esa edad, ganan con que no se aplique pena alguna. El menor que ha sufrido una pena, se siente ya diferente y extraño al resto de la sociedad, se considera un perseguido de las leyes y de las autoridades, de quienes se declara enemigo; pierde todo rubor, y es arrastrado fatalmente por esa situación de espíritu, á la caída definitiva. Esto, sin hablar de lo que se aprende en las prisiones, al lado de otros menores también, pero ya veteranos del crimen. Ante estos resultados de la condena, tenemos razón, pues, para decir que la sociedad y el delincuente salen ganando, con declarar exentos de pena á los menores de 14 años.

Pero del menor como del loco que ha delinquido, la sociedad tiene que defenderse, y entonces nada más natural que la disposición que proponemos en el inciso 2º. del artículo 41 del proyecto. Cuando por las condiciones personales del menor, ó de sus padres ó guardadores, resultare peligroso dejarlo á cargo de éstos, se ordenará su colocación en un establecimiento destinado á corrección de menores.

La justicia de esta disposición, en cuanto á las condiciones que harán obligatorio el depósito del menor, es evidente. Si el menor es uno de esos seres impulsivos, que no se detienen ante ninguna consideración, y que no





tienen respeto por nada, ó si sus padres no tienen hábitos morales, ó son de los muchos que dejan en el abandono á sus hijos, el único medio de prevenir la pérdida completa del menor, será que la sociedad lo recoja y lo coloque en los establecimientos correspondientes.

El inciso 5º,—3º. de nuestro proyecto, ha sido alterado en su redacción, con el propósito de dar mayor claridad al concepto. Alguna vez se ha sostenido que la fuerza moral á que se refiere el inciso, puede ser la ira, el dolor ú otro sentimiento análogo, y á fin de evitar esta errónea interpretación, consignamos expresamente que la eximente sólo comprende al que obrase impulsado por amenazas de sufrir un mal grave é inminente.

En la legítima defensa, hemos incluido el inciso 11 del Código, porque pensamos que están comprendidos en dicha causa de irresponsabilidad, los actos de fuerza que el referido inciso enumera.

Los incisos 9º. y 10, los hemos reducido á uno—el 8º, porque ambos se refieren á la defensa de otro, sea éste un pariente ó un extraño.

Se ha suprimido el artículo 82, porque se observó que en muchos casos, la falta de aviso á la autoridad, puede provenir de ignorancia ó simplemente del temor á las incomodidades y molestias consiguientes, y que, por lo tanto, era injusta la presunción general que el artículo establecía. Esto no obstante, la Comisión entiende que la fuga y ocultación del hecho, debe ser apreciada por el Juez como antecedente ilustrativo, á la par de todos los demás, para decidir, en cada caso, sobre la existencia ó inexistencia de la eximente en cuestión.

Hemos suprimido igualmente el inciso 6º, porque el hecho que menciona, no es, ni puede ser considerado delito, y porque aquí se legisla únicamente sobre la irresponsabilidad de los que cometen actos delictuosos.

El inciso 14, está comprendido en el 5º, que prevé los casos de defensa de la persona ó derechos, y nada más típico como defensa de la persona y de los derechos,

Fuerza moral

Legítima de
fensa

Supresion de
art. 82 de
Codigo.

Supresion de
inciso 6º
art. 81.

Idem del in-
ciso 14.



que la acción de la mujer que hiere ó mata al que intenta violarla ó robarla.

Idem de los
incisos 12 y
13.

La supresión que también se ha efectuado de los incisos 12 y 13, responde á esta idea:—que la irresponsabilidad alcance sólo al padre, marido ó hermano que la merezcan, es decir, á aquellos á quienes la vista del doloroso espectáculo, dadas sus condiciones personales, sus antecedentes y la situación de su espíritu, les haya producido una enajenación momentánea. No ha creído la Comisión que pueda reconocerse el *derecho de matar* en tales casos; tampoco ha creído que todos sin excepción, los que se encuentran en esas condiciones, lleguen á un estado de perturbación mental,—y entonces, ha pensado con razón, que no podía establecer como regla absoluta la irresponsabilidad, y que haciendo obra de individualización, debía librar al Juez la facultad de absolver según las circunstancias particulares del hecho. Es lo que proponemos, mediante el párrafo último del inciso 3º. del artículo 85, cuya mejor explicación son las siguientes palabras de los miembros de esta Comisión, Doctores Piñero, Rivarola y Ramos Mejía. El primero dijo: «La cuestión del adulterio no puede ser considerada de una manera uniforme, porque en todas las esferas de la sociedad, las relaciones conyugales no tienen la misma delicadeza. Trátandose de la clase baja del pueblo, es sabido que á veces el hombre elige como esposa, á una mujer cuya falta de honestidad le consta. También se ha comprobado en algunos procesos, que el marido ha consentido el adulterio de su esposa, ó que él mismo la ha impulsado á cometerlo. En tales casos, y en otros que podría citarse, el Juez debe tener completa libertad para apreciar los hechos y negar la exención de responsabilidad. Teniendo presente las consideraciones anteriores, votaré por la supresión del inciso, pero esto no importará coartar el derecho que tiene todo hombre, sobre todo los de cierta clase social, para ampararse de la exención de responsabilidad, cuando procede impulsado por la excitación que le produce el



adulterio de la mujer». El segundo dijo: «Que al suprimir en su anteproyecto la disposición sobre el cónyuge, tuvo presente los casos en que la exención de irresponsabilidad se impone: que, al efecto, en el artículo 27, exceptuaba de responsabilidad al que hubiere cometido el hecho en un estado de perturbación mental cualquiera, en cuyos términos estaba comprendido el impulso motivado por el justo dolor, y que, á pesar de haber sido substituida la palabra «perturbación», por la de «enajenación», créé que la disposición siempre será aplicable». El Doctor Ramos Mejía dijo, por último, con referencia á las anteriores palabras del Doctor Rivarola, que la exención será aplicable, porque el nuevo término «enajenación», es más vasto que el anteriormente propuesto, porque comprende toda perturbación, inclusive la producida por la embriaguez.

«En cuanto al inciso 13, del mismo artículo 81 del Código, que exime de pena al padre que hiera ó mate al que encuentre yaciendo con su hija ó hermana menor de 15 años, también es eliminado, por las mismas razones que han motivado la supresión del precedente». (Actas de la Comisión).

En la tentativa, proyectamos dos modificaciones que responden también á la idea de la individualización, al principio de que debe considerarse al criminal lo mismo que al hecho.

Tentativa.

La primera es que para la apreciación de los actos constitutivos de la tentativa, deben tenerse en cuenta los antecedentes personales del agente. Se encuentra, por ejemplo, á un hombre que se ha introducido á una casa ajena, y se comprueba que ese hombre ha sufrido varias condenas por delitos contra la propiedad. Dados esos antecedentes, nadie puede dudar que su entrada á aquella casa responde al propósito de hurtar ó robar, y no al de violar simplemente el domicilio. Pues bien, la Comisión pretende que eso que todo el mundo piensa, lo piense también el Juez, y que, en consecuencia, castigue el he-

Para apreciarlo, deben tenerse en cuenta los antecedentes personales.

cho como tentativa de robo ó hurto, y no como violación de domicilio.

Desistimiento
No se pre-
sume volun-
tario en el
reincidente.

La segunda, es que la ley presume voluntario el desistimiento, á menos que se trate de un reincidente, en cuyo caso regirá la presunción contraria. ¿Por qué ha de creerse que desiste espontáneamente de un delito el que ha cometido uno anterior, cuando su resolución de realizarlo, ha tenido ya un principio de ejecución? ¿No es mucho más verosímil suponer en tal caso, que si no llevó adelante su intento, fué por motivos ajenos á su voluntad y que no pudo vencer?. La Comisión así lo piensa, y por eso propone la referida modificación.

Autores y
cómplices.

Los tres títulos del Código sobre autores, cómplices y encubridores, los hemos reunido en uno solo, después de la eliminación de los últimos, por las razones que hemos expuesto en otra parte de esta nota.

Con referencia á los autores, en los dos primeros incisos del Código, nos hemos limitado á modificar la redacción, á fin de precisar los conceptos y evitar redundancias, y en el tercero, á suprimir la enumeración de los medios de determinar á la ejecución de un delito, de acuerdo con las ideas ya manifestadas sobre la inconveniencia de las enumeraciones.

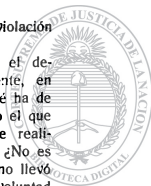
Los artículos 22, 23 y 24, han sido suprimidos, porque son simples soluciones de casos particulares, justas algunas, como la del 22, injustas otras, como la del 23, pero que de todos modos no deben figurar en la Ley, porque los preceptos generales, en concordancia con las circunstancias especiales de cada caso, son suficientes, al efecto.

Impresión de
las disposi-
ciones sobre
el complot.

Se ha resuelto así mismo suprimir las disposiciones sobre el complot, teniendo en cuenta que él no constituye sino una forma especial de la codeincuencia ó de la complicidad. Los que formen un complot, serán autores ó serán cómplices, con arreglo á las disposiciones generales, y sin necesidad alguna de dictar á su respecto preceptos de orden particular.

Idem sobre
las bandas.

Lo mismo hemos resuelto con referencia á las bandas.





de las cuales hacemos un delito en la parte especial del Código, siguiendo el ejemplo de muchas legislaciones, que consideran con toda razón, que una asociación cuyo fin es el delito, debe ser castigada por el hecho sólo de su organización.

Por lo demás, las reglas generales sobre tentativa, ó delincuencia y complicidad, serán suficientes para determinar la parte de responsabilidad que tiene cada uno de los miembros, sea en los delitos cometidos ó tentados, sea en la formación misma de la banda.

En la complicidad, sólo hemos modificado la redacción del inciso C. del artículo 4º. de la Ley de Reformas, y agregado al D. una condición esencial para que no se consideren cómplices de los delitos cometidos por la prensa, á los editores y demás personas que prestan la cooperación material para la publicidad. Esa condición, que responde al propósito de evitar la impunidad de tales delitos, es que el autor sea conocido y se encuentre en el país.

El concurso de delitos, legislado por el Código en el título de la agravación de las penas, es objeto de un título especial en nuestro proyecto, y las modificaciones que hemos introducido, tienen por objeto llegar, lo más aproximadamente posible, á la justa proporcionalidad del castigo.

La extinción de acciones y de penas, que el Código no legisla sino respecto de una de sus causas,—la prescripción,—es materia de un título especial en nuestro proyecto. En él se establecen las distintas causas de extinción, y se fija el alcance de cada una, como lo hacen casi todos los Códigos extranjeros.

Las disposiciones aisladas que contiene el Código vigente, sobre ejercicio de las acciones, han sido reunidas del mismo modo en un título especial, que lógicamente debía figurar en esta parte del Código, puesto que constituyen reglas de carácter general.

Fuera de esta modificación, más de forma que de fon-

Concurso de delitos.

Extinción de acciones y penas.

Ejercicio de las acciones.



do, hemos dividido las acciones en tres categorías, según la naturaleza de los delitos, limitando la acción de oficio respecto de algunos, que por sus caracteres, debían dejarse á la iniciativa privada.

El último título del proyecto en la parte general, no figura en el Código actual, y tiene por objeto fijar el alcance de algunos de los términos empleados en el Código. Su utilidad nos parece evidente, porque servirá para evitar dudas y controversias en la aplicación de la Ley.

LIBRO SEGUNDO

En lo que forma la materia de este libro, nuestra preferente atención, se ha contraído al doble objeto de atenuar, en ciertos delitos, el rigor excesivo de la ley actual, y de no dejar sin castigo acto alguno que revista los caracteres del delito.

V. E. conoce las frecuentes críticas, de que ha sido objeto la penalidad de ciertos delitos, y especialmente de algunos contra las personas y la propiedad, y sabe también que desgraciadamente, muchas de ellas son, á todas luces, justificadas.

El delito de lesiones, por ejemplo, tiene como mínimo seis meses de arresto, y esta pena forzosamente tiene que ser aplicada, cualesquiera que sean el número y calidad de las atenuantes, y aunque se trate de una contusión levisima. La Comisión tiene acerca de esta penalidad el juicio de muchos funcionarios judiciales, y ninguno discrepa, en cuanto á la necesidad de disminuirla á términos más moderados.

Si este mismo delito de lesiones es cometido por un marido contra su mujer, la pena no baja hoy de un año de prisión, y no son pocos los casos en que un simple golpe de puño entre marido y mujer, ha dado lugar á la aplicación de esta pena.

Por lo que se refiere á los hurtos, el P. E. no obstante la prevención que inspiran en general, los delitos

contra la propiedad, ha hecho uso, más de una vez, del derecho de conmutación que le acuerda la Constitución, para suavizar los efectos de la excesiva penalidad de la Ley.

Satisfaciendo, pues, esta necesidad, hemos procedido á una revisión completa de las penas, reduciéndolas en algunos delitos, ya por disminución del minimum, ya bajando el maximum, ya por fin, limitando uno y otro de los dos extremos.

Debemos agregar también, que al practicar esta revisión tan prolijamente como nos ha sido posible, hemos notado que en ciertos delitos, el reproche á la penalidad podrá ser, no por excesivo rigor, sino por exceso de benignidad, y que en tales casos hemos aumentado las penas mediante el procedimiento opuesto al anterior, esto es, subiendo el minimum, el maximum, ó los dos á la vez.

No nos detenemos á indicar cuales son las modificaciones que en los dos sentidos anteriores hemos hecho, porque el simple cotejo de los artículos del Código y del proyecto, las revelan, pero si agregaremos, que con el sistema de no enumerar las causas de atenuación y agravación, y con dar suficiente extensión á la escala de penas correspondientes á cada delito, se facilita grandemente la aplicación proporcionada de la pena, y se remedia, en gran parte, ya la extrema lenidad, ya el excesivo rigor de la Ley.

Pasamos ahora á dar cuenta de las otras reformas é innovaciones que hemos hecho en esta parte del Código.

En los delitos contra el honor, incluidos en el Código entre los delitos contra las garantías individuales, bajo el rubro «De las calumnias é injurias», la Comisión propone cambios de importancia.

La larga experiencia de algunos de nosotros en la magistratura y en el foro, nos ha llevado á este triste convencimiento:—que el honor, es decir, el bien más precioso y querido del hombre culto, no tiene protección en la Ley, porque ésta y la jurisprudencia que le ha dado vida, con-



ducen, á fuerza de exigencias, sutilezas y distingos, á la completa impunidad de los delitos de este género.

Se le dice á un hombre cualquiera y á boca llena en una reunión pública ó por medio de la prensa, «ladrón y estafador», y el que es víctima de esa calumniosa imputación, acude á los tribunales pidiendo el castigo del delincuente, como justa reparación del daño que se le ha inferido. ¿Qué resuelven los jueces, en tal caso, después que el acusador ha probado que efectivamente el acusado le ha dirigido esa imputación, y cuando el último nada ha dicho en su descargo, y ni siquiera ha comparecido al juicio? Pues, asómbrase V. E. Los jueces reconocen que, en realidad, un hombre le ha dicho á otro, «ladrón y estafador», pero el acusado es absuelto, porque la imputación no es de un hecho concreto, y el acusador, es decir, la víctima, es condenado al pago de las costas, y á Dios gracias, á nada más.

Pero se ha imputado un hecho concreto; se le ha dicho al acusador que en tal día, á tal hora y en tal sitio cometió un robo. Viene la acusación, y viene la consiguiente absolución, porque el hecho no es lo suficientemente concreto; falta la indicación de la persona robada, circunstancia indispensable para que haya robo.

Llegamos, sin embargo, á la imputación de un hecho que por reunir todas las indicaciones necesarias y aún algunas más, no es posible dejar de considerarlo como concreto. ¿Piensa V. E. que en ese caso el delincuente es condenado? Pues también es absuelto, porque no hay prueba de que la imputación de tal hecho, fuese á sabiendas de su falsedad.

Se acusa por injurias; y tampoco, falta nunca la razón para absolver; unas veces falta el ánimo de injuriar; otras veces, la acusación es por injurias graves, y como para el Juez resultan sólo leves, opta por no imponer pena, porque no puede separarse de los términos de la acusación; algunos, en fin, constituyen calumnia, y el acusador es



mandado á que haga uso de su derecho ante otro Juez y por otra vía

No se detienen aquí los recursos que la Ley y la jurisprudencia acuerdan á los autores de un delito contra el honor, para asegurar su impunidad.

Se sigue un largo juicio, con su cortejo inacabable de gastos, pérdida de tiempo é incomodidades; se obtiene sentencia condenatoria, después de muchísimo tiempo; está próxima la sentencia de segunda instancia, que, al fin, hará justicia; parece inevitable, pues, el castigo y la reparación; pero nó, todavía queda el recurso supremo,—la retractación, y el acusado que durante todo el juicio, ha persistido en sus imputaciones, declara que las retira, á más no poder, y viene el sobreseimiento definitivo de la causa, con la declaración de que su formación no perjudica el honor y buen nombre del acusado.

Todo esto, Señor Ministro, que parece mentira, es el resultado de lo que ocurre en nuestros Tribunales, en cuanto á los delitos contra el honor.

En presencia de tal estado de cosas, la Comisión piensa que esto no puede llamarse justicia, y que no es así como se debe proteger el honor de los habitantes del país. Propone, en consecuencia, una modificación radical en la legislación de esta materia, persuadida de que se evitarán muchos motivos de intranquilidad, y muchas causas de perjuicios, tanto públicos como privados, el día que la Ley consiga la disminución de estos delitos, mediante el castigo efectivo de los que se produzcan.

En consonancia con las anteriores ideas, y teniendo en cuenta que bajo esta faz, la persona puede ser afectada en tres formas, cada una con distinta gravedad y con efectos diferentes,—imputación de un hecho que pueda perjudicar el honor y la reputación, divulgación de esa imputación, y ofensas de otro orden, de palabra ó de hecho,—hacemos de estas tres distintas agresiones al honor, otros tantos delitos independientes, calificando de injuria la primera forma, de difamación la segunda, y de ultraje



la última. La calificación de calumnia, que encierra en el concepto general la idea de falsedad de la imputación, la reservamos para los casos en que, admitiendo la prueba de la verdad de ella, el acusado no la produjere.

Como V. E. vé, legislando en esta forma, tomamos en cuenta todos los hechos que importan un ataque al honor, y á la vez los precisamos en términos comprensibles para todos, porque todos saben lo que es una ofensa, y todos aprecian con igual facilidad lo que afecta el honor y la reputación.

Nos separamos así de la división de las injurias en graves y leves, — concepto esencialmente relativo y muy difícil de deslindar en la práctica,— y hacemos á un lado igualmente la enumeración de unas y otras, por las mismas razones que nos han hecho criticar más de una vez en el curso de esta nota, ese sistema de legislar.

Nos hemos separado también, en cuanto á la calumnia, de la doctrina corriente entre ciertos autores y que ha prevalecido en nuestra jurisprudencia, de que ella existe cuando la imputación se hace á sabiendas de su falsedad. Para nosotros, hay calumnia, cuando el acusado de este delito no prueba la verdad de su imputación.

¿Por qué, se preguntará, esta noción del delito de calumnia? Porque en primer lugar, es eso lo que piensa la sociedad en que vivimos y para quien legislamos: todo el mundo califica de calumniador al que lanza una imputación contra el honor de otro, y no la prueba. Y en segundo lugar, porque nos parece racional que nadie juegue con el honor ajeno que es en definitiva, lo que se autoriza con la doctrina á que nos hemos referido. Luego, pues, la conciencia de la falsedad no debe cambiar la naturaleza del delito, sino constituir meramente una circunstancia agravante.

Lo mismo pensamos del otro requisito que dicha doctrina requiere, — el de que la imputación sea de un delito perseguible de oficio. Tan gravemente puede afectarse el honor de un individuo, con la imputación de un delito.



como con la imputación de un vicio ó de una conducta de esas que causan la pérdida moral y social de un hombre.

Finalmente, rechazamos en absoluto el otro requisito de que el delito imputado debe ser determinado y concreto, porque, á nuestro juicio, no hay diferencia, del punto de vista del honor, entre llamarle á un hombre estafador y decirle que ha cometido una estafa.

Hemos completado el proyecto sobre estos delitos, estableciendo que cuando la imputación se dirige contra una corporación, sociedad ó institución, y ésta puede afectar el honor ó la reputación de las personas que constituyen ó representen á las mismas, el delito se entenderá cometido contra éstos, quienes podrán, por consecuencia, ejercer las acciones correspondientes.

El proyecto contiene otras dos disposiciones que no figuran en el Código vigente, y cuya justicia nos ha parecido evidente.

La primera es que, el acusado por injuria ó difamación podrá ser admitido á probar la verdad de la imputación, en los tres casos que establece el artículo respectivo.

No se puede desconocer el derecho del ofendido para exigir la prueba de la imputación que se le ha dirigido, porque ese es el mejor medio de que se haga en el asunto plena luz, y no quede para siempre la terrible duda que la calumnia engendra. La declaración de que no hay prueba de la imputación ó de que ella es falsa, es la mejor satisfacción del agravio recibido.

Tampoco es posible desconocer la justicia y la conveniencia general de que se admita la prueba, cuando se trata de imputaciones que han tenido por objeto defender un interés público actual ó dirigidas á un funcionario público, con motivo del ejercicio de sus funciones, porque á todos interesa en el primer caso porque no se coarte la libertad de defender lo que afecta á la colectividad, y porque en el segundo, la sociedad tiene derecho. para sa-



ber como desempeñan sus cargos los funcionarios públicos, y si son ó no ciertas las imputaciones que se hacen contra su honor.

La segunda disposición que hemos insinuado, es la de que se impondrá la pena de la injuria ó del ultraje si así correspondiere al hecho acusado, aún cuando la acusación fuere por calumnia ó difamación. Este artículo se propone concluir con lo que pasa en la actualidad, que aún cuando haya prueba de la injuria y el juez la reconoce, no aplica, sin embargo, la pena, porque la acusación fué por calumnia, ó viceversa.

En los delitos contra la honestidad, hemos agregado algunas disposiciones que hacían falta en el Código vigente, y que son urgentemente reclamadas por imperiosas necesidades de moral pública. Esas disposiciones son las del art. 151, que se propone combatir la iníame trata de blancas, la del art. 152, que castiga á los que explotan en su beneficio la prostitución, á los que viven de ella, la del 153, que reprime á los fabricantes ó circuladores de imágenes ú objetos obscenos, con que se invaden las calles de las principales ciudades de la República, y la del 154, que pena igualmente á los que hacen obscenidades en sitios públicos, contra los cuales, no obstante ser muchos, la autoridad ha sido hasta hoy impotente.

En los matrimonios ilegales, establecemos una distinción impuesta por la diferente gravedad del hecho. No es lo mismo el matrimonio celebrado entre dos personas que conocen el impedimento, que aquel en que una de ellas lo ignora. En el primer caso, el daño es solo á la sociedad; en el segundo, es á esta misma y conjuntamente al contrayente engañado. Castigamos, pues, al último, con una pena más grave que al primero.

En los delitos que el Código llama contra el estado civil, y que nosotros calificamos de supresión y suposición del estado civil, empleamos para evitar dudas é incertidumbres una fórmula genérica, dentro de la cual caben todos los actos de cualquier naturaleza, que produzcan por



resultado, hacer incierto, alterar ó suprimir el estado civil de otro. La suposición de preñez ó parto, y la exposición ú ocultación, que no son más que actos tendientes á aquel fin, lo legislamos como meras circunstancias agravantes.

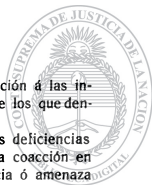
En el título que proyectamos «Delitos contra la libertad», ponemos el caso del que redujere á una persona á servidumbre, ó á otra condición análoga, como ha ocurrido alguna vez, y del que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella, hechos calificados de crímenes por la Constitución Nacional. Agregamos también algunas circunstancias que agravan el hecho, y que no figuran en el Código, como son las siguientes: 1°. cometer el hecho con violencias ó amenazas, ó con propósitos de lucro, ó con fines religiosos ó de venganza; 2°. cuando resulte grave daño á la persona, á la salud ó á los negocios del ofendido, siempre que el hecho no importase otro delito mayormente penado.

Hemos incluido en este título muchos delitos que el Código coloca entre los que son especiales á los empleados públicos, siguiendo el método que nos hemos trazado, y cuya exposición será la materia del capítulo siguiente.

Basta, por ahora, decir, que en el art. 148, nos ocupamos de los delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos, y que su enumeración comprende, á nuestro juicio, todos los casos en que la libertad individual resulte suprimida ó disminuida, ó simplemente afectada por un acto emanado de aquellas funciones.

Establecemos bajo el mismo título indicado, un delito que no ha sido previsto anteriormente: el del que condujere á una persona fuera de las fronteras de la república con el propósito de someterla ilegalmente al poder de otro ó de alistarla en un ejército extranjero. Legislamos igualmente como delitos contra la libertad, la substracción ú ocultación de un menor de diez años, modificando en esto al que fija la edad de nueve,—su falta de presentación por parte del encargado, la inducción á la fuga de un ma-





yor de diez y menor de quince, y la ocultación á las investigaciones de la justicia ó de la policía, de los que dentro de aquellas edades se hubieren fugado.

Coacción.

Salvamos también en este mismo título las deficiencias del Código actual, en cuanto no reprime la coacción en general, ó sea el hecho del que use violencia ó amenaza para compeler á otro á hacer ó no hacer ó tolerar algo, en cuanto no castiga la amenaza de violencia pública ó de otros delitos, y en cuanto ha olvidado también la represión de las violencias ó amenazas no previstas especialmente.

Violación de domicilio.

El capítulo segundo de este título, se ocupa de la violación de domicilio, y en él nos pronunciamos expresamente sobre la cuestión que discute la doctrina, respecto de lo que debe considerarse el domicilio, y acerca de la manera de expresar su voluntad el morador. Con relación á la primera, consideramos que el delito existe cuando se entra en morada ó casa de negocio ajena, en sus dependencias, ó en el recinto habitado por otro. Y con respecto á la segunda, entendemos que la entrada, para que haya delito, debe ser contra la voluntad expresa ó presunta, de quien tenga derecho de excluirla.

Reputamos igualmente que comete el mismo delito, el que encontrándose en domicilio ajeno, no se retira después de recibir la intimación de salir. Esto constituye un complemento forzoso de la inviolabilidad del domicilio.

El artículo 159, prevé otro caso de violación del domicilio: el del funcionario público que lo allana, sin observar las formalidades que para el efecto exige la ley.

Violación y revelación de secretos.

El Código legisla en dos partes la violación y revelación de secretos, y nosotros reunimos toda la materia en un solo capítulo, garantizando de una manera mucho más efectiva la inviolabilidad de la correspondencia, porque penamos todos los actos de apoderamiento de toda clase de documentos privados, carta, telegrama, etc., y la supresión ó desviación de su destino y la publicación de su contenido, estableciendo á la vez penas más severas para e-



empleado de correos ó telégrafos que viole en cualquier forma la correspondencia.

Las dos últimas disposiciones de este capítulo, se refieren á la violación del secreto profesional y á la divulgación de actuaciones ó procedimientos que por la ley deben quedar secretos.

En el capítulo cuarto del título de que nos ocupamos, hemos previsto dos delitos que no existen en el Código actual, y cuya creación era necesaria para garantizar la libertad de trabajo ó industria. Esos delitos consisten, el primero, en emplear violencias ó amenazas contra otro para restringir ó impedir el ejercicio de su industria ó comercio, y el segundo, en valerse de maquinaciones irraudulentas, sospechas malévolas ó cualquier medio de propaganda desleal, para desviar con un fin interesado, la clientela de un establecimiento comercial ó industrial.

Delitos contra la libertad del trabajo e industria.

El capítulo séptimo se propone asegurar la libertad de la prensa, de que tampoco se ocupa el Código vigente. En él proyectamos el castigo de todo el que impidiere ó estorbare la libre circulación de un libro ó periódico que no contenga escritos ilícitos.

Delitos contra la libertad de la prensa.

El capítulo octavo, es completamente nuevo en el Código Penal; se refiere á los delitos contra la libertad política, y forman parte de él las disposiciones penales de la Ley de elecciones nacionales, con las correcciones y modificaciones que hemos creído convenientes.

Delitos contra la libertad política.

Repetimos en este caso lo que dice *La Exposición de motivos*, que acompaña el proyecto de 1891: «Un país republicano no puede dejar de prever en su Código Penal, las violaciones de la libertad política previstas en los suyos por los países monárquicos, y mucho menos, cuando ellas son tan frecuentes como en la República Argentina. Libertad tan esencial al funcionamiento del régimen representativo, debe estar protegida tan permanentemente como la vida, la seguridad, la propiedad y el honor de los ciudadanos, en el mismo cuerpo de legislación que estos derechos fundamentales, y no debe quedar librada á

las contingencias de una legislación especial, dictada casi siempre bajo la presión de los intereses y de las pasiones del momento». (pág. 155).

Después de determinar en general la penalidad de todo acto de violencia, amenaza, tumulto ó fraude, que tienda á impedir ó estorbar el ejercicio de algún derecho político, nos ocupamos preferentemente de garantizar la libertad del sufragio, penando todo acto de coacción ó de fraude en la emisión del voto, ó en la preparación y terminación del acto electoral.

Concluye este capítulo, negando á los autores de delitos contra la libertad política, el beneficio de la condena- ción condicional, medida que juntamente con la acción del artículo 81, acordamos á cualquier ciudadano, y la obligación que imponemos al Ministerio Fiscal de continuar hasta su terminación estas causas, tienden á desarraigar de nuestras costumbres el funesto vicio del fraude y la mentira, en los actos más solemnes de las democracias.

Después de ésto, viene en nuestro proyecto el título de «Delitos contra la propiedad».

En el hurto, robo, extorsión, y estafas y otras defraudaciones, las principales reformas son las siguientes: 1°. Disminución de algunos de los hechos que importan hurto calificado; 2°. Borrar la división, á los efectos de la penalidad, de delitos de menor ó de mayor cuantía. La Comisión piensa sobre este punto, que la importancia pecuniaria del delito, es motivo que corresponde al Juez apreciar juntamente con las demás circunstancias del hecho y del agente para la determinación de la pena; y 3°. Inclusión en las estafas de algunos hechos que no están consignados en el Código. Entre éstos, puede citarse el hecho de los empresarios constructores de obras, ó vendedores de materiales de construcción, que en la ejecución de la obra ó entrega de los materiales cometen un acto fraudulento, capaz de poner en peligro la seguridad de las personas ó de los bienes; el fraude cometido en per-



juicio de alguna administración pública; y por fin, el hecho tan frecuente del que consume bebidas ó alimentos en los establecimientos que ejercen ese negocio, ó se hace prestar un servicio de los que se pagan al contado, como ser conducido en un carruaje, por ejemplo, y no págase el precio correspondiente al ser requerido con tal objeto.

En el capítulo de este mismo título, destinado á los quebrados y otros deudores punibles, las modificaciones son de mayor importancia. Hemos empezado por precisar el débito, á fin de hacer desaparecer las incertidumbres que resultan del sistema actual del Código, que no expresa sino el concepto de quebrado fraudulento, y que obliga á recurrir al Código de Comercio para saber quién debe ser considerado tal. Desde que se trata de un delito, lo natural es que sea el Código Penal quien lo defina y establezca con sus requisitos y condiciones. Es lo que hacemos en el proyecto, disponiendo que el delito de quiebra fraudulenta se comete, cuando un comerciante declarado en quiebra, ha ejecutado en fraude de sus acreedores, algunos de los hechos que se enumeran. Estos actos han sido limitados á los que realmente revisten el carácter de fraudulentos, como son simular ó suponer deudas, enajenaciones, gastos ó pérdidas, no justificar la salida ó existencia de bienes que debiera tener, substraer ú ocultar alguna cosa que correspondiera á la masa, ó conceder ventajas indebidas á cualquier acreedor.

La quiebra culpable ha sido también definida en sus elementos constitutivos, los que se reducen á actos de negligencia ó imprudencia manifiestos.

No hemos olvidado tampoco la quiebra de una sociedad que ejerce el comercio, considerando como autores de quiebra fraudulenta ó culpable, según el caso, á los directores ó administradores que hubieren cooperado á la





do para defraudar á sus acreedores hubiere cometido alguno de los actos que dan lugar á la quiebra fraudulenta de los comerciantes. Actos de esta naturaleza deben ser penados, tanto en el comerciante, como en el que no lo es, sin más diferencia que una atenuación en la pena.

Inspirados en los propósitos y preceptos de la Ley Comercial como de la Civil, erigimos también en delito la connivencia del deudor y un tercero, que tenga por resultado la concesión de ventajas especiales, en caso de aceptación de un arreglo.

Usurpación.

En el delito de usurpación, queremos evitar hechos que no están comprendidos en el Código, y que, sin embargo, violan la propiedad raíz en una forma perfectamente delictuosa. El individuo que por violencia, engaño ó abuso de confianza, se apodera, instalándose como en casa propia de una casa desocupada, hecho que tantas veces se comete, especialmente en las grandes ciudades, priva de uno de los atributos de la propiedad, causa un perjuicio considerable, y es, por tales razones, y por la audacia del acto, merecedor de una pena. A fin, pues, de proteger la propiedad inmueble contra estos atentados y otros análogos, extendemos el concepto de la usurpación, disponiendo que la comete el que por violencia, engaño ó abuso de confianza, despojare á otro de la posesión ó tenencia de un bien inmueble, ó de un derecho real, ó al que con violencia ó amenaza turbase la posesión de un inmueble.

Al legislar sobre este delito, hemos tenido también presente que en ciertos puntos del territorio, el uso de las aguas de represas, ríos, arroyos, etc., es una necesidad vital de la población y de sus industrias, y que, en consecuencia, era necesario proteger eficazmente el derecho de cada cual, con relación á ellos. Es lo que hacemos por el artículo 198, habiéndonos preocupado de prever todos los casos y situaciones.

Delitos contra
la libertad
intelectual,
revolucionaria
industrial.

Castigamos en el capítulo séptimo, los delitos contra la propiedad intelectual é industrial. La Comisión no se explica porque la propiedad intelectual, la más querida,



tal vez, por su dueño, no es protegida por la Ley penal, á la par de cualquier otra. El inconveniente no puede nacer del precepto constitucional, porque éste, en vez de desconocer, afirma la propiedad de esta clase,—y si bien es cierto que autoriza su limitación en cuanto al tiempo, no es menos cierto que la propiedad existe y que ella tiene un carácter permanente, mientras no se dicte la Ley reglamentaria. Proponemos, pues, en virtud de estas ideas, que se castiguen los atentados contra la propiedad intelectual, en la extensión y por las causas que expresamos en el artículo 199.

Respecto de la propiedad industrial, hemos incorporado al proyecto, las disposiciones respectivas de la Ley de marcas y patentes, amoldándolas á los principios generales que han presidido la confección de nuestro trabajo, y sometiéndolas á una revisión esmerada.

En el título «Delitos contra la seguridad pública», hemos incluido algunos preceptos del Código que figuran como delitos contra la propiedad particular en el capítulo «De los incendios y otros estragos», y hemos generalizado algunas de sus disposiciones sobre caminos de hierro, á todas las vías ú obras destinadas á la comunicación pública por tierra ó por agua. De acuerdo con este plan, castigamos á todo el que inutilice ó destruya esas obras, al que impida ó estorbe la ejecución de las medidas adoptadas para seguridad de las mismas, al que empleare cualquier medio para detener ó entorpecer la marcha de un tren ó hacerlo descarrilar, al que ejecute cualquier acto tendiente á interrumpir el funcionamiento de un telégrafo ó teléfono destinado al servicio de un ferrocarril, al que arroje cuerpos contundentes ó proyectiles contra un tren ó tranvía en marcha, al que practicare cualquier acto tendiente á poner en peligro la seguridad de una nave ó construcción flotante, á á detener ó entorpecer la navegación, al conductor y demás empleados de un tren ó de un buque que abandonaren su puesto durante su servicio respectivo, y por último, al que interrumpiere ó entorpeciere

Delitos contra
la seguridad
pública.

la comunicación telegráfica ó telefónica, ó resistiere voluntariamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida.

Entre esta misma clase de delitos, comprendemos la piratería, cuyas disposiciones son, con pocas variantes, las de la Ley de 14 de septiembre de 1865.

Vienen por fin, á completar este título, el capítulo de los delitos contra la salud pública, que contiene varias disposiciones que hacían falta en el Código actual.

Inútil nos parece la justificación de todas las disposiciones enumeradas en el capítulo, que como V. E. verá, tienen por objeto el castigo de actos que constituyen graves atentados contra la salud pública, que el Estado tiene el deber de proteger por todos los medios á su alcance.

Respecto del ejercicio ilegal de la medicina, nos ha permitido V. E. algunas breves consideraciones.

El curanderismo, en todas sus formas, es uno de los peores enemigos de la salud, á la vez que un medio inícuo de explotación; lo primero, porque cuando no precipita la muerte, con procedimientos absurdos y antihigiénicos, deja avanzar las enfermedades mediante el empleo de medios completamente pueriles é inócuos; lo segundo, porque aprovecha del sufrimiento y del dolor, para hacerse pagar generosamente su engaño y su mala fe. La Comisión piensa, pues, que es necesario, una vez por todas, acabar con este mal, que desgraciadamente, se extiende en todas partes, gracias á la divulgación de ciertos medios que pueden dar resultado en manos de un hombre de ciencia, pero que son una desgraciada parodia en poder del charlatán.

No podíamos prescindir, por otra parte, ya que hacemos obra nacional, del clamor público contra estos profesionales del engaño y la mentira; no podíamos desatender las quejas que todos los días oíamos, no podíamos en fin, ser sordos á la protesta de todos los hombres cultos y de las corporaciones científicas más autorizadas.





Hemos, procedido, en consecuencia, á legislar esta materia, cuidando todos los detalles, á fin de llegar á la extirpación completa de este reconocido mal.

Agregaremos que hemos tenido presente para este capítulo, el proyecto que el P. E. remitió al H. Congreso en 1904.

El título octavo del proyecto — «Delitos contra el orden público» — contiene algunas disposiciones adoptadas por la Ley de reformas, y otras que no se encuentran en el Código, pero que son verdaderas garantías del orden; — entre las últimas, están la instigación pública á cometer delitos, la instigación al odio contra determinada persona ó institución, y la asociación para cualquier fin ilícito.

En el título de los delitos contra la seguridad de la Nación, están todas las disposiciones de los títulos 1°. y 2°. de la Ley de 14 de septiembre de 1863, con algunas variantes de redacción, y además, algunos preceptos nuevos que tienden á completar la materia. Entre éstos, citamos el artículo 235, que castiga con las penas de la traición los actos de este carácter ejecutados contra una potencia aliada de la República, en guerra contra un enemigo común; el 239 que reprime al que revelare secretos políticos ó militares concernientes á la seguridad, á los medios de defensa ó las relaciones exteriores de la Nación; el 241, que prevé los casos de levantamiento indebido de planos de fortificaciones, buques ú otras obras militares, y de introducción clandestina ó engañosamente á dichos lugares; y el 242, que impone pena al que encargado por el Gobierno Argentino de una negociación con un Estado extranjero, la condujere de un modo perjudicial á la Nación, apartándose de sus instrucciones.

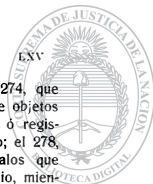
Todos estos hechos deben figurar en el Código, dados los peligros que entrañan y los perjuicios que pueden producir.

Nuestro título décimo, está calcado también sobre la ley citada, pero hemos agregado en vista de mejorar la legislación el art. 244 que reprime al que ejecutare cual-



quier acto encaminado á alterar ó destruir, por medios ilícitos la Constitución Nacional; el 245, que reproduce el art. 27 de la Constitución; el 247, que considera sedición el hecho de levantarse en armas contra algún gobierno de provincia ó de territorio nacional; el 248, que declara reos del mismo delito á los que proponen por medios ilícitos alterar ó cambiar la Constitución de una Provincia; y á los que se alzan en armas para sustraer á la obediencia de una Provincia á algún Departamento ó Partido de ella; y el 249, que castiga á los que se atribuyen los derechos del pueblo y á los que se alzan públicamente para impedir, fuera de los casos especiales, la ejecución de las leyes ó de las resoluciones de los funcionarios públicos.

En el título once, hemos combinado las disposiciones del Código con las de la ley de 14 de setiembre, metodi-zándolas, completándolas, y agregando algunas nuevas. Entre éstas, citamos el art. 262, que castiga al que citado legalmente como testigo, perito ó intérprete, no compareciere ó no prestare la declaración ó exposición respectiva; el 266, que reprime al que públicamente llevare insignias ó distintivos de un cargo que no ejerza, ó se arrogare grados académicos, títulos profesionales ú honores que no le correspondan; el 267, que se refiere á los funcionarios públicos que dictan resoluciones contrarias á las leyes, que cumplieran resoluciones ilegales ó no ejecutaren las leyes cuyo cumplimiento les incumbe; el 268, que castiga al funcionario que ilegalmente omitiere, rehusare hacer ó retardare algún acto de su oficio; el 269, que impone pena al jefe de la fuerza pública, que no prestare como corresponde el auxilio que le requiera la autoridad civil; el 270, que prevé el caso del funcionario que requiera la fuerza pública para oponerse á la ejecución de órdenes de autoridad legítima; el 271, aplicable al funcionario que hace abandono de su cargo con daño del servicio público; el 272, tendiente á impedir el nombramiento de personas que no reúnan las condiciones legales; el 273, que pena la violación de los sellos puestos por la autoridad para asegu-



rar la conservación ó identidad de una cosa; el 274, que reprime la substracción, ocultación ó mutilación de objetos destinados á servir de prueba, ó de documentos ó registros guardados en el interés del servicio público; el 278, que castiga al funcionario público que admite regalos que le fueren presentados en consideración á su oficio, mientras permanezca en el ejercicio de su cargo; el 290, que considera delictuoso el hecho de que un abogado ó mandatario judicial, defienda ó represente simultánea ó sucesivamente á partes contrarias en el mismo juicio; el 292, que castiga al Juez que niega ó retarda la administración de justicia; el 293, aplicable al funcionario que dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes cuando tiene esa obligación, y por fin, todo el capítulo XIII, que castiga el encubrimiento. El título XII, reúne las disposiciones de la Ley 3972, sobre falsificación de moneda, y las correspondientes del Código sobre falsificación en general. Señalamos entre las disposiciones nuevas la equiparación á la moneda, de los títulos de la deuda provincial ó municipal y sus cupones, los bonos ó libranzas de los bancos provinciales ó municipales, y los títulos, cédulas y acciones al portador, emitidas legalmente por los bancos y compañías autorizadas para ello; la disposición del artículo 306, que castiga al funcionario ó Director de banco ó compañía, que emitiera ó autorizare la emisión en título ó peso inferiores al de la Ley, ó billetes de bancos ó títulos con cantidad inferior á la autorizada; el artículo 314, que se refiere al médico que diere por escrito un certificado falso, concerniente á la existencia ó inexistencia, presente ó pasada, de alguna enfermedad ó lesión; el 319, referente á los que hicieren alzar ó bajar el precio de las mercaderías, fondos públicos ó valores, por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas, por reunión ó coalición entre los principales tenedores de una mercadería ó género, con el fin de no venderla, ó de no venderla sino á un precio determinado; el inciso 2º. del mismo artículo, sobre los que ofrecieren fondos pú-



blicos ó acciones ú obligaciones de una compañía, disimulando ú ocultando hechos ó circunstancias verdaderas, ó haciendo entrever hechos ó circunstancias falsas; y finalmente, el artículo 320, que castiga á los directores ó administradores de una sociedad anónima que prestan su concurso á actos contrarios á las leyes ó estatutos, y á consecuencia de los cuales, aquella queda en la imposibilidad de atender sus compromisos, ó en la necesidad de ser disuelta.

Como podrá observarse, después de esta larga y fatigosa enumeración, todos los nuevos delitos que creamos en esta parte del Código, responden á necesidades manifiestas del orden social, y á la garantía de respetables y primordiales derechos, tanto públicos como privados. Por lo demás, ellos figuran en la mayoría de los Códigos extranjeros, especialmente modernos, y no hay razón alguna para que no sean incorporados á nuestra legislación positiva.

Mejor ordenación de las distintas materias

Con referencia á esta parte del proyecto, sólo diremos que el método seguido por el Código, es, á nuestro juicio, defectuoso, y que su comparación con el que hemos adoptado, y que vamos á exponer, demostrará la exactitud de esta opinión.

En la parte general, empezamos por legislar la aplicación de la ley con relación al territorio y al tiempo, que en un orden lógico parece que debe ser lo primero: antes de todo, la ley debe decir dónde y cuándo se aplicará.

La determinación de las penas, debe venir en seguida, porque ellas no sólo son la base de todo el Código, sino porque es indispensable su previo conocimiento para legislar otras materias de la propia parte general, como la complicidad y la tentativa.

Forman parte de la legislación sobre las penas, las reglas sobre la forma de su aplicación, y es el cumplimiento de ellas, la indemnización de los perjuicios inferidos á la



víctima del delito. Nos ocupamos, pues, como materia más próxima, y en seguida de las penas, de la condenación condicional,—forma de aplicación de una pena—y de la reparación de perjuicios—complemento de todas.

Una vez hecho ésto, y en posesión de las penas, ¿qué es lo que hay que hacer en orden sucesivo y lógico? Establecer la responsabilidad por la violación de la ley, que es lo que dá lugar á la aplicación de las penas, determinar los casos en que no hay responsabilidad ó en que ella está modificada, y dar la regla para la fijación de la pena, según el mayor ó menor grado de responsabilidad. Por eso, el título quinto del proyecto, se ocupa de esa materia.

En ese estado, parece que ya se necesita decir, á quienes se aplica la ley, y es lo que hacemos, ocupándonos de los recs de tentativa, de los autores y de los cómplices, y dictando en seguida reglas especiales para todos ellos, cuando son reincidentes.

Ahora, como los delinquentes de que acabamos de ocuparnos, pueden haber cometido varias infracciones, es claro que se necesitaba tratar de la concurrencia de delitos.

Sancionado todo esto, y establecido el derecho de castigar y á quienes, con todos los detalles correspondientes, debe decirse, á continuación, cuando ese derecho se pierde, y á tal fin responde el título X el lugar que ocupa.

¿Pero quienes pueden pedir la aplicación de la pena? Era lo único que faltaba para completar el mecanismo de la Ley, y, por consecuencia, se requería, el título «Del ejercicio de las acciones».

Tal es el plan que hemos desarrollado, y que responde al propósito de observar un orden lógico y sucesivo en la exposición de las distintas materias, y no incurrir en el defecto de pasar sin gradaciones de un tópicó á otro completamente distinto.

En la parte especial, nos hemos preocupado de seguir el mismo método, formando las grandes divisiones que constituyen los títulos, por la naturaleza del principal derecho lesionado, y agrupando luego en capítulos, todo lo que

tenga relación con aquel. Así, por ejemplo, para la materia del título primero, tomamos todos los delitos de que puede ser objeto la persona física, y bajo el título «Delitos contra las personas», legislamos en capítulos separados todos los hechos que pueden afectar la vida ó la salud—el homicidio, las lesiones, las agresiones con armas, y el abandono de las personas.

En otro título—el quinto—y será el último que citaremos—también por vía de ejemplo, consideramos los delitos contra la libertad, y en él incluimos todos los actos delictuosos de que puede ser objeto aquel derecho, en cualquiera de sus manifestaciones, y sea quien fuere la persona que lo cometa. Por eso, bajo este título, nos ocupamos de los delitos contra la libertad individual, ya sean cometidos por particulares ó por funcionarios públicos, de la violación del domicilio, que afecta un derecho emergente de la libertad individual, de la violación de secretos, que se encuentra en idénticas condiciones, de los delitos contra la libertad del trabajo é industria, contra la libertad de cultos, de reunión, de la prensa y de la libertad política.

Siguiendo este plan que reputamos el mejor, porque en él todo se sucede y enlaza, forzoso nos ha sido suprimir algunos títulos del Código vigente, y cambiar la ubicación á muchos de sus artículos. No nos detendremos á indicar cuales son estas supresiones y cambios, porque sería innecesaria, pero indicaremos una entre muchas, que revelará la superioridad de nuestro método.

El Código tiene un título «De los delitos peculiares á los empleados públicos», y si se examinan una por una sus disposiciones, se verá que todos y cualquiera de los delitos que dichos empleados pueden cometer, afectan alguno de los derechos principales que sirven de base á la división que contiene el proyecto. ¿Por qué entonces esta calificación aislada é independiente de toda otra, cuando la calidad de los delincuentes no ha servido ni podido servir en el Código para la división de los delitos? Las





condiciones personales del agente, de cualquier naturaleza que sean, no pueden influir en la calificación del delito; ellos sólo influyen para la apreciación de la responsabilidad, y es á ese único efecto, que el proyecto tiene en cuenta el carácter de funcionario público.

Queda así esbozado, en sus líneas generales, el plan que hemos adoptado y seguido, y que en nuestro concepto, responde mejor que cualquier otro, á la idea de ir desarrollando la materia del Código, en un orden lógico y sucesivo.

Con ésto, quedan también cumplidos los propósitos de la presente nota, á la que solo falta agregar que la Comisión pone á disposición de V. E., las actas de sus reuniones y el concurso personal de sus miembros.

Saludamos á V. E. con nuestra más distinguida consideración.

DIEGO SAAVEDRA.—*Francisco J. Beazley.*
—*Rodolfo Rivarola.*—*Cornelio Moyano Gacitúa.*—*Norberto Piñero.*—*Jose María Ramos Mejía.*



PROYECTO DE CÓDIGO PENAL



LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO I

APLICACIÓN DE LA LEY PENAL

a) **Con relación al territorio.**

Art. 1º. Este Código se aplicará:

- 1º. Por delitos y faltas cometidas, ó cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina, en buques que lleven su bandera, ó en buques mercantes de bandera extranjera, que se hallen en sus aguas jurisdiccionales;
- 2º. Por delitos y faltas cometidas en el extranjero por agentes ó empleados de autoridades argentinas, en desempeño de su cargo;
- 3º. Por delitos de piratería, cuando los responsables cayeren bajo el poder de la Nación.

No se aplicará por delitos cometidos á bordo de buques mercantes de bandera argentina, en aguas jurisdiccionales de otro Estado, si fueren reprimidos por éste.

Art. 2º. Salvo los casos del artículo precedente, los que hubieren cometido en el extranjero hechos ú omisiones calificados de delitos por este Código, sin haber sido juzgados

y cumplido su condena, serán expulsados del país, si la autoridad extranjera competente, requerida para su extradición, no la verificare.

Si quebrantaren la expulsión serán juzgados como si hubieren cometido el delito en el país.

No se comprenden en las disposiciones de este artículo a los autores de delitos políticos.

b) Con relación al tiempo.

Art. 3°. Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito, fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo ó en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benéfica.

Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará á la establecida por esa ley, si el penado lo solicitare, y las circunstancias invocadas constaren de autos.

En el cómputo de la prisión preventiva, se observará separadamente la ley más favorable al procesado.

TÍTULO II

DE LAS PENAS

Art. 4°. Las penas que este Código establece, son las siguientes: muerte, presidio, prisión, detención, deportación, multa é inhabilitación.

Pena de muerte:

a) Prueba del hecho.

Art. 5°. No se impondrá pena de muerte, cuando el hecho ó sus circunstancias calificativas, resulten probadas sólo por presunciones ó por confesión.

b) Garantías del procedimiento.

Art. 6°. Sólo podrá aplicarse la pena de muerte, cuando concurren las siguientes circunstancias:

- 1°. Que la causa haya sido vista en todas las instancias que establezca la respectiva organización judicial;





- 2°. Que en todas las instancias se haya decidido la imposición de aquella pena;
- 3°. Que haya habido unanimidad de votos y tribunal pleno en los tribunales colegiados;
- 4°. Que el reo haya sido oído personalmente en audiencia, por todos los jueces y tribunales que dictaren sentencia.

c) **Excepciones.**

Art. 7°. No se impondrá la pena de muerte á las mujeres, á los menores de edad, y á los mayores de setenta años.

d) **Ejecución.**

Art. 8°. La ejecución de la pena de muerte, tendrá lugar dentro del establecimiento en que se encuentre el condenado, quien será asistido por el sacerdote ó ministro del culto cuyo auxilio hubiere solicitado ó aceptado.

El juez de la causa hará constar la ejecución de la pena, en una acta que se unirá al proceso. Esta acta y la sentencia, se darán á la publicidad.

Art. 9°. La ejecución de la pena de muerte, tendrá lugar al día siguiente de la notificación de la sentencia irrevocable.

La notificación no podrá hacerse en víspera de domingo, ni de fiesta religiosa ó nacional.

e) **Entrega del cadáver.**

Art. 10. El cadáver del ejecutado será entregado á sus parientes dentro del segundo grado, si lo solicitaren al juez de la causa.

Presidio:

Art. 11. El presidio se cumplirá con trabajos forzados, en establecimientos destinados al efecto.

a) **Falta de establecimientos.**

Art. 12. Si por falta de establecimientos en donde los condenados deban sufrir el presidio, ó por falta de trabajo

en que deban ocuparse, no pudieren cumplir su condena, serán destinados a obras públicas de cualquier género, con tal que no fueren contratadas por particulares.



b) Exceptuados de presidio.

Art. 13. Los hombres débiles ó enfermos, los menores de edad, los mayores de sesenta años, y las mujeres que merecieren presidio, sufrirán la condena en prisión.

Prisión:

Art. 14. La prisión será por tiempo indeterminado, ó temporal hasta por quince años.

Se cumplirá en establecimientos distintos de los presidios, con reclusión celular en las horas no destinadas al trabajo ó a la instrucción.

a) Exceptuados de prisión.

Art. 15. Cuando la prisión no excediere de seis meses, podrán ser detenidas en sus propias casas, las mujeres honestas y las personas ancianas ó valetudinarias.

Disposiciones comunes:

a) Producto del trabajo.

Art. 16. El producto del trabajo del condenado a presidio ó prisión, se aplicará:

- 1º. A indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, que no satisficere con otros recursos;
- 2º. A la prestación de alimentos según el Código Civil;
- 3º. A costear los gastos que causare en el establecimiento;
- 4º. A formarle un fondo propio que se le entregará a su salida.

b) Inhabilitación.

Art. 17. El presidio y la prisión por más de tres años, importan la inhabilitación absoluta por el tiempo de la



condena, y la privación de los derechos civiles, con excepción del de testar.

El condenado quedará sujeto á la curatela establecida por el Código Civil para los incapaces.

c) Libertad condicional.

Art. 18. El condenado á presidio ó prisión por tiempo indeterminado, que hubiere cumplido veinte años de condena, y el condenado á presidio temporal ó prisión por más de tres años, que hubiere cumplido los dos tercios de su condena, observando con regularidad los reglamentos penales, obtendrán la libertad por resolución judicial, bajo las siguientes condiciones:

- 1°. Residir en el lugar que determine el auto de soltura;
- 2°. Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto;
- 3°. Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria ó profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia;
- 4°. No cometer nuevos delitos.

Art. 19. La libertad condicional, no se concederá á los reincidentes.

d) Revocación.

Art. 20. La libertad condicional será revocada, cuando el penado cometiere un nuevo delito, ó violare ó intentare violar la obligación de residencia. En estos casos, no se computará en el término de la pena, el tiempo que haya durado la libertad. En los casos de los incisos 2°. y 3°. del artículo precedente, el tribunal podrá disponer que no se compute en el término de la condena, todo ó parte del tiempo que hubiere durado la libertad, hasta que el condenado cumplierse lo dispuesto en dichos incisos.

e) Extinción de la pena.

Art. 21. Transcurrido el término de la condena, sin que

la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedará extinguida.

f) Consecuencias de la revocación.

Art. 22. Ningún penado cuya libertad condicional haya sido revocada, podrá obtenerla nuevamente.

Detención.

Art. 23. La detención no excederá de diez años, y se cumplirá en cualquier cárcel, sin sujeción al trabajo reglamentario.

Deportación.

Art. 24. La deportación consistirá en la relegación por tiempo indeterminado, en un paraje adecuado que designará el P. E.

La deportación lleva consigo la inhabilitación absoluta. Los deportados estarán sujetos: a la vigilancia de la autoridad; a observar las reglas de inspección que fije la sentencia; a adoptar oficio, arte, industria ó profesión.

El deportado que justificare haber observado buena conducta durante quince años, obtendrá, por auto judicial, la exoneración de la pena.

Admisión de condenados por tribunales provinciales.

Art. 25. Los condenados por tribunales provinciales a presidio, prisión, deportación ó detención, serán admitidos en los respectivos establecimientos nacionales.

Inhabilitación:

a) Absoluta.

Art. 26. La inhabilitación absoluta importará:

- 1°. La privación del empleo ó cargo público que ejercerá el penado, aunque provenga de elección popular;
- 2°. La privación del derecho electoral;
- 3°. La incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas;
- 4°. La pérdida de toda jubilación, pensión ó goce de montepío de que disfrutare.





b) Especial.

Art. 27. La inhabilitación especial, producirá la privación del empleo, cargo, profesión ó derecho sobre que recayere, y la incapacidad para obtener otro del mismo género durante la condena.

La inhabilitación especial para derechos políticos, producirá la incapacidad de ejercer, durante la condena, aquellos sobre que recayere.

Multa.

Art. 28. La multa obligará al reo á pagar la cantidad de dinero que determinare la sentencia, dentro del máximo y mínimo establecidos para el delito, teniendo en cuenta, además de las causas generales del art. 43, la situación económica del penado.

Si el reo no pagare la multa en el término que fije la sentencia, sufrirá prisión que no excederá de año y medio.

En cualquier tiempo que satisficere la multa, quedará en libertad.

Del importe se descontará, de acuerdo con las reglas establecidas para el cómputo de la prisión preventiva, la parte proporcional al tiempo de detención que hubiere sufrido.

Comiso.

Art. 29. Toda condena penal llevará consigo la pérdida de los efectos que provengan del delito y de los instrumentos con que se ejecutó. Los unos y los otros serán decomisados, á no ser que pertenecieren á un tercero no responsable.

Prisión preventiva.

Art. 30. La prisión preventiva que hubiere sufrido el condenado, se computará así: por dos días de prisión preventiva, uno de presidio; por un día de prisión preventiva, uno de deportación, de prisión ó detención, ó dos de in-

habilitación, ó la cantidad de multa que el tribunal fijare entre cuatro y diez pesos.

Art. 31. Si durante la condena el penado se volviera loco, el tiempo de la locura se computará para el cumplimiento de la pena.



TÍTULO III

CONDENACIÓN CONDICIONAL

a) Circunstancias de su pronunciamiento.

Art. 32. En los casos de primera condena por delito que deba cumplirse en cárcel, siempre que su término no excediere de dos años, los tribunales podrán ordenar en el mismo pronunciamiento, que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión será motivada en la comprobación de los buenos antecedentes del reo, mediante informacion de la policía y demás pruebas que el juez considere necesarias.

b) Extinción de la condena.

Art. 33. Si en el plazo de cinco años, á contar desde la fecha de la sentencia, el condenado no cometiere un nuevo delito, la condenación se tendrá como no pronunciada.

c) Ejecución de la condena.

Si dentro del plazo indicado se descubrieren malos antecedentes del condenado, sufrirá la pena que le hubiere sido impuesta. Si cometiere un nuevo delito, sufrirá la pena impuesta en la primera condenación, y la que le correspondiere por el segundo delito, conforme á lo dispuesto sobre acumulación de penas.

d) Limitaciones.

Art. 34. La suspensión de la pena no comprenderá:

- 1°. La reparación de los daños causados por el delito, y el pago de los gastos del juicio;



2°. Las incapacidades anexas á la condenación, impuestas accesoriamente.

Sin embargo, estas incapacidades cesarán el mismo día en que, por haber transcurrido el término de cinco años á que se refiere el Art. 33, se tuviere la condenación como no pronunciada, ó en el plazo que la sentencia les hubiere fijado, si fuere menor que aquél.

TÍTULO IV

REPARACIÓN DE PERJUICIOS

Indemnizaciones:

Art. 35. La sentencia condenatoria ordenará:

- 1°. La indemnización del daño material y moral causado á la víctima, á su familia, ó á un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez, en defecto de plena prueba;
- 2°. La restitución á su dueño, de la cosa obtenida por el delito. Si no fuere posible la restitución, el pago por el reo del precio corriente de la cosa, más el de estimación si lo tuviere;
- 3°. El pago de costas.

a) Preferencias.

Art. 36. La obligación de indemnizar, es preferente á todas las que contrajere el responsable después de cometido el delito y al pago de multas.

Si sus bienes no fueren suficientes para cubrir todas las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán éstas en el orden siguiente:

- 1°. La indemnización de los daños y perjuicios;
- 2°. El resarcimiento de los gastos del juicio.

b) Solidaridad.

Art. 37. La obligación de reparar el daño es solidaria entre todos los responsables del delito.



El que pagare todo el daño, no podrá demandar á los otros cuota alguna.

c) Obligación del partícipe de los efectos del delito.

Art. 38. El que por título lucrativo participare de los efectos de un delito, estará obligado á la reparación hasta la cuantía en que hubiere participado.

d) Cumplimiento de la reparación.

Art. 39. La reparación se hará efectiva por la vía de apremio. En caso de insolvencia total ó parcial, se observarán las reglas siguientes:

- 1°. Tratándose de condenados á presidio ó prisión, la reparación se hará en la forma determinada en el art. 16;
- 2°. Tratándose de condenados á otras penas, el tribunal señalará la parte de sus entradas ó emolumentos que deban depositar periódicamente hasta el pago total.

TÍTULO V

RESPONSABILIDAD

Se presume la intención.

Art. 40. En la ejecución de un delito se presume la intención de cometerlo, á no ser que resulte lo contrario de las circunstancias particulares del proceso.

Excepciones:

Art. 41. Están exentos de responsabilidad:

a) Enajenación mental.

- 1°. El que ha resuelto y ejecutado el hecho en un estado de enajenación mental cualquiera, no imputable al agente.

En caso de enfermedad mental, el juez ordenará la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del

Ministerio público y previo dictamen de peritos, que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe á sí mismo ó á los demás;



b) **Menor de 14 años.**

2°. El menor de catorce años.

Si de las circunstancias de la causa y condiciones personales del agente, ó de sus padres ó guardadores, resultare peligroso dejarlo á cargo de éstos, el juez ordenará su colocación en un establecimiento destinado á corrección de menores, hasta que cumpla diez y ocho años de edad. La entrega podrá anticiparse mediante resolución judicial, previa justificación de la buena conducta del menor y de sus padres ó guardadores;

c) **Fuerza ó amenazas.**

3°. El que obrare violentado por fuerza física irresistible, ó impulsado por amenazas de sufrir un mal grave é inminente;

d) **Causar un mal por evitar otro mayor.**

4°. El que causare un mal, por evitar otro mayor inminente á que ha sido extraño;

e) **Cumplimiento del deber.**

5°. El que obrare en cumplimiento de un deber, ó en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad ó cargo;

f) **Obediencia.**

6°. El que obrare en virtud de obediencia debida;

g) **Defensa legítima.**

7°. El que obrare en defensa propia ó de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias:

a) Agresión ilegítima;

b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla ó repelerla;



c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

Se entenderá que concurren estas circunstancias, respecto de aquel que durante la noche rechazare el escalamiento ó fractura de los cercados, paredes ó entradas de su casa, ó departamento habitado, ó de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor.

Igualmente, respecto de aquel que encontrare á un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia;

8°. El que obrare en defensa de la persona ó derechos de otro, siempre que concurren las circunstancias *a* y *b* del inciso anterior, y en caso de haber precedido provocación suficiente de parte del agredido, la de que no haya participado en ella el tercero defensor.

h) Pena ordinaria del delito.

Art. 42. En las penas divisibles por razón de tiempo ó de cantidad, la pena ordinaria del delito será el término medio entre el máximo y el mínimo; pero los tribunales podrán abreviarla ó prolongarla dentro de estos límites, motivando la medida de la pena en las circunstancias expresadas en el artículo siguiente.

i) Reglas para su aplicación.

Art. 43. A los efectos del artículo anterior se tendrá en cuenta:

- 1°. La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla; y la extensión del daño y del peligro causados;
- 2°. La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron á delinquir, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiere incurrido, y los demás antecedentes y condiciones personales que demuestren su mayor ó menor perversidad.

TÍTULO VI

TENTATIVA



Definición.

Art. 44. Hay tentativa cuando la resolución de cometer un delito, ha sido manifestada por actos exteriores que tengan relación directa con el mismo.

Para la apreciación de los actos, se tendrán en cuenta los antecedentes del agente.

Desistimiento del delito:

Art. 45. La tentativa no está sujeta a pena, cuando se desistiere voluntariamente del delito.

a) Cuando se presume voluntario.

Art. 46. La ley presume voluntario el desistimiento, á menos que se trate de un reincidente, caso en el cual regirá la presunción contraria.

b) Penalidad de la tentativa.

Art. 47. La pena que correspondería al agente si hubiere consumado el delito, se disminuirá en un tercio. Si la pena fuere de muerte ó presidio por tiempo indeterminado, la pena de la tentativa será presidio de quince á veinte años. Si la pena fuere de prisión por tiempo indeterminado, la de la tentativa será prisión de diez á quince años.

TÍTULO VII

AUTORES Y CÓMPlices

Autores.

Art. 48. Se considerarán autores:

- 1°. Los que tomen parte en la ejecución del hecho;
- 2°. Los que prestaren al ejecutor un auxilio ó cooperación, sin los cuales el hecho no habría podido cometerse;
- 3°. Los que determinaren á otros á cometerlo.

Cómplices:

Art. 49. Son cómplices, los que, no hallándose comprendidos en el artículo precedente, cooperaren á la ejecución del hecho por actos anteriores ó simultáneos.

a) Pena del cómplice.

Art. 50. El cómplice será reprimido con la pena correspondiente al hecho á que hubiere cooperado, no pudiendo aplicársele el máximo.

Art. 51. Si la pena que correspondiere al autor fuere la de muerte, sufrirá el cómplice la de presidio por tiempo indeterminado; si le correspondiere ésta, la de presidio temporal que no bajará de quince años; y si le correspondiere prisión por tiempo indeterminado, se le aplicará prisión que no baje de diez años.

Art. 52. Si de las circunstancias particulares de la causa, resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un hecho menos grave que el cometido por el autor principal, la pena será aplicada al cómplice, solamente en razón del hecho á que tuvo intención de prestar ayuda. Si el hecho no se consumare, la pena del cómplice se determinará conforme á los preceptos de este artículo y á los del título de la tentativa.

b) Tentativa de complicidad.

Art. 53. La tentativa de complicidad será reprimida conforme á las reglas de la tentativa.

c) En delitos cometidos por la prensa.

Art. 54. No se considerarán cómplices ni autores de los delitos cometidos por la prensa, á los editores, impresores y demás personas que prestaren al autor del escrito ó grabado, la cooperación material necesaria para su publicación, cuando el autor fuere conocido y se encontrare en el país.



TÍTULO VIII

REINCIDENCIA



Reincidencia:

Art. 55. Habrá reincidencia, siempre que el condenado por sentencia firme, dictada por cualquier tribunal del país, cometiere un nuevo delito, aunque hubiere mediado indulto ó conmutación,

A los efectos de la reincidencia, no se tomarán en cuenta los delitos militares ó políticos, ni los amnistiados.

a) Reincidentes por segunda vez.

Art. 56. Los reincidentes por segunda vez, condenados a pena restrictiva de la libertad que excediera de un año, cumplirán su condena en un paraje de los territorios del Sud.

b) Deportación como accesorio.

Art. 57. La deportación será impuesta como accesorio de la última condena, cuando mediaren:

- 1°. Dos condenas á presidio, ó una á presidio y otra á prisión mayor de tres años;
- 2°. Tres condenas á prisión mayor de tres años, ó una de presidio y dos de prisión de tres años ó menos;
- 3°. Cuatro condenas á prisión, siendo una de ellas mayor de tres años;
- 4°. Cinco condenas á prisión de tres años ó menores.

No se computarán las condenas por delitos exclusivamente militares ó políticos.

Se aplicará también como accesorio de la condena, en los casos de concurso de delitos, siempre que los delitos juzgados hubieren sido cinco por lo menos, y que dos de ellos tuvieran fijada pena mayor de tres años de prisión.

TÍTULO IX

CONCURSO DE DELITOS

Hecho que cae bajo más de una sanción.

Art. 58. Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor.

Hechos reprimidos con la misma especie de pena.

Art. 59. Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo en tal caso, tendrá como minimum el minimum de la pena mayor, y como maximum, la suma resultante de la acumulación de las penas correspondientes a los diversos hechos. Sin embargo, esta suma no podrá exceder del maximum legal de la especie de pena de que se trate.

Hechos reprimidos con penas diferentes.

Art. 60. Cuando concurrieren varios hechos independientes, reprimidos con penas divisibles de diferente naturaleza, se aplicará la pena más grave, teniendo en cuenta los delitos de pena menor.

Si alguna de las penas no fuere divisible, se aplicará ésta únicamente, salvo el caso en que concurrieren la de prisión por tiempo indeterminado y la de presidio temporal, en que se aplicará presidio por tiempo indeterminado.

La inhabilitación se aplicará siempre, sin sujeción a lo dispuesto en el párrafo 1°.

Gravedad relativa.

Art. 61. A los efectos del artículo anterior, la gravedad relativa de las penas de diferente naturaleza, se determinará por el orden en que se hallan enumeradas en el Art. 4°.

Acumulación en caso de condena ya impuesta.

Art. 62. Las reglas precedentes se aplicarán también, en el caso en que, después de una condena pronunciada por sentencia firme, se deba juzgar á la misma persona, por otro hecho cometido antes de dicha condenación.



TÍTULO X

EXTINCIÓN DE ACCIONES Y DE PENAS

Causas de extinción.

Art. 63. La acción penal se extinguirá:

- 1°. Por la muerte del imputado;
- 2°. Por la amnistía;
- 3°. Por la prescripción;
- 4°. Por la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada.

Renuncia de la persona ofendida.

Art. 64. La renuncia de la persona ofendida, al ejercicio de la acción penal, sólo perjudicará al renunciante y á sus herederos.

Amnistía.

Art. 65. La amnistía extinguirá la acción penal, y hará cesar la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas á particulares.

Prescripción de las acciones.

Art. 66. La acción penal se prescribirá por la buena conducta del imputado, durante el tiempo fijado á continuación:

- 1°. A los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de muerte ó presidio,
- 2°. Después de transcurrido el maximum de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con prisión ó detención, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción, exceder de doce años ni bajar de dos meses;
- 3°. A los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua;
- 4°. Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal;





- 5°. A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa mayor de dos mil pesos;
- 6°. Al año, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa de quinientos á dos mil pesos;
- 7°. A los seis meses, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa que no excediere de quinientos pesos.

Desde cuando corre.

Art. 67. La prescripción de la acción empezará á correr desde la media noche del día en que se cometió el delito, ó si éste fuere continuo, en que cesó de cometerse.

Acción por delito reprimido con multa.

Art. 68. La acción penal por delito reprimido con multa, se extinguirá en cualquier estado del juicio, por el pago voluntario del máximo de la multa correspondiente al delito, y de las indemnizaciones á que hubiere lugar.

Prescripción de las penas:

Art. 69. Las penas se prescribirán por la buena conducta del condenado, en los términos siguientes:

- 1°. La de muerte ó presidio, á los veinte años;
- 2°. La de deportación ó prisión por tiempo indeterminado, á los quince años;
- 3°. La de prisión, en un tiempo igual al de la condena;
- 4°. La pena de multa mayor de dos mil pesos, á los tres años;
- 5°. La pena de multa que no excediere de dos mil pesos, al año.

a) Desde cuando corre.

Art. 70. La prescripción de la pena empezará á correr desde la media noche del día en que se notificare al reo la sentencia firme, ó desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiere empezado á cumplirse.

b) Separadamente para cada partícipe.

Art. 71. La prescripción correrá ó se interrumpirá separadamente, para cada uno de los partícipes de un delito.

Indulto.

Art. 72. El indulto del reo extinguirá la pena y sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas á particulares.

Perdon del ofendido.

Art. 73. El perdón de la parte ofendida, extinguirá la pena impuesta por delito de los enumerados en el art. 77.

Si hubiere varios partícipes, el perdón en favor de uno de ellos, aprovechará á los demás.

Las indemnizaciones pecuniarias.

Art. 74. Las indemnizaciones pecuniarias inherentes á la pena, podrán hacerse efectivas sobre los bienes propios del condenado, aún después de su muerte.

TÍTULO XI

DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES

De oficio.

Art. 75. Deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes:

- 1°. Las que dependieren de instancia privada;
- 2°. Las acciones privadas.

Dependientes de instancia privada.

Art. 76. Son acciones dependientes de instancia privada, las que nacieren de los delitos de violación, estupro, rapto y ultrajes al pudor, cuando no resultare la muerte de la persona ofendida, ó lesiones de las mencionadas en el art. 95.

En los casos de este artículo, no se procederá á formar causa, sino por acusación ó denuncia del agraviado, ó de su tutor, guardador ó representantes legales. Sin embargo, se procederá de oficio, cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, ó que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor ó guardador.





Acciones privadas:

Art. 77. Son acciones privadas, las que nacen de los siguientes delitos:

- a) Adulterio;
- b) Calumnias, injurias, difamación y ultrajes;
- c) Amenazas y violencias, comprendidas en los artículos 155 y 157;
- d) Violación de secretos, salvo en los casos del artículo 162;
- e) Extorsión en el caso del art. 185;
- f) Concurrencia desleal, prevista en el art. 167.

a) De adulterio.

Art. 78. La acción por delito de adulterio, corresponde únicamente al cónyuge ofendido, quien deberá acusar á ambos culpables, pero no podrá intentar la acción penal mientras no se declare el divorcio por causa de adulterio. La sentencia en el juicio de divorcio, no producirá efecto alguno en el juicio criminal.

b) De calumnia, injuria, difamación ó ultraje.

Art. 79. La acción por calumnia, injuria, difamación ó ultraje, podrá ser ejercitada sólo por el ofendido, y, después de su muerte, por el cónyuge, hijos, nietos ó padres sobrevivientes.

Los demás casos de acción privada.

Art. 80. En los demás casos del art. 77, se procederá únicamente por querrela ó denuncia del agraviado, ó de de sus guardadores ó representantes legales.

Los delitos contra la libertad política.

Art. 81. Por los delitos contra la libertad política, además de la acción penal, procederá la acción particular de cualquier ciudadano.

Iniciada una acción por un ciudadano, el representante del Ministerio Fiscal deberá intervenir en el proceso, desde el principio hasta la terminación, y no podrá desistir de la querrela, aunque desistiere el acusador particular.

TÍTULO XII

SIGNIFICACIÓN DE ALGUNOS TÉRMINOS EMPLEADOS EN EL CÓDIGO

Art. 82. Para la inteligencia del texto de este Código, se tendrán presentes las siguientes reglas:

Los plazos señalados en este Código, se contarán con arreglo á las disposiciones del Código Civil.

La expresión *reglamentos* ú *ordenanzas*, comprende todas las disposiciones de carácter general, dictadas por la autoridad competente en la materia de que traten.

Por los términos *funcionario público* y *empleado público*, usados en este código, se designa á todo el que participa accidental ó permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular ó por nombramiento de autoridad competente.

Se entiende por *bautá*, la asociación de dos ó más individuos para cometer delitos indeterminados.

Se entiende que hay *escalamiento*, cuando se penetra por vía que no está destinada á servir de entrada.

Con la palabra *mercadería*, se designa toda clase de efectos susceptibles de expendio, incluso las drogas ó medicamentos.

El hecho de narcotizar una persona ú ocasionarle un síncope, se asimilará á la violencia ó fuerza.

El término *capitán*, comprende á todo comandante de embarcación ó al que le substituye.

El término *tripulación*, comprende á todos los que se hallen á bordo como oficiales ó marineros.





LIBRO SEGUNDO

DE LOS DELITOS

TÍTULO I

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

CAPÍTULO I

DELITOS CONTRA LA VIDA

Homicidio en general.

Art. 83. Se aplicará presidio de diez á veinticinco años, al que matare á otro, siempre que en este Código no se estableciere otra pena.

Agravaciones.

Art. 84. Se aplicará presidio por tiempo indeterminado ó muerte:

- 1°. Al que matare á su ascendiente, descendiente, cónyuge ó bienhechor, sabiendo que lo son;
- 2°. Al que matare á otro con alevosía ó ensañamiento, por precio, promesa remuneratoria, sevicias graves, impulso de perversidad brutal, ó por veneno, incendio, inundación, descarrilamiento, explosión, ó cualquier otro medio capaz de causar grandes estragos;
- 3°. Al que matare á otro para preparar, facilitar, consumir ó ocultar otro delito, ó para asegurar sus resultados ó la impunidad para sí ó para sus cooperadores, ó por no haber obtenido el resultado que se propuso al intentar el otro hecho punible



Atenuaciones:

Art. 85. Se impondrá prisión por tres á seis años:

- 1º. Al que matare á otro, si la víctima misma provocó el acto homicida con ofensas ó injurias ilícitas y graves;
- 2º. A la madre que, para ocultar su deshonra, matare á su hijo durante el nacimiento ó hasta tres días después, y á los padres, hermanos, marido ó hijos que, para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa ó madre, cometieren el mismo delito;
- 3º. Al cónyuge, al ascendiente ó al hermano, que matare á su cónyuge, descendiente ó hermana, ó al cómplice, ó á ambos, en el acto de sorprenderles en ilegítimo concubito, pudiendo los jueces eximir de pena, según las circunstancias particulares del hecho;
- 4º. Al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo ó en la salud, produjere la muerte de alguna persona.

Concurso de agravaciones y atenuaciones.

Art. 86. Cuando en el caso del inc. 1º del art. 84, concurriere alguna de las circunstancias de los incisos 1º y 4º del artículo anterior, la pena sera de presidio por diez á veinticinco años.

Instigación al suicidio.

Art. 87. Será reprimido con prisión de uno á cuatro años, el que instigare á otro al suicidio ó le ayudare á cometerlo, si el suicidio tuviere lugar.

Homicidio por imprudencia.

Art. 88. Será reprimido con prisión de seis meses á dos años, é inhabilitación especial, en su caso, por cinco á diez años, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte ó profesión, ó inobservancia de los reglamentos ó de los deberes de su cargo, causare á otro la muerte.



Aborto.

Art. 89. El que causare un aborto será reprimido:

- 1°. Con prisión de tres á diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer;
- 2°. Con prisión de uno á cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer. El máximo de la pena se elevará á seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.

Art. 90. Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior, y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras ó farmacéuticos, que abusaren de su ciencia ó arte para causar aborto, ó cooperaren á causarlo.

Art. 91. Será reprimido con prisión de seis meses á dos años, el que con violencia causare un aborto, sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la paciente fuere notorio ó le constare.

Art. 92. Será reprimida con prisión de uno á cuatro años, la mujer que causare su propio aborto, ó consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer, no es punible.

CAPÍTULO II

LESIONES

Lesiones en general.

Art. 93. Se impondrá prisión de un mes á un año, al que causare á otro, en el cuerpo ó en la salud, un daño que no esté previsto en otra disposición de este Código.

Lesiones graves.

Art. 94. Se impondrá prisión de uno á seis años, si la lesión produjere una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro, ó una dificultad permanente de la palabra, ó si hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiere inutilizado para el



trabajo por más de un mes, ó le hubiere causado una deformación permanente del rostro.

Art. 95. Se impondrá prisión de tres á diez años, si la lesión produjere una enfermedad mental ó corporal, cierta ó probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano ó miembro, de la palabra, ó de la capacidad de engendrar ó concebir.

Concurso de agravaciones.

Art. 96. Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el art. 84, la pena será: en el caso del artículo 93, de seis meses á dos años; en el caso del art. 94, de tres á diez años; y en el caso del art. 95, de tres á quince años.

Concurso de atenuaciones.

Art. 97. Si concurriere la circunstancia enunciada en el inciso 1º del art. 85, la pena será: en el caso del art. 93, de quince días á seis meses; en el caso del art. 94, de seis meses á tres años; y en el caso del art. 95, de uno á cuatro años.

Lesiones por imprudencia.

Art. 98. Sufrirá la pena de doscientos á mil pesos de multa, é inhabilitación especial por uno á cuatro años, el que por imprudencia ó negligencia, por impericia en su arte ó profesión, ó por inobservancia de los reglamentos ó deberes de su cargo, causare á otro un daño en el cuerpo ó en la salud.

CAPÍTULO III

HOMICIDIO Ó LESIONES EN RIÑA

Homicidio ó lesiones graves.

Art. 99. Cuando en riña ó agresión en que tomaren parte más de dos personas, resultare muerte ó lesiones de las determinadas en los artículos 94 y 95, sin que consta-



re quienes las causaron, se tendrá por autores á todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido, y se aplicará prisión de dos á seis años en caso de muerte, y de uno á cuatro en caso de lesión.

Lesiones leves.

Si las lesiones fueren las previstas en el art. 93, la pena aplicable será de cuatro á ciento veinte días de prisión.

CAPÍTULO IV

DUELLO

Con padrinos.

Art. 100. Los que se batieren en duelo, con intervención de dos ó más padrinos, mayores de edad, que elijan las armas y arreglen las demás condiciones del desafío, serán reprimidos:

- 1º. Con prisión de uno á seis meses, al que no infiriere lesión á su adversario, ó sólo le causare una lesión de las determinadas en el art. 93;
- 2º. Con prisión de uno á cuatro años, al que causare la muerte de su adversario, ó le infiriere lesión de las determinadas en los artículos 94 y 95.

Sin padrinos.

Art. 101. Los que se batieren sin la intervención de padrinos mayores de edad, que elijan las armas y arreglen las demás condiciones del desafío, serán reprimidos:

- 1º. El que matare á su adversario, con la pena señalada para el homicida;
- 2º. El que causare lesiones, con la pena señalada para el autor de lesiones;
- 3º. El que no causare lesiones, con prisión de un mes á un año.

Instigación al duelo.

Art. 102. El que instigare á otro á provocar ó á aceptar un duelo, y el que desacreditare públicamente á otro por no desafiar ó por rehusar un desafío, serán reprimidos:



- 1º. Con multa de doscientos á mil pesos, si el duelo no se realizare, ó si realizándose, no se produjere muerte ni lesiones, ó sólo lesiones de las comprendidas en el artículo 93;
- 2º. Con prisión de uno á cuatro años, si se causare muerte, ó lesiones de las mencionadas en los artículos 94 y 95.

Agravaciones.

Art. 103. El que provocare ó diere causa á un desafío, proponiéndose un interés pecuniario ú otro objeto inmoral, será reprimido:

- 1º. Con prisión de uno á cuatro años, si el duelo no se verificare, ó si efectuándose, no resultare muerte ni lesiones;
- 2º. Con prisión de tres á diez años, si el duelo se realizare y resultaren lesiones;
- 3º. Con presidio de diez á veinticinco años, si se produjere la muerte.

Art. 104. El combatiente que faltare en daño de su adversario, á las condiciones ajustadas por los padrinos, será reprimido:

- 1º. Con prisión de tres á diez años, si causare lesiones á su adversario;
- 2º. Con presidio de diez á veinticinco años, si le causare la muerte.

Alevosía de los padrinos.

Art. 105. Los padrinos de un duelo que usaren cualquier género de alevosía en la ejecución del desafío, serán reprimidos con las penas señaladas en el artículo anterior, según fueren las consecuencias que resultaren.

Duelo á muerte.

Art. 106. Cuando los padrinos concertaren un duelo á muerte, ó en condiciones tales que de ellas debiere resultar la muerte, serán reprimidos con prisión de uno á cuatro años, si se verificare la muerte de alguno de los comba-

tientes. Si no se verificare la muerte de alguno de ellos, la pena será de multa de doscientos á mil pesos.

CAPÍTULO V

ABUSO DE ARMAS

Disparo de arma de fuego.

Art. 107. Será reprimido con seis meses á dos años de prisión, el que disparare un arma de fuego contra una persona, sin hierirla.

Esta pena se aplicará, aunque se causare herida á que corresponda pena menor, siempre que el hecho no importe un delito más grave.

Agresión con otra arma.

Art. 108. Será reprimida con prisión de quince días á seis meses la agresión con otra clase de arma, cuando no se causare herida.

CAPÍTULO VI

ABANDONO DE PERSONAS

De menor de 10 años ó incapaz.

Art. 109. Será reprimido con prisión de seis meses á dos años, el que abandonare ó dejare en desamparo á un menor de diez años, ú otra persona incapaz por causa de enfermedad, á quien deba mantener ó cuidar.

La prisión será de dos á seis años, si á consecuencia del abandono resultare un grave daño en el cuerpo ó en la salud del menor ó incapaz.

La prisión será de tres á diez años, si ocurriere la muerte.

Agravación y atenuación.

Art. 110. El máximum y el mínimum de las penas establecidas en el artículo precedente, serán aumentados en un tercio, cuando el delito fuere cometido por los padres contra sus hijos, y por éstos contra aquellos, ó por el cónyuge.





Serán disminuídos á la mitad, cuando el abandono fuere de un menor de tres días, aún no inscripto en el Registro Civil, para salvar el honor propio, ó el de la esposa, madre, hija ó hermana.

Omisión de auxilio.

Art. 111. Será reprimido con multa de cien á quinientos pesos, el que encontrando perdido ó desamparado á un menor de diez años, ó á una persona herida ó inválida, ó amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario, cuando pudiese hacerlo sin riesgo personal, ó no diere aviso inmediatamente á la autoridad.

TÍTULO II

DELITOS CONTRA EL HONOR

Injuria.

Art. 112. El que atribuyere, directa ó indirectamente, á una persona, ó á una corporación, sociedad ó institución cualquiera, un hecho, una calidad ó una conducta que pueda perjudicar el honor ó la reputación de la primera, ó el de las personas que constituyan ó representen a las últimas, será culpable de injuria, y reprimido con multa de doscientos á mil pesos.

Difamación.

Art. 113. El que divulgare una injuria por medio de escritos ó dibujos, ó en reuniones públicas, será culpable de difamación, y reprimido con la pena de la injuria, aumentados en un tercio el máximun y el minimum.

Esta disposición se aplicará, al que divulgare ó reprodujere injurias ó calumnias inferidas por otro.

Prueba de la imputación.

Art. 114. El acusado por injuria ó difamación, será admitido á probar la verdad de la imputación, en los casos siguientes:



- 1º. Si la imputación hubiere tenido por objeto defender un interés público actual;
- 2º. Si el querellante pidiere la prueba de la imputación dirigida contra él;
- 3º. Si el imputado fuere un funcionario público, y la imputación se refiriese al ejercicio de sus funciones.

El acusado quedará exento de pena, en el primer caso, si probare la verdad de la imputación, y resultare efectivo el propósito de interés público. En los demás casos, si probare la verdad de la imputación.

Prohibición de la prueba.

Art. 115. Queda prohibida la recepción de la prueba de cualquiera imputación que se refiera á la vida conyugal, ó á la vida de familia, ó á un delito contra la honestidad que no pueda perseguirse por acción pública, ó cuya persecución dependa de instancia privada.

Calumnia.

Art. 116. Si en los casos del art. 114, el acusado no probare la verdad de la imputación, será culpable de calumnia, y reprimido con prisión de seis meses á dos años.

Ultraje.

Art. 117. Será reprimido con multa de cincuenta á trescientos pesos, el que ultrajare á otro de obra ó de palabra, si el hecho no se hallare comprendido en los artículos anteriores.

Regla para la aplicación de la pena.

Art. 118. Se impondrá la pena de la injuria ó del ultraje, si así correspondiere al hecho acusado, aún cuando la acusación fuere por calumnia ó difamación.

Injurias y ultrajes en juicio.

Art. 119. Las injurias ó ultrajes proferidos por los litigantes, apoderados ó defensores, en los escritos ó en las

audiencias, quedarán sujetos á las correcciones disciplinarias, á menos que fueren dados á la publicidad, caso en el cual se impondrá la pena á que los publicare.



TITULO III

DELITOS CONTRA LA HONESTIDAD

CAPÍTULO I

ADULTERIO

Art. 120. Serán reprimidos con prisión de un mes á un año:

- 1°. La mujer que cometiere adulterio;
- 2°. El codelincuente de la mujer;
- 3°. El marido, cuando tuviere manceba dentro ó fuera de la casa conyugal;
- 4°. La manceba del marido, dentro de la casa conyugal.

CAPÍTULO II

VIOLACIÓN Y ESTUPRO

Violación.

Art. 121. Será reprimido con prisión de tres á diez años, el que tuviere acceso carnal con personas de uno ú otro sexo, en los casos siguientes:

- 1°. Cuando la víctima fuere menor de doce años;
- 2° Cuando la persona ofendida se hallare privada de razón ó de sentido, ó cuando por enfermedad ó cualquier otra causa, no pudiera resistir;
- 3°. Cuando se usare de fuerza ó intimidación.

Estupro.

Art. 122. Se impondrá prisión de uno á cuatro años, cuando la víctima fuere mujer honesta, mayor de doce años y menor de quince, y no se encontrare en las circunstancias de los números 2 y 3 del artículo anterior.



Por engaño.

Art. 123. Se impondrá prisión de dos á seis años, al que abusare del error de una mujer fingiéndose su marido, y tuviere con ella acceso carnal.

Agravaciones.

Art. 124. La prisión será de tres a quince años, cuando en los casos del art. 121, resultare un grave daño en la salud de la víctima, ó se cometiere el hecho por un ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, sacerdote, ó encargado de la educación ó guarda de aquella, ó con el concurso de dos ó más personas.

Art. 125. Se impondrá prisión de tres á diez años, cuando en el caso del art. 122, mediare alguna de las circunstancias expresadas en el anterior.

Art. 126. Se impondrá presidio de quince á veinticinco años, cuando en los casos de los arts. 121 y 122, resultare la muerte de la persona ofendida.

CAPÍTULO III

CORRUPCIÓN Y ULTRAJES AL PEDOR

De menor de 18 años.

Art. 127. Será reprimido con prision de seis meses a cuatro años, el que para satisfacer deseos propios ó ajenos, promoviere ó facilitare la prostitución ó corrupción de persona menor de 18 años.

De mayor de 18 años, por fraude ó violencia.

Art. 128. Será reprimido con la misma pena, el que para satisfacer deseos ajenos, promoviere ó facilitare la corrupción ó prostitución de persona mayor de 18 años, por medio de fraude, ó con ayuda de violencia, amenaza, abuso de autoridad, ó cualesquiera otros medios de coerción.

Presunción contra regentes de casas de prostitución.

Art. 129. Si se encontrare en una casa de prostitución pública ó clandestina, una víctima de los delitos previstos



en los dos artículos anteriores, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la persona ó personas regentes de dicha casa, son autores ó coautores del delito.

Ultraje al pudor.

Art. 130. Se impondrá prisión de seis meses á cuatro años, al que abusare deshonestamente de persona de uno ú otro sexo, concurriendo alguna de las circunstancias del art. 121, sin que haya acceso carnal.

Si el autor del hecho fuere alguna de las personas mencionadas en el art. 124, se le aplicará de tres á diez años de prisión.

Trata de blancas.

Art. 131. Será reprimido con prisión de seis meses á cuatro años, el que por medio de fraude, ó con ayuda de violencia, amenaza, abuso de autoridad, ó cualesquiera otros medios de coerción, hubiere detenido, ó facilitado ó permitido la detención de una persona, aunque sea mayor, contra su voluntad, y aun por causa de deudas, en casa de prostitución, ó la hubiere obligado á entregarse á la prostitución.

Lucro con la prostitución ajena.

Art. 132. Será reprimido con prisión de un mes á un año, el que lucrare con la prostitución de una mujer.

No están comprendidos en esta disposición, los regentes de casas de prostitución autorizadas.

Escritos é imágenes obscenas.

Art. 133. Será reprimido con prisión de quince días á un año, el que publicare, fabricare, ó reprodujere libros, escritos, figuras, imágenes ú objetos obscenos, y el que los expusiere, distribuyere ó hiciere circular.

Exhibiciones y palabras obscenas.

Art. 134. Será reprimido con prisión de quince días á seis meses, el que en sitio público ejecutare ó hiciere eje-



cutar por otro, actos, gestos, actitudes ó exhibiciones obscenas, ó profiriere ó hiciere proferir palabras obscenas.

La misma pena se aplicará cuando los actos ó palabras tuvierén lugar en sitio privado, pero expuesto á que sean vistos ú oídos involuntariamente por terceros.

CAPÍTULO IV

RAPTO

Con violencia ó fraude.

Art. 135. Sufrirá prisión de uno á cuatro años, el que con miras deshonestas, substraigere ó retuviere á una mujer por medio de fuerza, intimidación ó fraude.

La prisión será de dos á seis años, si la robada fuere una mujer casada.

De una menor.

Art. 136. Será reprimido con prisión de seis meses á dos años, el que cometiere rapto de una menor de quince años y mayor de doce, con su consentimiento.

El culpable será reprimido con prisión de dos á seis años, si el rapto fuere de una menor de doce años, con ó sin su consentimiento.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES COMUNES Á LOS ARTÍCULOS ANTERIORES

Matrimonio con la ofendida.

Art. 137. En los casos de violación, estupro ó rapto de una mujer soltera, quedará exento de pena el delincuente si se casare con la ofendida, prestando ella su consentimiento, después de restituida á casa de sus padres ó á otro lugar seguro.

Abuso de autoridad, encargo ó confianza.

Art. 138. Los ascendientes, descendientes, afines en línea recta, hermanos, y cualesquiera personas que, con abuso de autoridad, encargo ó confianza, cooperaren á la perpetración de los delitos comprendidos en este título, serán reprimidos con la pena de los autores.

TÍTULO IV
DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL

CAPÍTULO I

MATRIMONIOS ILEGALES

Sabiendo ambos contrayentes la ilegalidad.

Art. 139. Serán reprimidos con prisión de uno á cuatro años, los que contrajerén matrimonio, sabiendo ambos que existe impedimento que cause su nulidad absoluta.

Sabiéndolo uno solo, ó simulando matrimonio.

Art. 140. Serán reprimidos con prisión de dos á seis años:

- 1º. El que contrajere matrimonio, cuando, sabiendo que existe impedimento que cause su nulidad absoluta, ocultare esta circunstancia al otro contrayente;
- 2º. El que engañando á una persona, simulare matrimonio con ella.

El oficial que autoriza el matrimonio.

Art. 141. El oficial público que, á sabiendas, autorizare un matrimonio de los comprendidos en los artículos anteriores, sufrirá en su caso, la pena que en ella se determina.

Si lo autorizare sin saberlo, cuando su ignorancia provenga de no haber llenado los requisitos que la ley prescribe para la celebración del matrimonio, la pena será de multa de cien á mil pesos, e inhabilitación especial por seis meses á dos años.

Sufrirá multa de cien á mil pesos, el oficial público que, fuera de los demás casos de este artículo, procediere á la celebración de un matrimonio, sin haber observado todas las formalidades exigidas por la ley.

El representante legítimo del menor impúber.

Art. 142. En la misma pena incurrirá el representante legítimo de un menor impúber, que diere su consentimiento para el matrimonio del mismo.



CAPÍTULO II

SUPRESIÓN Y SUPOSICIÓN DEL ESTADO CIVIL.

En general.

Art. 143. Se aplicará prisión de seis meses á dos años, al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterar ó suprimiere el estado civil de otro.

Agravantes.

Art. 144. Se impondrá prisión de uno á cuatro años:

1°. A la mujer que fingiere preñez ó parto, para dar á su supuesto hijo derechos que no le correspondan, y al médico ó partera que cooperare á la ejecución del delito.

2°. Al que por medio de exposición, de ocultación ó de otro acto cualquiera, hiciere incierto, alterar ó suprimiere el estado civil de un menor de diez años.

TÍTULO V

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

CAPÍTULO I

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL

Reducción á servidumbre ó condición análoga.

Art. 145. Serán reprimidos con prisión de tres á quince años, el que redujere á una persona á servidumbre ó á otra condición análoga, y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella.

Privación de la libertad, en general.

Art. 146. Será reprimido con prisión de un mes á un año, el que ilegalmente privare á otro de su libertad personal.

Agravantes.

Art. 147. Se aplicará prisión de uno á cuatro años, al





que privare á otro de su libertad personal, cuando concu-
rra alguna de las circunstancias siguientes:

- 1°. Si el hecho se cometiere con violencias ó amena-
zas, ó con propósito de lucro, ó con fines religiosos
ó de venganza;
- 2°. Si el hecho se cometiere en la persona de un as-
cendiente, de un hermano, del cónyuge ó de otro
individuo á quien se deba respeto particular;
- 3°. Si resultare grave daño á la persona, á la salud ó
á los negocios del ofendido, siempre que el hecho
no importare otro delito por el cual la ley imponga
pena mayor;
- 4°. Si el hecho se cometiere simulando autoridad públi-
ca, ú orden de autoridad pública;
- 5°. Si la privación de la libertad durare más de un mes.

Con abuso de autoridad.

Art. 148. Será reprimido con prisión de un mes á un
año, é inhabilitación especial por doble tiempo:

- 1°. El funcionario público que, con abuso de sus fun-
ciones ó sin las formalidades prescriptas por la ley,
privare á alguno de su libertad personal;
- 2°. El funcionario que retuviere á un detenido ó preso,
cuya soltura haya debido decretar ó ejecutar;
- 3°. El funcionario que prolongare indebidamente la de-
tención de una persona, sin ponerla á disposición del
juez competente;
- 4°. El funcionario que incomunicare indebidamente á
un detenido;
- 5°. El funcionario que impusiere á los presos que
guarda, severidades, vejaciones ó apremios ilegales,
ó los colocare en lugares del establecimiento que no
sean los señalados para el efecto;
- 6°. El jefe de presidio, prisión ú otro establecimiento
penal, ó el que lo reemplace, que recibiere algún
reco, sin testimonio de la sentencia firme en que se
le hubiere impuesto la pena;



7°. El alcaide ó empleado de las cárceles de detenidos y seguridad, que recibiere un preso sin orden de autoridad competente, salvo el caso de flagrante delito;

8°. El funcionario que desempeñando un acto del servicio, cometiere cualquiera vejación contra las personas, ó les aplicare apremios ilegales;

9°. El funcionario competente que, teniendo noticia de una detención ilegal, omitiere, retardare ó rehusare hacerla cesar, ó dar cuenta á la autoridad que deba resolver.

Art. 149. Cuando en los casos del artículo anterior, concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 147, se aplicará la pena establecida en este último.

Sujeción al poder de otro ó alistamiento en el extranjero.

Art. 150. Será reprimido con prisión de dos á seis años, el que condujere á una persona fuera de las fronteras de la República, con el propósito de someterla ilegalmente al poder de otro, ó de alistarla en un ejército extranjero.

Substracción ú ocultación de un menor de diez años.

Art. 151. Será reprimido con prisión de tres á diez años, el que substrajere á un menor de diez años del poder de sus padres, tutor ó persona encargada de él, y el que lo retuviere ú ocultare.

No presentación á sus padres ó guardadores.

Art. 152. En la misma pena incurrirá el que, hallándose encargado de la persona de un menor de diez años, no lo presentare á los padres ó guardadores que lo solicitaren, ó no diere razón satisfactoria de su desaparición.

Incitación á la fuga de un menor de 15 años.

Art. 153. Será reprimido con prisión de un mes á un año, el que indujere á un mayor de diez años y menor de quince, á fugar de casa de sus padres, guardadores ó encargados de su persona.



Ocultación de un menor de 15 años.

Art. 154. Será reprimido con prisión de un mes á un año, el que ocultare á las investigaciones de la justicia ó de la policía, á un menor de quince años, que se hubiere substraído á la potestad ó guarda á que estaba legalmente sometido.

La pena será de seis meses á dos años, si el menor no tuviere diez años cumplidos.

Coacción.

Art. 155. Será reprimido, si el hecho no importa otro delito más severamente penado, con prisión de un mes á un año, el que usare de violencia ó amenaza, para compeler á una persona á hacer ó no hacer ó tolerar algo.

Amenaza de violencia pública ó de otro delito.

Art. 156. Será reprimida con prisión de seis meses á dos años, la amenaza de violencia pública con fuerzas reunidas, contra las personas ó las propiedades, ó de un delito que ponga en peligro la seguridad de las personas ó las propiedades, ó de un delito contra la honestidad.

Violencias y amenazas en general.

Art. 157. Será reprimido con prisión de uno á cuatro meses, el autor de violencias ó de amenazas no comprendidas en los artículos anteriores.

CAPÍTULO II

VIOLACIÓN DE DOMICILIO

En general.

Art. 158. Será reprimido con prisión de seis meses á dos años, si no resultare otro delito más severamente penado, el que entrare en morada ó casa de negocio ajena, en sus dependencias, ó en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa ó presunta de quien tenga derecho de excluirlo, ó el que encontrándose allí, no se retirare, después de recibir de éste la intimación de salir.



Allanación de domicilio.

Art. 159. Se impondrá la misma pena é inhabilitación especial de seis meses á dos años, al funcionario público, ó agente de la autoridad, que allanare un domicilio sin las formalidades prescriptas por la ley, ó fuera de los casos que ella determine.

Excepciones.

Art. 160. Las disposiciones de los artículos anteriores, no se aplicarán al que entrare en los sitios expresados, para evitar un mal grave á sí mismo, á los moradores ó á un tercero, ni al que lo hiciere para cumplir un deber de humanidad, ó prestar auxilio á la justicia.

CAPÍTULO III

VIOLACIÓN DE SECRETOS

Cartas y papeles privados.

Art. 161. Será reprimido con prisión de quince días á seis meses, el que abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado, ó un despacho telegráfico, telefónico, ó de otra naturaleza, que no le esté dirigido; ó se apoderare indebidamente de una carta, de un pliego, de un despacho ó de otro papel privado, aunque no esté cerrado; ó suprimiere ó desviare de su destino una correspondencia que no le esté dirigida.

Se le aplicará prisión de un mes á un año, si el culpable comunicare á otro ó publicare el contenido de la carta, escrito ó despacho.

Abuso de un empleado de correos ó telégrafos.

Art. 162. Será reprimido con prisión de uno á cuatro años, el empleado de correos ó telégrafos que, abusando de su empleo, se apoderare de una carta, de un pliego, de un telegrama ó de otra pieza de correspondencia, se impusiere de su contenido, la entregare ó comunicare á otro que no sea el destinatario, la suprimiere, la ocultare ó cambiare su texto.



Publicación de una correspondencia privada.

Art. 163. El que, hallándose en posesión de una correspondencia no destinada á la publicidad, la hiciere publicar indebidamente, aunque haya sido dirigida á él, será reprimido con multa de doscientos á mil pesos, si el hecho causare ó pudiere causar perjuicio á tercero.

Revelación de secretos.

Art. 164. Será reprimido con multa de doscientos á mil pesos, é inhabilitación especial, en su caso, por seis meses á tres años, el que teniendo noticia por razón de su estado, oficio, empleo, profesión ó arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa.

De actuaciones.

En la misma pena incurrirá el que divulgarle actuaciones ó procedimientos, que por la ley deban quedar secretos.

CAPÍTULO IV

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DEL TRABAJO É INDUSTRIA

Compeler á una huelga.

Art. 165. Será reprimido con prisión de seis meses á dos años, el que ejerciere violencia ó amenazas sobre otro, para compelerlo á tomar parte en una huelga.

Impedir el ejercicio de industria ó comercio.

Art. 166. Será reprimido con prisión de un mes á un año, el que empleare violencias ó amenazas contra otro, para restringir ó impedir el ejercicio de su industria ó comercio.

Propaganda desleal.

Art. 167. Será reprimido con multa de dos mil á diez mil pesos, el que por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas ó cualquier medio de propaganda desleal, tratare con un fin interesado, de desviar la clientela de un establecimiento comercial ó industrial.

CAPÍTULO V

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE CULTOS

Art. 168. Será reprimido con prisión de un mes á un año, el que impidiere ó perturbare la celebración de una ceremonia ó función religiosa.

CAPÍTULO VI

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE REUNIÓN

Art. 169. Será reprimido con prisión de un mes á un año, el que impidiere ó turbare una reunión lícita.

CAPÍTULO VII

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE LA PRENSA

Art. 170. Sufrirá prisión de un mes á un año, el que impidiere ó estorbare la libre circulación de un libro ó periódico que no contenga escritos ilícitos.

CAPÍTULO VIII

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD POLÍTICA

En general.

Art. 171. Será reprimido con prisión de seis meses á dos años, ó inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, el que por medio de violencia, amenaza, tumulto ó fraude, impidiere ó estorbare el ejercicio de algún derecho político, no hallándose comprendido en otra disposición de este Código.

Contra la libertad de sufragio.

Art. 172. Serán reprimidos con prisión de un mes á un año:

- 1°. El que impidiere á alguien ejercer el derecho de sufragio en una elección nacional, provincial ó municipal;
- 2°. El que, con violencia ó amenaza, compeliere á otro á ejercer un derecho de sufragio en un sentido determinado;
- 3°. El que se inscribiere en más de una sección elec-





toral, ó votare ó se presentare á votar más de una vez en la misma elección;

4°. El que votare ó pretendiere votar, haciéndose pasar por otra persona;

5°. El que, por medio de dádivas ó promesas, determinar á otro á no ejercer su derecho electoral, ó á ejecutarlo de cierta manera; y el elector que consintiere en ejecutar estos actos.

Si en cualquiera de los casos precedentes, el autor del hecho fuere un funcionario público, se le impondrá, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo que el de la condena.

Coacción de funcionarios sobre empleados.

Art. 173. Será reprimido con prisión de un mes á un año é inhabilitación absoluta por doble tiempo, el funcionario público nacional, provincial ó municipal, que instigare á los empleados que tenga bajo su dependencia á adherir á candidatos ó partidos determinados.

Agravaciones.

Art. 174. Serán reprimidos con prisión de seis meses á dos años é inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena:

1°. El encargado de la formación del registro de electores nacionales, provinciales ó municipales, que omitiere la inscripción de un elector, ó inscribiere el nombre de una persona supuesta, ó que no deba ser inscripta;

2°. El receptor de votos que dejare de consignar un sufragio emitido, ó que lo consignare adulterándolo, ó que supusiere la emisión de un voto que no ha tenido lugar, ó que admitiere como legítimo el voto de una persona que no sea elector, ó que se presente con nombre ajeno;

3°. El que substraier, destruyere ó falsificare las listas de votos, ó por cualquier medio hiciere imposible ó

defectuoso el escrutinio, ó falseare el resultado de una elección;

4º. El que impidiere la celebración de un comicio, ó perturbare el orden en él.

Pena del cómplice.

Art. 175. Serán reprimidos con prisión de un mes á un año, é inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los particulares que cooperaren á la ejecución de los delitos previstos en los números 1 y 2 del artículo precedente.

No procede la libertad condicional.

Art. 176. Los autores de delitos contra la libertad política, no gozarán del beneficio de la libertad condicional.

TÍTULO VI

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

CAPÍTULO I

HURTO

En general.

Art. 177. Será reprimido con prisión de un mes á dos años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total ó parcialmente ajena,

Calificado.

Art. 178. Se aplicará prisión de uno á seis años, en los casos siguientes:

- 1º. Cuando el hurto fuere de animales en rebaño, ó de productos separados del suelo, y dejados por necesidad en el campo;
- 2º. Cuando el delito se cometiere con abuso de confianza, ó con auxilio de un doméstico ó dependiente de la casa;
- 3º. Cuando el hurto se cometiere con ocasión de un





incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada ó motín, ó aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre ó conmoción pública, ó de un infortunio particular del damnificado;

4°. Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave falsa ú otro instrumento semejante, para penetrar al lugar donde se halle la cosa objeto de la substracción, ó de la llave verdadera que hubiere sido substraída ó hallada;

5°. Cuando se perpetrare con escalamiento.

CAPÍTULO II

ROBO

En general.

Art. 179. Será reprimido con prisión de uno á seis años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total ó parcialmente ajena, con fuerza en las cosas, ó con violencia ó intimidación en las personas, sea que la violencia ó intimidación tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo ó después de cometido para procurar su impunidad.

Con homicidio.

Art. 180. Se impondrá presidio de diez á veinticinco años, si con motivo ú ocasión del robo resultare un homicidio.

Otras agravantes.

Art. 181. Se aplicará prisión de cinco á quince años:

1°. Si por las violencias ejercidas para consumir el robo, se pusiere en peligro de muerte á una persona, ó se alterare permanentemente su salud;

2°. Si el robo se cometiere en despoblado y en banda.

Art. 182. Se aplicará prisión de tres á diez años:

1°. Si se cometiere el robo en despoblado y con armas;

2°. Si se cometiere en lugares poblados y en banda;



- 3°. Si se perpetrare el robo con perforación ó fractura de pared, cerco, puerta ó ventana de un lugar habitado, ó sus dependencias inmediatas;
- 4°. Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el art. 178.

CAPÍTULO III

EXTORSIÓN

Por violencia ó simulación de autoridad.

Art. 183. Será reprimido con prisión de uno á cuatro años el que, con violencia ó intimidación, simulando orden de autoridad pública, obligue á otro á enviar, depositar ó poner á su disposición ó á la de un tercero, cosas, dinero ó documentos que produzcan efectos jurídicos.

Por amenaza de imputaciones contra el honor.

Art. 184. Será reprimido con prisión de seis meses á dos años el que, por amenaza de imputaciones contra el honor ó de violación de secretos, obligare á otro ó intentare compeler á otro á la entrega de un valor ó de una cosa cualquiera que no sea del culpable, á contraer una obligación ó á extinguir un crédito.

Por rehenes para sacar rescate.

Art. 185. Sufrirá prisión de tres á diez años el que detuviere en rehenes á una persona para sacar rescate.

Por sustracción de un cadáver.

Art. 186. Sufrirá prisión de dos á seis años el que sustrajere un cadáver para hacerse pagar su devolución.

CAPÍTULO IV

ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES

En general.

Art. 187. Será reprimido con prisión de un mes á seis años el que defraudare á otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza, ó aparentando bienes, crédito, comisión, empresa ó negociación, ó valiéndose de cualquier otro ardid ó engaño.



Casos particulares de defraudación.

Art. 188. Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se considerarán casos especiales de defraudación, y sufrirán la pena que él establece:

En substancia, calidad ó cantidad.

- 1°. El que defraudare á otro en la substancia, calidad ó cantidad de las cosas que le entregue en virtud de contrato ó de un título obligatorio;

Abuso de depósito, comisión ó administración.

- 2°. El que con perjuicio de otro, negare haber recibido, ó se negare á restituir, ó no restituyere á su debido tiempo, dinero, efectos, ó cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración, ú otro título que produzca obligación de entregar ó devolver;

Por subscripción de un documento.

- 3°. El que defraudare, haciendo subscribir con engaño algún documento;

Abuso de firma en blanco.

- 4°. El que cometiere alguna defraudación abusando de firma en blanco, extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo que la dió ó de tercero;

Substracción de una cosa mueble por su dueño.

- 5°. El dueño de una cosa mueble que la substraiga de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo ó de tercero;

Simulación.

- 6°. El que otorgare en perjuicio de otro, un contrato simulado ó falsos recibos;

Engaño en las cuentas ó gastos.

- 7°. El comisionista, capitán de buque ó cualquier otro



mandatario que cometiere defraudación, alterando en sus cuentas los precios ó condiciones de los contratos, suponiendo gastos ó exagerando los que hubiere hecho;

Ocultación ó mutilación de un proceso.

8°. El que cometiere defraudación, substituyendo, ocultando ó mutilando algún proceso, expediente, documento ú otro papel importante;

Ilícita disposición de bienes.

9°. El que vendiere ó gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos ó estuvieren embargados ó gravados; y el que vendiere, gravare ó arrendare como propios, bienes ajenos;

Supuesta remuneración á jueces ó empleados.

10. El que defraudare, con pretexto de supuesta remuneración á los jueces ú otros empleados públicos.

Con pena mayor.

Art. 189. Sufrirá prisión de dos á seis años:

Incendio ó destrucción de una cosa asegurada.

1°. El que para procurarse á sí mismo ó procurar á otro un provecho ilegal en perjuicio de un asegurador ó de un dador de préstamo á la gruesa, incendiare ó destruyere una cosa asegurada ó una nave asegurada, ó cuya carga ó flete estén asegurados, ó sobre la cual se haya efectuado un préstamo á la gruesa;

Abuso de la inexperiencia de un menor ó incapaz.

2°. El que abusare de las necesidades, pasiones ó inexperiencia de un menor, ó de un incapaz, declarado ó no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier efecto jurídico, en daño de él ó de otro, aunque el acto sea civilmente nulo;

Pesas ó medidas falsas.

3°. El que defraudare usando de pesas ó medidas falsas;



Fraude en materiales de construcción.

- 4°. El empresario ó constructor de una obra cualquiera, ó el vendedor de materiales de construcción, que cometiere, en la ejecución de la obra ó en la entrega de los materiales, un acto fraudulento capaz de poner en peligro la seguridad de las personas, de los bienes ó del Estado;

En perjuicio de la administración pública.

- 5°. El que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública.

En los casos de los dos números precedentes, el culpable, si fuere empleado público, sufrirá además, inhabilitación especial perpetua.

Fraude de un servicio ó de alimentos.

Art. 190. Será reprimido con prisión de quince dias á seis meses, el que consumiere bebidas ó alimentos en establecimiento que ejerza ese comercio, ó se hiciere prestar un servicio cualquiera de los de pago inmediato, y no los abonare al ser requerido.

Con pena menor.

Art. 191. Será reprimido con multa de quinientos á dos mil pesos:

Hallazgo de una cosa ajena.

- 1°. El que encontrare perdida una cosa que no le pertenecza, ó un tesoro, y se apropiare la cosa, ó la parte del tesoro correspondiente al propietario del suelo, sin observar las prescripciones del Código Civil;

Apropiación por error ó caso fortuito.

- 2°. El que se apropiare una cosa ajena, en cuya tenencia hubiere entrado á consecuencia de un error ó de un caso fortuito;

Apropiación ó venta de la cosa recibida en prenda.

- 3°. El que vendiere la prenda sobre que prestò dinero, ó se la apropiare ó dispusiere de ella, sin las formalidades legales,

**Quiebra fraudulenta.**

Art. 192. Será reprimido como quebrado fraudulento, con prisión de dos á seis años é inhabilitación especial de tres á diez años, el comerciante declarado en quiebra, que, en fraude de sus acreedores, hubiere incurrido en alguno de los hechos siguientes:

- 1°. Simular ó suponer deudas, enajenaciones, gastos ó pérdidas;
- 2°. No justificar la salida ó existencia de bienes que debiera tener; sustraer ú ocultar alguna cosa que correspondiere á la masa;
- 3°. Conceder ventajas indebidas á cualquier acreedor.

Quiebra culpable.

Art. 193. Será reprimido como quebrado culpable, con prisión de un mes á un año é inhabilitación especial de dos á cinco años, el comerciante que hubiere causado su propia quiebra y perjudicado á sus acreedores, por sus gastos excesivos con relación al capital y al número de personas de su familia, especulaciones ruinosas, juego, abandono de sus negocios, ó cualquier otro acto de negligencia ó imprudencia manifiestas.

Quiebra de una sociedad anónima ó cooperativa.

Art. 194. Cuando se tratare de la quiebra de una sociedad anónima ó cooperativa, ó de una persona jurídica que ejerza el comercio, todo director, administrador ó gerente de la sociedad ó establecimiento fallido, que hubiere cooperado á la ejecución de alguno de los actos á que se refieren los artículos anteriores, será reprimido con la pena del quebrado fraudulento ó culpable, en su caso.

Deudor no comerciante.

Art. 195. Será reprimido con prisión de uno á cuatro años, el deudor no comerciante concursado civilmente.

que, para defraudar á sus acreedores, hubiere cometido ó cometiere alguno de los actos mencionados en el art. 193.

Colusión en un concordato, convenio ó transacción.

Art. 196. Será reprimido con prisión de un mes á un año, el acreedor que consintiere en un concordato, convenio ó transacción judicial, en virtud de una connivencia con el deudor ó con un tercero, por la cual hubiere estipulado ventajas especiales para el caso de aceptación del concordato, convenio ó transacción.

La misma pena sufrirá, en su caso, todo director, gerente ó administrador de una sociedad anónima ó cooperativa, ó de una persona jurídica de otra índole, en estado de quiebra ó de concurso judicial de bienes, que concluyere un convenio de ese género.

CAPÍTULO VI

USURPACIÓN

De un inmueble:

Art. 197. Será reprimido con prisión de un mes á dos años:

Despojo.

- 1°. El que por violencia, engaño ó abuso de confianza, despojare á otro de la posesión ó tenencia de un bien inmueble, ó de un derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre ó anticresis, constituido sobre un inmueble;

Alteración de límites.

- 2°. El que para apoderarse de todo ó parte de un inmueble, destruyere ó alterare los términos ó límites del mismo;

Turbación de la posesión.

- 3°. El que, con violencias ó amenazas, trabare la posesión de un inmueble.





Usurpación de aguas.

Art. 198. Será reprimido con prisión de quince días á un año:

- 1º. El que ilícitamente sacare aguas de represas, estanques ú otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales ó acueductos, ó las sacare en mayor cantidad que aquella á que tenga derecho;
- 2º. El que estorbare el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas;
- 3º. El que ilícitamente represare, desviare ó detuviere las aguas de los ríos, arroyos, canales ó fuentes, ó usurpare un derecho cualquiera referente al curso de ellas.

La pena se aumentará hasta dos años, si para cometer los delitos expresados en los números anteriores, se rompieren ó alteraren diques, esclusas, compuertas, ú otras obras semejantes, hechas en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales ó acueductos.

CAPÍTULO VII

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL É INDUSTRIAL

Art. 199. Será reprimido con multa de mil á diez mil pesos:

Reproducción de una obra y explotación de un invento ajeno.

- 1º. El que sin consentimiento del autor ó de su sucesor, reprodujere una obra literaria, científica ó artística, ó explotare un invento ó descubrimiento ajeno, á menos que la propiedad exclusiva de la obra, invento ó descubrimiento, se encuentre extinguida.

Esta disposición comprende la representación de piezas teatrales;

Marca de fábrica ó de comercio.

- 2º. El que falsificare ó adulterare una marca de fábrica ó de comercio;



Uso de marca ajena.

- 3°. El que pusiere, sobre sus productos ó sobre los efectos de su comercio, una marca ajena;

Venta con marca falsificada.

- 4°. El que vendiere, pusiere en venta, ó se prestare á vender ó á circular, artículos con marca de fábrica ó de comercio falsificada, ó fraudulentamente aplicada;

Abuso del nombre de un comerciante, etc.

- 5°. El que hiciere uso, sin derecho, del nombre de un comerciante, de una razón social, ó de la muestra ó designación de una fábrica ó de una casa de comercio.

CAPÍTULO VIII

DAÑOS

En general.

Art. 200. Será reprimido con prisión de quince días á un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer, ó de cualquier modo dañare una cosa mueble ó inmueble, ó un animal, total ó parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado.

Agravaciones.

Art. 201. La pena será de tres meses á cuatro años de prisión, si mediare cualquiera de las circunstancias siguientes:

- 1°. Ejecutarse el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad, ó en venganza de sus determinaciones;
- 2°. Producir infección ó contagio en aves ú otros animales domésticos;
- 3°. Emplear sustancias venenosas ó corrosivas;
- 4°. Cometer el delito en despoblado y en banda;
- 5°. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos, ó en puentes, caminos, paseos, ú otros bienes de uso público; ó en tumbas, signos conmemorativos,

monumentos, estatuas, cuadros ú otros objetos de arte, colocados en edificios ó lugares públicos.

CAPÍTULO IX

DISPOSICIONES GENERALES

Hurtos, defraudaciones y daños.

Art. 202. Están exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la civil, por los hurtos, defraudaciones ó daños que recíprocamente se causaren :

- 1°. Los cónyuges, ascendientes, descendientes, y afines en la línea recta;
- 2°. El consorte viudo, respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado á poder de otro;
- 3°. Los hermanos y cuñados si viviesen juntos.

La excepción establecida en el párrafo anterior, no es aplicable á los extraños que participen del delito.

TÍTULO VII

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO I

INCENDIOS Y OTROS ESTRAGOS

Incendio.

Art. 203. El que causare incendio, explosión ó inundación, será reprimido :

- 1°. Con presidio de tres á diez años, si hubiere peligro común para los bienes;
- 2°. Con prisión de tres á quince años, si hubiere peligro para un archivo público, biblioteca, museo, arsenal, astillero, fábrica de pólvora ó de pirotecnia militar, ó parque de artilleria;
- 3°. Con prisión de tres á quince años, si hubiere peligro de muerte para alguna persona;
- 4°. Con presidio de diez á veinte años, si el hecho fuere causa inmediata de la muerte de alguna persona.



Estrago.

Art. 204. Incurrirá, según los casos, en las penas señaladas en el artículo precedente, el que causare estrago por medio de inmersión ó varamiento de nave, derrumbe de un edificio, inundación de una mina, ó cualquier otro medio poderoso de destrucción.

Peligro por destrucción ó inutilización de diques, etc.

Art. 205. Será reprimido con prisión de uno á seis años, el que, destruyendo ó inutilizando diques ú otras obras destinadas á la defensa común contra las inundaciones ú otros desastres, hiciere surgir el peligro de que éstos se produzcan.

La misma pena se aplicará al que, para impedir la extinción de un incendio ó las obras de defensa contra una inundación, sumersión, naufragio ú otro desastre, substraere, ocultare ó hiciere inservibles, materiales, instrumentos ú otros medios destinados á la extinción ó á la defensa referidas.

Por imprudencia, negligencia ó impericia.

Art. 206. Será reprimido con prisión de un mes á un año, el que, por imprudencia ó negligencia, por impericia en su arte ó profesión, ó por inobservancia de los reglamentos ú ordenanzas, causare un incendio ú otro estrago.

Si el hecho ú omisión culpable, pusiere en peligro de muerte á alguna persona, ó causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cuatro años.

CÁPÍTULO II

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y DE COMUNICACIÓN

Inutilización ó destrucción de vías ú obras.

Art. 207. Será reprimido con prisión de seis meses á dos años, el que inutilizare ó destruyere, en todo ó en parte, las vías ú obras destinadas á la comunicación pública por





tierra ó por agua, ó impidiere ó estorbare la ejecución de las medidas adoptadas para seguridad de las mismas.

El máximun se elevará á seis años, si resultare peligro para las personas. Si resultare la muerte de alguna persona, la pena será de tres á quince años.

Detener ó entorpecer la marcha de un tren.

Art. 208. El que empleare cualquier medio para detener ó entorpecer la marcha de un tren, ó para hacerlo descarrilar, será reprimido:

- 1°. Con prisión de seis meses á tres años, si no se produjere descarrilamiento ú otro accidente;
- 2°. Con prisión de dos á seis años, si se produjere descarrilamiento ú otro accidente;
- 3°. Con prisión de tres á diez años, si á consecuencia del accidente, resultare lesionada alguna persona;
- 4°. Con presidio de diez á veinticinco años, si resultare la muerte de alguna persona;

Interrupción de telégrafo ó de teléfono de un ferrocarril.

Art. 209. Será reprimido con las penas establecidas en el artículo anterior, en sus casos respectivos, el que ejecutare cualquier acto tendiente á interrumpir el funcionamiento de un telégrafo ó teléfono, destinado al servicio de un ferrocarril.

Arrojar proyectiles contra un tren en marcha.

Art. 210. Será reprimido con prisión de un mes á un año, si el hecho no importare un delito más severamente penado, el que arrojarle cuerpos contundentes ó proyectiles contra un tren ó tranvía en marcha.

Peligro de nave ó construcción flotante.

Art. 211. Será reprimido con prisión de uno á seis años, el que ejecutare cualquier acto tendiente á poner en peligro la seguridad de una nave ó construcción flotante, ó á detener ó entorpecer la navegación.

Si el hecho produjere naufragio, avería ó varamiento, la pena será de tres á doce años de prisión.



Si el accidente causare lesión á alguna persona, la pena será de tres á quince años de prisión, y si ocasionare la muerte, de diez á veinticinco años de presidio.

Abandono del servicio de un tren ó de un buque.

Art. 212. Serán reprimidos con prisión de un mes á un año, si el hecho no importare un delito más severamente penado, los conductores, capitanes, pilotos, mecánicos y demás empleados de un tren ó de un buque, que abandonaren su puesto durante su servicio respectivo.

Por imprudencia, negligencia ó impericia.

Art. 213. Será reprimido con prisión de seis meses á dos años, el que por imprudencia ó negligencia, ó por impericia en su arte ó profesión, ó por inobservancia de los reglamentos ú ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio, ú otro accidente previsto en este capítulo.

Si del hecho resultare lesionada ó muerta alguna persona, se impondrá prisión de uno á cuatro años.

Interrupción de comunicaciones telegráficas ó telefónicas.

Art. 214. Será reprimido con prisión de seis meses á dos años, el que interrumpiere ó entorpeciere la comunicación telegráfica ó telefónica, ó resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida.

CAPÍTULO III.

PIRATERÍA

Art. 215. Será reprimido con prisión de tres á quince años:

Depredación ó violencia contra un buque, etc.

1.º El que practicare en la mar ó en los ríos de la República, algún acto de depredación ó violencia contra un buque ó contra personas ó cosas que en él se encuentren, sin estar autorizado por alguna potencia beligerante, ó sin que el buque por medio del cual ejecute el acto, pertenezca á la marina de guerra de alguna potencia reconocida;

Abuso de patente de corso.

- 2.º El que, abusando de una patente de corso, legítimamente concedida, practicar algún acto de depredación ó cualquiera hostilidad contra buques de la República ó de otra nación, para hostilizar á la cual no estuviere autorizado;



Fraude ó violencia contra el comandante de un buque.

- 3.º El que se apoderare de algún buque ó de lo que perteneciere á su equipaje, por medio de fraude ó violencia cometida contra su comandante;

Entrega de un buque á piratas.

- 4.º El que entregare á piratas un buque, su carga, ó lo que perteneciere á su tripulación;

Oposición á la defensa del buque.

- 5.º El que, con amenazas ó violencias, se opusiere á que el comandante ó la tripulación defienda el buque atacado por piratas;

Destinación de un buque á la piratería.

- 6.º El que, por cuenta propia ó ajena, equipare un buque destinado á la piratería;

Tráfico con piratas.

- 7.º El argentino ó extranjero residente en la República, que traficare con piratas, ó les suministrare auxilios;

Buque armado con diversas patentes.

- 8.º El comandante de un buque armado, que navegare con dos ó más patentes de diversas potencias.

Con homicidio.

Art. 216. Si los actos de violencia ú hostilidad mencionados en el artículo anterior, fueren seguidos de la muerte de alguna persona que se encontrare en el buque atacado, la pena será de diez á veinticinco años de presidio.

CAPÍTULO IV

DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA

Envenenar ó adulterar aguas potables ó alimentos ó medicinas.

Art. 217. Será reprimido con prisión de tres á diez años, el que envenenare ó adulterare de un modo peligroso para la salud, aguas potables ó substancias alimenticias ó medicinales, destinadas al uso público ó al consumo de una colectividad de personas.

Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez á veinticinco años de presidio.

Venta ó distribución de los mismos.

Art. 218. Las penas del artículo precedente serán aplicadas, al que vendiere, pusiere en venta, entregare ó distribuyere medicamentos ó mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo.

Contagio de enfermedad peligrosa.

Art. 219. Será reprimido con prisión de tres á quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.

Imprudencia, negligencia ó impericia.

Art. 220. Cuando alguno de los hechos previstos en los tres artículos anteriores, fuere cometido por imprudencia ó negligencia, ó por impericia en el propio arte ó profesión, ó por inobservancia de los reglamentos ú ordenanzas, se impondrá multa de quinientos á dos mil pesos, si no resultare enfermedad ó muerte de alguna persona, y prisión de seis meses á dos años si resultare enfermedad ó muerte.

Violación de prescripciones médicas en la preparación de medicinas.

Art. 221. Será reprimido con multa de quinientos á dos mil pesos, el que estando autorizado para la venta de substancias medicinales, las suministrare en especie, calidad ó cantidad no correspondiente á las prescripciones médicas, ó diversa de la declarada ó convenida.





Si del hecho resultare enfermedad ó muerte de alguna persona, la pena será de dos á seis años de prisión.

Violación de medidas antiepidémicas.

Art. 222. Será reprimido con prisión de seis meses á dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción ó propagación de una epidemia.

Policia sanitaria animal.

Art. 223. Será reprimido con prisión de uno á seis meses, el que violare las reglas establecidas por las leyes de policia sanitaria animal.

Agravaciones.

Art. 224. En el caso de condenación por un delito previsto en este capítulo, el culpable, si fuere funcionario público ó ejerciere alguna profesión ó arte, sufrirá, además, inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena. Si la pena impuesta fuere la de multa, la inhabilitación especial durará de un mes á un año.

Ejercicio ilegal de la medicina.

Art. 225. Será reprimido con prisión de quince días á un año:

- 1.º El que sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar, ó excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare ó aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo, ó cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aun á título gratuito;
- 2.º El que con título ó autorización para el ejercicio de un arte de curar, anunciare ó prometiére la curación de enfermedades á término fijo, ó por medios secretos ó infalibles;
- 3.º El que con título ó autorización para el ejercicio de un arte de curar, prestare su nombre á otro que no tuviere título ó autorización, para que ejerza los actos á que se refiere el inciso 1.º de este artículo.



TÍTULO VIII.

DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO

CAPÍTULO I.

INSTIGACIÓN A COMETER DELITOS

Instigación pública a cometer delitos.

Art. 226. El que publicamente instigare a cometer un delito, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de un mes á cuatro años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 43.

Si la instigación produjere efecto, el instigador será penado como autor del hecho cometido.

Instigación al odio contra determinada persona ó institución.

Art. 227. Será reprimido con prisión de quince días á un año, el que á sabiendas, circulara ó fijare en lugares públicos, un escrito incitando al odio ó menosprecio contra determinada persona ó institución.

CAPÍTULO II.

ASOCIACIÓN ILÍCITA

Para cometer delitos.

Art. 228. Será reprimido con prisión de un mes á cinco años, el que tomare parte en una asociación ó banda de tres ó más personas, destinada á cometer delitos, por el solo hecho de ser miembro de la asociación.

Para otro fin ilícito.

Art. 229. Será reprimido con prisión de quince días á un año, el que formare parte de cualquiera otra asociación con un fin ilícito.

CAPÍTULO III.

INTIMIDACIÓN PÚBLICA

Art. 230. Será reprimido con prisión de un mes á dos años, el que para infundir un temor público, ó suscitar tumultos ó desórdenes, hiciere señales, diere gritos de alarma, hiciere estallar bombas ó materias explosivas, ó amenazare con un desastre de peligro común.

TITULO IX.
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN
CAPÍTULO I.
TRAICIÓN



Traición.

Art. 231. Será reprimido con penitenciaría de diez á veinticinco años ó presidio por tiempo indeterminado, y en uno ú otro caso inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este Código, todo argentino ó toda persona que deba obediencia á la Nación, que tomare las armas contra ésta, se uniere á sus enemigos, ó les prestare cualquier ayuda ó socorro.

Agravaciones.

Art. 232. Será reprimido con presidio por tiempo indeterminado, el que cometiere el delito previsto en el artículo precedente, en los casos siguientes:

- 1.º Si ejecutare un hecho dirigido á someter, total ó parcialmente, la Nación, al dominio extranjero, ó á menoscabar su independencia ó su integridad;
- 2.º Si indujere ó decidiere á una potencia extranjera, á hacer la guerra contra la República.

Conspiración para la traición.

Art. 233. Será reprimido con prisión de uno á ocho años, el que tomare parte en una conspiración de dos ó más personas, para cometer el delito de traición, en cualquiera de los casos comprendidos en los artículos precedentes, si la conspiración fuere descubierta antes de empezarse su ejecución.

Exención de pena.

Art. 234. Quedará eximido de pena, el que revelare la conspiración á la autoridad, antes de haberse comenzado el procedimiento.



Delitos contra una potencia aliada.

Art. 235. Las penas establecidas en los artículos anteriores se aplicarán también, cuando los hechos previstos en ellos fueren cometidos contra una potencia aliada de la República, en guerra contra un enemigo común.

CAPÍTULO II.

DELITOS QUE COMPROMETEN LA PAZ Y LA DIGNIDAD DE LA NACIÓN

Peligro de una declaración de guerra, represalias, etc.

Art. 236. Será reprimido con prisión de uno á seis años, el que por actos hostiles, no aprobados por el Gobierno Nacional, diere motivo al peligro de una declaración de guerra contra la Nación, expusiere á sus habitantes á experimentar vejaciones ó represalias en sus personas ó en sus bienes, ó alterare las relaciones amistosas del Gobierno Argentino con un Gobierno extranjero.

Si de dichas hostilidades resultare la guerra, la pena será de tres á quince años de prisión.

Violación de tratados, treguas, armisticio, etc.

Art. 237. Se impondrá prisión de seis meses á dos años, al que violare los tratados concluidos con naciones extranjeras, las treguas y armisticios acordados entre la República y una potencia enemiga ó entre sus fuerzas beligerantes de mar ó tierra, ó los salvoconductos debidamente expedidos.

Violación de inmunidades diplomáticas.

Art. 238. Será reprimido con prisión de seis meses á dos años, el que violare las inmunidades del jefe de un Estado ó del representante de una potencia extranjera.

Revelación de secretos políticos ó militares.

Art. 239. Será reprimido con prisión de uno á seis años, el que revelare secretos políticos ó militares concernientes á la seguridad, á los medios de defensa, ó á las relaciones exteriores de la Nación.

En la misma pena incurrirá el que obtuviere la revelación del secreto.

Revelación por imprudencia ó negligencia.

Art. 240. Será reprimido con prisión de un mes á un año ó inhabilitación especial por doble tiempo, el que, por imprudencia ó negligencia, diere á conocer los secretos mencionados en el artículo precedente, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo ú oficio.

Planos de fortificaciones ú obras militares.

Art. 241. Será reprimido con prisión de seis meses á dos años, el que indebidamente levantara planos de fortificaciones, buques, establecimientos, vias ú otras obras militares, ó se introdujere con tal fin, clandestina ó engañosamente en dichos lugares, cuando su acceso estuviere prohibido al público.

Violación de instrucciones diplomáticas.

Art. 242. Será reprimido con prisión de tres á diez años, el que, encargado por el Gobierno Argentino de una negociación con un Estado extranjero, la condujere de un modo perjudicial á la Nación, apartándose de sus instrucciones.

TÍTULO X

DELITOS CONTRA LOS PODERES PÚBLICOS Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL

CAPÍTULO I

REBELIÓN

Alzamiento en armas.

Art. 243. Serán reprimidos con detención de uno á diez años, los que se alzaren en armas para deponer alguno de los poderes públicos del Gobierno Nacional, arrancarle alguna medida ó concesión, ó impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales, ó su formación ó renovación en los términos y formas legales.





Alteración ilícita de la Constitución Nacional.

Art. 244. Será reprimido con detención de tres á diez años, el que ejecutare cualquier acto encaminado á alterar ó destruir, por medios ilícitos, la Constitución Nacional.

Facultades extraordinarias.

Art. 245. Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 232 para los traidores á la patria, los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional, y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren á los Gobernadores de Provincias, facultades extraordinarias, la suma del poder público, ó sumisiones ó supremacías por las que, la vida, el honor ó la fortuna de los argentinos queden á merced de algún gobierno ó de alguna persona (Art. 29 de la Constitución Nacional).

Ejecución de bulas, rescriptos del Papa etc.

Art. 246. Se impondrá detención de seis meses á cuatro años al que ejecutare ó mandare ejecutar decretos de los concilios, bulas, breves y rescriptos del Papa que, para su cumplimiento, necesiten del pase del Gobierno, sin haberlo obtenido; y de uno á seis años de la misma pena, al que los ejecutare ó mandare ejecutar, á pesar de haber sido denegado dicho pase.

CAPÍTULO II

SECCIÓN

Contra poderes públicos provinciales ó de territorios nacionales.

Art. 247. Serán reprimidos con detención de uno á seis años los que, sin rebelarse contra el Gobierno Nacional, armaren una Provincia contra otra, se alzaren en armas para deponer alguno de los poderes públicos de una Provincia ó territorio federal, arrancarle alguna medida ó concesión, ó impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales, ó su formación ó renovación en los términos y formas establecidos en la ley.

Alterar la Constitución de la Provincia.

Art. 248. Serán reprimidos con detención de dos á seis años:



- 1°. Los que ejecutaren cualquier acto encaminado á alterar ó destruir por medios ilícitos, la Constitución de una Provincia;
- 2°. Los que se alzaren en armas para substraer á la obediencia del gobierno de una Provincia, algún departamento ó partido de ésta.

Atribuirse derechos del pueblo é impedir la ejecución de las leyes.

Art. 249. Serán reprimidos con detención de un mes á cuatro años:

- 1°. Los individuos de una fuerza armada ó reunión de personas, que se atribuyeren los derechos del pueblo y petitionaren á nombre de éste (Art. 22 de la Constitución Nacional);
- 2°. Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales ó provinciales, ó de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales ó provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este Código.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES COMUNES Á LOS CAPÍTULOS PRECEDENTES

Intimación á los sublevados.

Art. 250. Luego que se manifieste la rebelión ó sedición, la autoridad nacional más próxima intimará hasta dos veces á los sublevados que inmediatamente se disuelvan ó retiren, dejando pasar entre una y otra intimación, el tiempo necesario para ello.

Si los sublevados no se retiraren inmediatamente después de la segunda intimación, la autoridad hará uso de la fuerza para disolverlos.

No serán necesarias, respectivamente, la primera y segunda intimación, desde que los sublevados hicieren uso de las armas.

Disolución del tumulto.

Art. 251. En caso de disolverse el tumulto, sin haber



causado otro mal que la perturbación momentánea del orden, sólo serán enjuiciados los promotores ó directores, á quienes se reprimirá con la mitad de la pena señalada para el delito.

Conspiración.

Art. 252. El que tomare parte como promotor ó director, en una conspiración de dos ó más personas para cometer los delitos de rebelión ó sedición, será reprimido, si la conspiración fuere descubierta antes de ponerse en ejecución, con la cuarta parte de la pena correspondiente al delito que se trataba de perpetrar.

Seducción de tropas, mando ilegal etc.

Art. 253. El que sedujere tropas, ó usurpare el mando de ellas, de un buque de guerra, de una plaza fuerte ó de un puesto de guardia, ó retuviere ilegalmente un mando político ó militar, para cometer una rebelión ó una sedición, será reprimido con la mitad de la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar.

Si llegare á tener efecto la rebelión ó la sedición, la pena será la establecida para los autores de la rebelión ó de la sedición en los casos respectivos.

Agravación para el funcionario público.

Art. 254. Los funcionarios públicos que hubieren promovido ó ejecutado alguno de los delitos previstos en este título, sufrirán, además, inhabilitación especial por un tiempo doble del de la condena.

Los funcionarios que no hubieren resistido una rebelión ó sedición por todos los medios á su alcance, sufrirán inhabilitación especial de uno á seis años.

Art. 255. Cuando al ejecutar los delitos previstos en este título, el culpable cometiere algún otro, se observarán las reglas establecidas para el concurso de hechos punibles.

TÍTULO XI
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

—
CAPÍTULO I

ATENTADO Y RESISTENCIA CONTRA LA AUTORIDAD



Atentado.

Art. 256. Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que empleare intimidación ó fuerza contra un funcionario público, para exigirle la ejecución ú omisión de un acto propio de sus funciones.

Agravaciones.

Art. 257. La prisión será de seis meses a dos años:

- 1°. Si el hecho se cometiere á mano armada;
- 2°. Si el hecho se cometiere por una reunión de más de tres personas;
- 3°. Si el culpable fuere funcionario público;
- 4°. Si el delincuente pusiere manos en la autoridad.

En el caso de ser funcionario público, el reo sufrirá, además, inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena.

Resistencia.

Art. 258. Será reprimido con prisión de quince días á un año, el que resistiere ó desobedeciere á un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, ó á la persona que le prestare asistencia á requisición de aquél, ó en virtud de una obligación legal.

Funcionarios públicos á los efectos de este capítulo.

Art. 259. Para los efectos de los dos artículos precedentes, se reputará funcionario público, al particular que tratare de aprehender, ó hubiere aprehendido á un delincuente, en flagrante delito.

Perturbar el orden de las sesiones, audiencias, etc.

Art. 260. Será reprimido con prisión de quince días á seis meses:



- 1°. El que perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales ó provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia, ó donde quiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones;
- 2°. El que sin estar comprendido en el artículo 257, impidiere ó estorbare á un funcionario público, cumplir un acto propio de sus funciones.

Inobservancia de formas legales para encausar á un funcionario.

Art. 261. Será reprimido con multa de quinientos á dos mil pesos ó inhabilitación especial de uno á cinco años, el funcionario público que, en el arresto ó formación de causa contra un miembro de los poderes públicos nacionales ó provinciales, de una convención constituyente ó de un colegio electoral, no guardare la forma prescripta en las constituciones ó leyes respectivas.

Violación de deberes de perito ó testigo.

Art. 262. Será reprimido con multa de cincuenta á mil pesos, el que siendo legalmente citado como testigo, perito ó intérprete, se abstuviere de comparecer ó de prestar la declaración ó exposición respectiva.

En el caso del perito ó intérprete, se impondrá, además, al reo, inhabilitación de un mes á un año.

CAPÍTULO II

DESACATO

Provocación á duelo, amenazas ó injurias.

Art. 263. Será reprimido con prisión de quince días á seis meses, el que provocare á duelo, amenazare, injuriare, ó de cualquier modo ofendiere en su dignidad ó decoro, á un funcionario público, á causa del ejercicio de sus funciones, ó al tiempo de practicarlas.

La prisión será de un mes á un año, si el ofendido fuere el Presidente de la Nación, un miembro del Congreso, un Gobernador de Provincia, un Ministro Nacional ó Provincial, un miembro de las Legislaturas provinciales ó un Juez.



No admisión de prueba de las imputaciones.

Art. 264. Al culpable de desacato no se le admitirá la prueba de la verdad ó notoriedad de los hechos ó cualidades atribuidas al ofendido.

CAPÍTULO III

USURPACIÓN DE AUTORIDAD, TÍTULOS É HONORES

Por ejercicio indebido.

Art. 265. Será reprimido con prisión de un mes á un año é inhabilitación especial por doble tiempo:

- 1.º El que asumiere ó ejerciere funciones públicas, sin título ó nombramiento expedido por autoridad competente;
- 2.º El que después de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeño de un cargo público, ó después de haber recibido de la autoridad competente comunicación oficial de la resolución que ordenó la cesantía ó suspensión en sus funciones, continuare ejerciéndolas;
- 3.º El funcionario público que ejerciere funciones correspondientes á otro cargo.

Uso indebido de insignias, títulos etc.

Art. 266. Será reprimido con multa de cincuenta á mil pesos, el que públicamente llevare insignias ó distintivos de un cargo que no ejerciere, ó se arrogare grados académicos, títulos profesionales, ú honores que no le correspondieren.

CAPÍTULO IV

ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Contra la Constitución y las leyes.

Art. 267. Será reprimido con detención de un mes á dos años é inhabilitación por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones ú órdenes contrarias á las constituciones ó leyes nacionales ó provinciales, ó ejecutare

las órdenes ó resoluciones de esta clase existentes, ó no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

Por negativa ó inercia de un acto de su oficio.

Art. 268. Será reprimido con multa de cien á mil pesos é inhabilitación de un mes á un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer ó retardare algún acto de su oficio.

Omisión de auxilio requerido

Art. 269. Será reprimido con detención de un mes á dos años é inhabilitación especial por doble tiempo, el jefe ó agente de la fuerza pública, que rehusare, omitiere ó retardare, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente.

Requerimiento indebido de la fuerza pública.

Art. 270. Será reprimido con detención de un mes á cuatro años é inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que requiriere la asistencia de la fuerza pública contra la ejecución de disposiciones ú órdenes legales de la autoridad, ó de sentencias ó de mandatos judiciales.

Abandono del servicio público.

Art. 271. Será reprimido con multa de cincuenta á quinientos pesos é inhabilitación especial de un mes á un año, el funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público.

Nombramientos ilegales.

Art. 272. Será reprimido con multa de cien á mil pesos é inhabilitación especial de seis meses á dos años, el funcionario público que propusiere ó nombrare para cargo público, á persona en quien no concurrieren los requisitos legales.

En la misma pena incurrirá, el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales.



CAPÍTULO V

VIOLACIÓN DE SELLOS Y DOCUMENTOS



De sellos.

Art. 273. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare los sellos puestos por la autoridad para asegurar la conservación ó la identidad de una cosa.

Si el culpable fuere funcionario público y hubiere cometido el hecho con abuso de su cargo, sufrirá además, inhabilitación especial por doble tiempo.

Si el hecho se hubiere cometido por imprudencia ó negligencia del funcionario público, la pena será de multa de cincuenta a quinientos pesos.

De documentos.

Art. 274. Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años el que substraiga, occultare, destruyere ó inutilizare objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros ó documentos confiados a la custodia de un funcionario ó de otra persona en el interés del servicio público. Si el culpable fuere el mismo depositario, sufrirá, además, inhabilitación especial por doble tiempo.

Si el hecho se cometiere por imprudencia ó negligencia del depositario, éste será reprimido con multa de cincuenta a quinientos pesos.

CAPÍTULO VI

CONCEJO

De un funcionario.

Art. 275. Será reprimido con multa de doscientos á cuatro mil pesos é inhabilitación absoluta por tres á diez años, el funcionario público que por sí ó por persona interpuesta, recibiere dinero ó cualquier otra dádiva, ó aceptare una promesa directa ó indirecta, para hacer ó dejar de hacer algo relativo a sus funciones.

De un juez.

Art. 276. Será reprimido con prisión de cuatro á doce años é inhabilitación absoluta y perpétua, el juez que aceptare



promesa ó dádiva para dictar una resolución ó fallo, en asunto sometido á su competencia.

El que ofreciere dádivas.

Art. 277. Será reprimido con multa de doscientos á cuatro mil pesos el que, directa ó indirectamente, diere ú ofreciere dádivas á un funcionario público, para que haga ú omita un acto relativo á sus funciones. Si la dádiva se hiciere ú ofreciere á un juez, la pena será de un mes á cuatro años de prisión.

Si el culpable fuere funcionario público sufrirá, además, inhabilitación, en el primer caso, por seis meses á seis años, y en el segundo, por uno á diez años.

Aceptación de regalos.

Art. 278. Será reprimido con inhabilitación absoluta de uno á seis años, el funcionario público que admitiere regalos que le fueren presentados en consideración á su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo.

CAPÍTULO VII

MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS

Mala aplicación de fondos.

Art. 279. Será reprimido con inhabilitación especial de un mes á tres años, el funcionario público que diere á los caudales ó efectos que administrare una aplicación diferente de aquella á que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño ó entorpecimiento del servicio á que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída.

Substracción.

Art. 280. Será reprimido con prisión de dos á diez años é inhabilitación absoluta perpétua, el funcionario público que substrañere caudales ó efectos cuya administración, percepción ó custodia le haya sido confiada por razón de su cargo.



Por imprudencia ó negligencia.

Art. 281. Será reprimido con multa del veinte al sesenta por ciento del valor substraído, el funcionario público que, por imprudencia ó negligencia, ó por inobservancia de los reglamentos ó deberes de su cargo, diere ocasión á que se efectuare por otra persona, la substracción de caudales ó efectos de que se trata en el artículo anterior.

Administradores públicos.

Art. 282. Quedan sujetos á las disposiciones anteriores los que administraren ó custodiaren bienes pertenecientes á establecimientos de instrucción pública ó de beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados ó depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan á particulares.

Demora de pagos.

Art. 283. Será reprimido con inhabilitación especial por uno á seis meses, el funcionario público que, teniendo fondos expeditos, demorare injustificadamente un pago ordinario ó decretado por autoridad competente.

En la misma pena incurrirá el funcionario público que, requerido por autoridad competente, rehusare entregar una cantidad ó efecto depositado ó puesto bajo su custodia ó administración.

CAPÍTULO VIII

NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS

Art. 284. Será reprimido con multa del diez al sesenta por ciento del valor de la parte que hubiere tomado en el negocio, é inhabilitación absoluta por uno á cinco años, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta ó por acto simulado, se interesare en cualquier contrato ú operación en que intervenga por razón de su cargo.

Esta disposición será aplicable á los peritos y contadores particulares respecto de los bienes en cuya tasación,

partición ó adjudicación hubieren intervenido, y á los tutores, curadores, albaceas y síndicos respecto de los pertenecientes á pupilos, curados, testamentarias ó concursos.

CAPÍTULO IX

EXACCIONES ILEGALES

De una contribución ilegal.

Art. 285. Será reprimido con multa de cien á mil pesos é inhabilitación especial de un mes á un año, el funcionario público que exigiere una contribución ilegal, ó abusando de su cargo, reclamare ó recibiere, dinero ú otros valores.

La inhabilitación será de uno á cuatro años si la exacción se verificare empleando fuerza.

En provecho propio ó de tercero.

Art. 286. Será reprimido con prisión de uno á diez años é inhabilitación absoluta perpétua, el funcionario público que convirtiere en provecho propio ó de tercero las exacciones expresadas en el artículo anterior.

Cobro indebido de derechos.

Art. 287. Será reprimido con multa del duplo al cuádruplo de la cantidad que hubiere percibido, é inhabilitación especial de un mes á un año, el funcionario público que exigiere por sí ó por persona interpuesta, derechos ó propinas por lo que deba practicar gratuitamente, en virtud de su oficio, ó cobrar mayores derechos que los que le correspondan.

Si, para efectuar la exacción, supusiere orden superior, comisión, mandamiento judicial ú otra autorización legítima, sufrirá, además, inhabilitación especial por uno á seis años.

CAPÍTULO X

PREVARICATO

Resolución contraria á la ley ó á los hechos.

Art. 288. Sufrirá multa de mil á cuatro mil pesos é in-



habilitación absoluta perpetua, el juez que dictare resoluciones contrarias á la ley expresa invocada por las partes ó por él mismo, ó citare, para fundarlas, hechos ó resoluciones falsas.

Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de tres á quince años de prisión é inhabilitación absoluta perpetua.

Lo dispuesto en el párrafo 1º. de este artículo, será aplicable en su caso, á los árbitros y arbitrades amigables componedores.

Por prisión ilegal.

Art. 289. Será reprimido con multa de quinientos á dos mil quinientos pesos é inhabilitación absoluta de uno á seis años, el juez que decretare prisión preventiva por delito en virtud del cual no proceda, ó que prolongare la prisión preventiva que computada en la forma establecida en el artículo 30, hubiere agotado la pena máxima que podría corresponder al procesado por el delito imputado.

De abogados y mandatarios judiciales.

Art. 290. Será reprimido con multa de doscientos á dos mil pesos é inhabilitación especial de uno á seis años, el abogado ó mandatario judicial que defendiere ó representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea ó sucesivamente, ó que, de cualquier otro modo, perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada.

De fiscales, asesores etc.

Art. 291. La disposición del artículo anterior será aplicable á los fiscales, asesores y demás funcionarios encargados de emitir su dictamen ante las autoridades.

CAPÍTULO XI

DENEGACIÓN Y RETARDO DE JUSTICIA

Del juez.

Art. 292. Será reprimido con inhabilitación absoluta de uno á cuatro años, el juez que se negare á juzgar so pretexto de oscuridad, insuficiencia ó silencio de la ley.



En la misma pena incurrirá el juez que retardare la administración de justicia después de requeridos por las partes y de vencidos los términos legales, salvo la prueba de un inconveniente insuperable.

Del funcionario público.

Art. 293. El funcionario público que, faltando á la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes, será reprimido con inhabilitación absoluta de seis meses á dos años, á menos que pruebe que su omisión provino de un inconveniente insuperable.

CAPÍTULO XII

FALSO TESTIMONIO

En general.

Art. 294. Será reprimido con prisión de un mes á cuatro años, el testigo, perito ó intérprete que afirmare una falsedad, ó negare ó callare la verdad, en todo ó en parte, en su deposición, informe, traducción ó interpretación, hecha ante la autoridad competente.

Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de uno á diez años de prisión.

En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.

Mediante cohecho.

Art. 295. La pena del testigo, perito ó intérprete falso cuya declaración fuere prestada mediante cohecho, se agravará con una multa igual al duplo de la cantidad ofrecida ó recibida.

El sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso.

CAPÍTULO XIII

ENCUBRIMIENTO

Hechos reprimidos.

Art. 296. Será reprimido con prisión de quince dias á dos años, el que, sin promesa anterior al delito, cometiere después de su ejecución, alguno de los hechos siguientes:





- 1º. Ocultar al delincuente ó facilitar su fuga, para sustraerlo á la justicia;
- 2º. Procurar la desaparición de los rastros ó pruebas del delito;
- 3º. Guardar, esconder, comprar, vender, ó recibir en prenda ó en cambio los efectos substraídos;
- 4º. Negar á la autoridad, sin motivo legítimo, el permiso de penetrar en el domicilio para tomar la persona del delincuente que se encuentre en él;
- 5º. Guardar habitualmente delincuentes, ú ocultar en la misma forma, armas ó efectos de los mismos, aunque no tuviere conocimiento determinado de los delitos;
- 6º. Dejar de comunicar á la autoridad las noticias que tuviere acerca de la comisión de algún delito cuando estuviere obligado á hacerlo por su profesión ó empleo.

Exención de pena.

Art. 297. Estarán exentos de pena por ocultación los consanguíneos y afines en línea ascendente y descendente, los hermanos, los cónyuges y los afines colaterales en segundo grado.

En los casos de delitos contra las personas, quedarán también exentos de pena por ocultación, los amigos íntimos y los que hubieren recibido grandes beneficios del responsable del delito, antes de su ejecución.

Art. 298. La exención de pena á que se refiere el artículo anterior, se entenderá siempre que la ocultación no se haya hecho por precio ó participando de los efectos del delito.

CAPÍTULO XIV

EVASIÓN

Con violencia ó fuerza.

Art. 299. Será reprimido con prisión de un mes á un año, el que, hallándose legalmente detenido, se evadiere por medio de violencia en las personas ó fuerza en las cosas.

El que favoreciere la evasión.

Art. 300. Será reprimido con prisión de un mes á cuatro



años, el que favoreciere la evasión de algún detenido ó condenado. Y si fuere funcionario público, sufrirá, además, inhabilitación absoluta por triple tiempo.

Si la evasión se produjere por negligencia de un funcionario público, éste será reprimido con multa de cien á mil pesos.

TÍTULO XII

DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA

CAPÍTULO I

FALSIFICACIÓN DE MONEDA, BILLETES DE BANCO, TÍTULOS AL PORTADOR
Y DOCUMENTOS DE CRÉDITO

Falsificar, introducir, circular.

Art. 301. Serán reprimidos con prisión de tres á quince años, el que falsificare moneda que tenga curso legal en la República y el que la introdujere, expendiere ó pusiere en circulación.

Cercenar ó alterar.

Art. 302. Será reprimido con prisión de uno á cinco años, el que cercenare ó alterare moneda de curso legal y el que introdujere expendiere ó pusiere en circulación moneda cercenada ó alterada.

Si la alteración consistiere en cambiar el color de la moneda, la pena será de seis meses á tres años de prisión.

Moneda falsa recibida de buena fé.

Art. 303. Si la moneda falsa, cercenada ó alterada se hubiere recibido de buena fé, y se expendiere ó circulara con conocimiento de la falsedad, cercenamiento ó alteración, la pena será de cien á dos mil pesos de multa.

Billetes y títulos equiparados á moneda.

Art. 304. Para los efectos de los artículos anteriores, quedan equiparados á la moneda, los billetes de banco legalmente autorizados, los títulos de la deuda nacional, provincial, ó municipal y sus cupones, los bonos ó libranzas de los



tesoros nacional, provinciales ó municipales, los títulos, cédulas y acciones al portador emitidos legalmente por los bancos ó compañías autorizados para ello.

Monedas extranjeras.

Art. 305. Si la falsedad, cercenamiento ó alteración se cometiere respecto de monedas extranjeras que no tengan curso legal en la República, ó respecto de billetes de banco, títulos de deuda pública, títulos al portador y documentos de crédito extranjeros, la pena será de uno á cinco años de prisión en el caso del art. 301, de seis meses á dos años en el de art. 302, y de cincuenta á quinientos pesos de multa en el del art. 303.

Emisión ilegal.

Art. 306. Serán reprimidos con prisión de uno á seis años ó inhabilitación absoluta por doble tiempo, el funcionario público y el director ó administrador de un banco ó de una compañía que fabricare ó emitiere ó autorizare la fabricación ó emisión de moneda, con título ó peso inferiores al de la ley, billetes de banco ó cualesquiera títulos, cédulas ó acciones al portador en cantidad superior á la autorizada.

CAPÍTULO II

FALSIFICACIÓN DE SELLOS, TIMBRES Y MARCAS

De sellos oficiales.

Art. 307. Será reprimido con prisión de uno á seis años:

- 1°. El que falsificare sellos oficiales;
- 2°. El que falsificare papel sellado, sellos de correos ó telégrafos ó cualquier otra clase de efectos timbrados cuya emisión esté reservada á la autoridad, ó tenga por objeto el cobro de impuestos.

En estos casos, así como en los de los artículos siguientes, se considerará falsificación la impresión fraudulenta del sello verdadero.



De marcas, contraseñas etc.

Art. 308. Será reprimido con prisión de seis meses á tres años:

- 1º. El que falsificare marcas, contraseñas ó firmas de que se use en las oficinas públicas ó por funcionarios públicos, para contrastar pesas ó medidas ó identificar cualquier objeto;
- 2º. El que falsificare billetes de empresas, sellos, marcas ó contraseñas de fábricas ó establecimientos particulares, exigidas por la ley en cierta clase de trabajos ó de artículos;
- 3º. El que aplicare marcas ó contraseñas de las oficinas públicas, ó los sellos, marcas ó contraseñas de fábricas ó establecimientos particulares, á que se refiere el número precedente, á objetos, obras ó artículos distintos de aquellos á que debían ser aplicados.

Uso de sellos, timbres ó marcas inutilizadas.

Art. 309. Será reprimido con prisión de quince días á un año, el que hiciere desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas ó contraseñas, á que se refieren los artículos anteriores, el signo que indique haber ya servido ó sido inutilizado para el objeto de su expendición.

El que, á sabiendas, usare, hiciere usar ó pusiere en venta estos sellos, timbres, etc., inutilizados, será reprimido con multa de cien á cinco mil pesos.

Con abuso de funciones públicas.

Art. 310. Cuando el culpable de alguno de los delitos comprendidos en los artículos anteriores fuere funcionario público y cometiere el hecho abusando de su cargo, sufrirá, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.

CAPÍTULO III

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL

Falsificar un documento.

Art. 311. El que hiciere en todo ó en parte un docu-



mento falso ó adulterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con prisión de uno á seis años si se tratare de un instrumento público, y con prisión de seis meses á dos años, si se tratare de un instrumento privado.

Insertar declaraciones falsas.

Art. 312. Será reprimido con prisión de uno á seis años, el que insertare ó hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes á un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.

Suprimir ó destruir un documento.

Art. 313. El que suprimiere ó destruyere en todo ó en parte, un documento de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en las penas señaladas en los artículos anteriores, en los casos respectivos.

Falso certificado médico.

Art. 314. Sufrirá prisión de un mes á un año, el médico que diere por escrito un certificado falso, concerniente á la existencia ó inexistencia, presente ó pasada de alguna enfermedad ó lesión.

La pena será de uno á cuatro años, si el falso certificado debiera tener por consecuencia que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto ú otro hospital.

Uso del documento falso.

Art. 315. El que hiciere uso de un documento ó certificado falso ó adulterado, será reprimido como si fuere autor de la falsedad.

Documentos equiparados á instrumentos públicos.

Art. 316. Para los efectos de este capítulo, quedan equiparados á los instrumentos públicos los testamentos ológrafos ó cerrados, las letras de cambio y los títulos de crédito transmisibles por endoso ó al portador, no comprendidos en el artículo 304.



Abuso de funciones públicas.

Art. 317. Cuando alguno de los delitos previstos en este capítulo, fuere ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, el culpable sufrirá, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPÍTULOS PRECEDENTES

Art. 318. Sufrirá prisión de un mes á un año, el que fabricare, introdujere en el país ó conservare en su poder, materias ó instrumentos conocidamente destinados á cometer alguna de las falsificaciones legisladas en este título.

CAPÍTULO V

DE LOS FRAUDES AL COMERCIO Y Á LA INDUSTRIA

Art. 319. Serán reprimidos con prisión de seis meses á dos años:

Alteración de precios por noticias falsas, coalición etc.

1º. El que hiciere alzar ó bajar el precio de las mercaderías, fondos públicos ó valores, por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas, ó por reunión ó coalición entre los principales tenedores de una mercancía ó género, con el fin de no venderla, ó de no venderla sino á un precio determinado;

Oferta fraudulenta, de fondos públicos etc.

2º. El que ofreciere fondos públicos, ó acciones ú obligaciones de alguna sociedad ó persona jurídica, disimulando ú ocultando hechos ó circunstancias verdaderas, ó afirmando ó haciendo entrever hechos ó circunstancias falsas;

Sociedades anónimas: falsos informes ó balances.

3º. El fundador, director, administrador ó síndico de una sociedad anónima ó cooperativa, ó de otro establecimiento mercantil, que publicare un balance ó cualquier otro informe falso ó incompleto.

Actos contrarios á estatutos, leyes ú ordenanzas.

Art. 320. Será reprimido con multa de cuatro mil á veinte mil pesos, el director, gerente ó administrador de una sociedad anónima ó cooperativa, ó de una persona jurídica de otra índole, que prestare su concurso ó consentimiento á actos contrarios á los estatutos, leyes ú ordenanzas que los rijan, á consecuencia de los cuales, la persona jurídica ó la asociación, quedare imposibilitada de satisfacer sus compromisos, ó en la necesidad de ser disuelta.



LIBRO TERCERO

DE LAS FALTAS

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 321. Son aplicables á las faltas las disposiciones contenidas en el libro primero, con las modificaciones siguientes:

Tentativa.

1º. La tentativa de falta no es punible;

Menores.

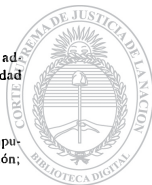
2º. Los menores de catorce años que cometieren alguna falta, serán entregados á la corrección doméstica, sin perjuicio de la cooperación y vigilancia de la autoridad;

Responsabilidad del guardador.

3º. Cuando una falta fuere cometida por persona subordinada á la potestad, dirección ó vigilancia de otra, la pena se aplicará también á ésta, si se tratare de faltas á disposiciones que estaba obligada á hacer observar, y si la falta pudo ser impedida por ella, empleando la debida diligencia.

Si la falta fuere cometida por orden de la persona investida de la potestad ó encargada de la dirección ó vigilancia, y violare disposiciones que ella misma estuviere obligada por la ley á hacer observar, la pena se aplicará también á la persona subordinada,





si ésta hubiere cometido la falta á pesar de la advertencia ó prohibición especial de la autoridad pública;

Reincidencia.

4°. Las condenas impuestas por faltas no serán computadas á los efectos de la reincidencia y su represión;

Comiso.

5°. El comiso de los instrumentos y efectos de las faltas será decretado por los tribunales, á su prudente arbitrio, según los casos y circunstancias;

Regla de aplicación de las penas.

6°. En la aplicación de las penas por faltas, los tribunales procederán según su prudente arbitrio dentro de los límites de cada una, atendiendo á las circunstancias del caso.

TÍTULO II

FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD GENERAL

Art. 322. Será reprimido con multa de veinte á doscientos pesos:

Pozos, excavaciones etc.

1°. El que abriere pozos ó excavaciones, obstruyere con materiales ó escombros, ó cruzare con cuerdas, alambres ó cualquier otro objeto, un camino ú otro paraje de tránsito público, y omitiere las precauciones necesarias para evitar el peligro proveniente de los mismos;

Señales.

2°. El que removiere las señales puestas para indicar un peligro en el tránsito público;

Alumbrado.

3°. El que arbitrariamente apagare el alumbrado pú-



blico, el del exterior de los edificios ó el de los portales ó escaleras de los mismos;

Objeto que cause daño.

- 4°. El que arrojar ó colocare en la calle, sitio público ó edificio habitado, cualquier objeto que pueda causar daño á las personas;

Animal suelto.

- 5°. El que dejare en la vía pública una bestia de carga, de tiro ó de carrera, ó cualquier otro animal, sin haber tomado las precauciones suficientes para que no cause daño, ó excitare ó espantare intencionalmente un animal con peligro para la seguridad de las personas;

Custodia de un loco.

- 6°. El encargado de la guarda ó custodia de un loco, que lo dejare vagar por las calles y sitios públicos, sin la debida vigilancia, ó no diere aviso á la autoridad cuando se substraiera a su custodia;

Arma de fuego.

- 7°. El que en paraje poblado disparare una arma de fuego, ó arrojar un fuego cualquiera con peligro para las personas ó las cosas;

Peligro de incendio.

- 8°. El que contraviniera á las reglas establecidas para evitar la propagación del fuego en las maquinas de vapor, calderas, hornos, estufas, chimeneas, ú otros lugares semejantes, ó dejare de limpiarlos ó cuidarlos, con peligro de incendio;

Edificio que amenaza ruina.

- 9°. El que descuidare la demolición ó reparación á que esté obligado, de edificios que amenacen ruina, con peligro para la seguridad;



Materias explosivas etc.

10. El que infringiere los reglamentos ú ordenanzas sobre la elaboración, tenencia, custodia ó transporte de materias explosivas, inflamables ó corrosivas, ó productos quimicos que puedan causar estragos;

Nodriz.

11. La mujer que sabiendo que esta atacada de enfermedad contagiosa, se colocare como nodriza, ó no manifestare su enfermedad cuando la conoce, estando en aquel servicio, salvo lo dispuesto en los artículos 220 y 221;

Servicio profesional.

12. El médico, cirujano, partera ó flebótomo que sin causa justificada, rehusare ó demorare prestar el servicio profesional que se le solicitare en caso urgente, y el farmacéutico que rehusare ó demorare, sin causa justificada, los medicamentos prescritos por los médicos;

Conducción de vehículos.

13. El que condujere vehículos en lugares poblados, con velocidad que pueda poner en peligro á las personas ó las cosas, ó confiare su manejo á personas inexpertas.

TÍTULO III

FALTAS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO

Art. 323. Será reprimido con prisión de cinco á ciento veinte dias:

Alborotos, cencerradas etc.

- 1°. El que causare alboroto en el pueblo, perturbare una reunión ó fiesta, ú ofendiere á una persona con gritos, cencerradas ú otros ruidos;



Toques de campana, ruidos etc.

2°. El que con gritos, toques de campana ú otros ruidos, ó ejercitando su oficio de un modo contrario á los reglamentos, turbare las ocupaciones ó el reposo de los vecinos;

Vagancia.

3°. El que siendo capaz de trabajar se entregare á la vagancia;

Mendicidad.

4°. El que por holgazanería ó avaricia, siendo capaz de trabajar, mendigare ó enviare á mendigar á un hijo suyo ó á persona confiada á sus cuidados, protección ó vigilancia;

Acto profesional ilícito.

5°. El que, fuera del caso de urgencia, ejecutare, sin título ó permiso de la autoridad, un acto de una profesión que los exija ó traspasare los límites de su autorización;

Armas, pólvora etc.

6°. El que, sin permiso de la autoridad competente, cuando él sea legalmente necesario, fabricare, introducir, pusiere en venta ó expendiere armas, pólvora ú otras materias explosivas;

Uso imprudente de armas.

7°. El que confiare ó permitiere llevar armas de fuego cargadas, á menores de catorce años, ó á cualquier persona que no sepa ó no pueda manejarlas;

Sepulcros, cadáveres, etc.

8°. El que violare sepulcros ó profanare cadáveres ó restos humanos, ó los trasladare ó removiere sin autorización competente.

TÍTULO IV

FALTAS CONTRA LA AUTORIDAD Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Art. 324. Será reprimido con prisión de cinco á sesenta días :

Negativa de declarar el nombre.

- 1°. El que, requerido por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, para declarar su nombre, profesión, estado, lugar del nacimiento ó domicilio, ú otras indicaciones personales, rehusare contestar ó dicre falsos datos;

Anuncios.

- 2°. El que, sin derecho, arrancare, hiciere ilegible ó rompiere un anuncio fijado en paraje público por la autoridad competente;

Registro de estado civil.

- 3° El que no hiciere las declaraciones á que esté legalmente obligado para el registro del estado civil de las personas;
- 4°. El oficial de estado civil ó capitán de buque que infringiere una disposición cualquiera de la ley, concerniente á los registros ó á las actas del estado civil;

Matrimonio religioso sin comprobación del civil.

- 5°. El ministro, pastor ó sacerdote de cualquiera religión ó secta, que procediera á la celebración de un matrimonio religioso, sin tener á la vista el acta de la celebración del matrimonio civil;

Suscripción para el pago de pena pecuniaria.

- 6°. El que promoviere ó levantara una suscripción pública para pagar ó reembolsar una pena pecuniaria;

Ejercicio prohibido de la profesión.

- 7°. El que ejerciere profesión, funciones ó derechos de que estuviere inhabilitado por sentencia;





Reclutamiento ilegal.

- 8º. El que reclutare gente, sin orden de la autoridad respectiva;

Copia ó publicación de documentos.,

- 9º. El que, sin autorización competente tomare copia ó extracto de documentos secretos de la administración, ó los publicare;
10. El que sin autorización competente hiciere ó publicare un plano, dibujo ó descripción de una obra de defensa militar;

Libros de bordo.

11. El capitán de buque que no tuviera á bordo todos los papeles del buque, libros ó documentos exigidos por las leyes ó reglamentos dictados por la autoridad competente.

TITULO V

FALTAS CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES

Ebriedad.

Art. 325. Será reprimido con multa de diez á cien pesos:

- 1º El que se encontrare en un lugar público, en un estado manifiesto de embriaguez;

Bebidas alcohólicas.

- 2º El que en sitio público ó casa abierta al público sirviere bebidas alcohólicas á un niño menor de catorce años ó á una persona ebria ó en estado anormal por debilidad ó alteración de sus facultades mentales;

Corrupción de menores.

- 3º El que admitiere ó facilitare á un menor impúber la entrada en una casa de prostitución ó en otro sitio de corrupción;

Menores en casa de juego.

- 4º. El que admitiere ó facilitare la entrada en una casa

de juego de azar á un menor de edad ó á otra persona incapaz de administrar sus bienes;

Crueldad con los animales.

- 5°. El que cometiere actos de crueldad contra un animal ó sin necesidad lo maltratase ó lo impeliere á fatigas manifestamente excesivas;

Respeto á la mujer.

- 6°. El que en sitio público dirigiere preguntas ó proposiciones irrespetuosas á una mujer que no hubiera dado motivo para ello, ó la siguiere ó molestarle con hechos ó actitudes que no importaren delito;

Adivinaciones.

- 7°. El que se ocupare en interpretar sueños, hacer pronósticos ó adivinaciones, ó abusare de la credulidad pública de otra manera semejante.

Juego.

Art. 326. Serán reprimidos con prisión de cinco á ciento veinte días:

- 1°. El que tuviere una casa de juegos de azar en que se admita al público, sea libremente, sea por presentación de los interesados, afiliados ó socios;
- 2°. El administrador, banquero ó empleado de la casa, cualquiera que sea la categoría del empleado;
- 3°. El que participare del juego ó á quien la autoridad sorprendiera en el interior de una casa de las comprendidas en el presente artículo;
- 4°. El que en cualquier sitio ó bajo cualquier forma, explotare apuestas sobre carreras de caballos, juegos de pelotas, billar, juegos de destreza en general ú otros permitidos por la autoridad, ya sea ofreciendo al público apostar, ó apostando con el público directamente ó por intermediario;
- 5°. El dueño, gerente ó encargado de un local donde se vendieren ó se ofrecieren al público, boletos de



apuestas mútuas, ó se facilitare en cualquier forma la realización de tales apuestas;

- 6º El que se encargare de la compra ó colocación de boletos de apuestas fuera del recinto de los hipódromos;
- 7º. El que hubiera establecido loterías no autorizadas por ley nacional, ó cualquier otro juego semejante no autorizado por el P. E., ó tuviere en su poder los billetes de loterías clandestinas emitidas dentro ó fuera del país;
- 8º. El administrador, propietario, agente ó empleado de casa donde se vendan ó se encuentren billetes de loterías no autorizadas;
- 9º. El que por medio de avisos, anuncios, carteles ó todo otro medio de publicidad, hiciere conocer la existencia de esas loterías;
10. El que publicare ó presentare al público sus extractos;
11. El que introdujere en la República billetes de loterías no autorizadas, ó de cualquier manera los circularen ó exhibieren;
12. El que estableciere ó tuviere en las calles, caminos, plazas ó lugares públicos, juegos de lotería ú otros de azar en que se ofrecieren al juego sumas de dinero.





INDICE ALFABETICO



A

- ABANDONO** de personas 109 al 111. Del servicio de un tren ó art. 272. De destino con daño del servicio público art. 271
- ABOGADOS.** Prevaricato art. 290.
- ABORTO** ver *Vida* delitos contra la, art. 89 al 92.
- ABUSO DE ARMAS,** arts. 107 y 108. De encargo ó confianza y culo 138. Ver libertad individual, delito contra la, art. 148. empleado de correos ó telégrafos art. 162. De depósito, con administración art. 188, inciso 2°. De firma en blanco V. daciones art. 188 inciso 4°. De inexperiencia de un menor ó V. Defraudaciones art. 180 inciso 2°. De nombre art. 199 inc. autoridad art. 267. De funciones públicas, art. 317.
- ACCIONES PENALES** V Extinción art. 63 al 68 y erratas. Ejercicio 4 de las, art. 75. Dependiente de instancia privada art. 76. I art. 77. De adulterio 78. De calumnia, injuria, difamación ó 78. Por los delitos contra la libertad política 81.
- ACTOS.** Obscenos 134. Contrarios á estatutos, leyes ó ordenanzas, i Profesionales ilícitos, V. Faltas art. 323 inc. 5°.
- ACUMULACIÓN** en caso de condena ya impuesta art. 62.
- ACUSACIÓN** V. Ejercicio de acciones art. 76.
- ACUSADOR PARTICULAR.** V. Ejercicio de acciones art. 81.
- ADIVINACIÓN** V. Faltas art. 325 inc. 7°.
- ADMINISTRADORES PÚBLICOS** que por imprudencia ó negligencia ocasión á la substracción de caudales ó efectos, arts. 281, 282
- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA** V. Defraudaciones art. 189 inc. 5°.
- ADULTERIO.** V. Acciones art. 77, 78 y 120.
- AGENTES EN EL EXTRANJERO** art. 1°. inc. 2°.
- AGRAVIADO.** V. Ejercicio de acciones art. 76 y 80.



AGRESIÓN ver Homicidio art. 99. Con armas art. 108. V. Defensa legítima.

ALBACEAS Véase negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas art. 284.

ALBOROTOS, cencerradas etc.—V. Faltas, art. 323 inc. 1°.

ALCAIDE. V. Libertad, delitos contra la, art. 148 inc. 7°. art. 149.

ALEVOSIA. ver *Vida*, delitos contra la, art. 84 inc. 2°. De los padrinos art. 105.

ALTERACIÓN ILÍCITA de la Constitución Nacional, art. 244. De la Constitución de la Provincia art. 248. De moneda art. 302. De precios por noticias falsas, art. 319 inc. 1°.

ALUMBRADO. El que apagare arbitrariamente, art. 322 inc. 3°.

ALZAMIENTO EN ARMAS art. 243. Para deponer alguno de los poderes públicos de una Provincia ó territorio federal art. 247. Para substraer á la obediencia del gobierno una Provincia art. 248 inc. 2°. Para impedir la ejecución de las leyes nacionales ó provinciales etc. artículo 249 inc. 2°.

ALLANACIÓN DE DOMICILIO art. 159. Excepciones 160.

AMENAZAS V. acciones art. 77. V. Corrupción art. 131. V. Libertad artículo 147 inc. 1°. V. Coacción art. 155. De violencia pública art. 156. En general art. 157. V. De imputaciones contra el honor art. 184. V. Desacato art. 263.

ANIMAL suelto en la vía pública, art. 322 inc. 5°. Crueldad con los animales V. Faltas art. 325, inc 5°.

AMNISTÍA. V. Extinción art. 65.

ANCIENTOS. V. Faltas art. 324, inc. 2°.

APROPRIACIÓN por error art. 191 inc. 2°; de cosa recibida en prenda art. 192, inc. 3°.

ARMAS DE FUEGO disparo de, art. 107. De otra clase, art. 108. V. Faltas, art. 322, inc. 7°. V. Faltas art. 323 inciso 6° y 7°.

ASESORES. ver Prevaricato, art. 291.

ASOCIACIÓN ILÍCITA para cometer delitos art. 228. Con otro fin ilícito art. 229.

ATENTADO contra un funcionario público art. 256. Agravaciones art. 257.

ATENUACIONES. ver *Vida*, delitos contra la art. 85. Concurso de, art. 86. V. Lesiones art. 97. V. Abandono de personas.

AUDIENCIAS de los tribunales de justicia art. 260 inc. 1°.

AUTORES quienes se consideran, art. 48.

AUTORIDAD pública simulación de ó orden art 147 inc. 4°. —Abuso de, art. 148.

AUXILIO REQUERIDO, omisión de, art. 270.

B

BEBIDAS alcohólicas. V. Faltas, art. 325 inc. 2°.

BIENES propios del condenado. V. Indemnización art. 74.—Disposición ilícita. V. Defraudación art. 188 inciso 9°.



BILLETES ó TÍTULOS EQUIPARADOS á monedas. V. Falsificación, artículos 304 y 306.
BUENA FE en el recibo expendio ó circulación de moneda falsa art. 303.
BULAS Y RESCRIPTOS DEL PAPA ejecución de las, art. 246.
BUQUE art. 1º inc. 1º. Peligro de la seguridad, art. 211. Abandono del servicio, art. 212. Naufragio de art. 213. V. Piratería.

C

CADÁVER entrega del V. Muerte, art. 10. Substracción de, art. 186 V. Faltas, art. 323 inc. 8º.
CALUMNIA. V. Acciones art. 77 - 79. V. Erratas art. 115.
CAPTAN, V. Piratería art. 215, inc. 5º, 8º y art. 216.
CARTAS Y PAPELES PRIVADOS V. Violación, art. 161 y 162.
CASO FORTUITO apropiación por, art. 191, inc. 2º.
CAUDALES PÚBLICOS—malversación de, art. 279. Substracción de, arts. 290 y 291.
CERCENAMIENTO—de moneda de curso legal art. 302.
COACCIÓN art. 155. Funcionarios sobre todo empleados art. 173. Agravaciones art. 174. Para compeler á una persona á hacer ó no hacer ó tolerar algo art. 155. V. Libertad política, art. 171.
CODELINCUENTE ver Adulterio art. 120 inc. 2º.
COERCIÓN ver Corrupción, art. 131.
COMISO. Por efecto de la condena, art. 29. V. Faltas art. 321 inc. 5º.
COMIECHO—de un funcionario art. 275. De un Juez art. 276. De perito ó intérprete falso art. 295.
CÓMPICES art. 49 Pena del art. 50, 51 y 52. Tentativa de complicidad art. 53. En delitos cometidos por la prensa, art. 54. En los delitos contra la libertad política, art. 175.
COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS ó TELEFÓNICAS. interrupción de art. 215.
CONCORDATO solución en un, art. 196.
CONCURRENCIA desleal. V. Acciones privadas, art. 77.
CONCURSO DE DELITOS arts. 58, 59, 60, 61 y 62. De agravaciones y atenuaciones. V. Lesiones, arts. 96 y 97.
CONDENACIÓN condicional circunstancias de su pronunciamiento art. 32. Extinción de la condena art. 33. Ejecución de la condena, art. 33. Limitaciones, art. 34. No procede en los delitos contra la libertad política art. 176.
CONDENADOS por tribunales provinciales, admisión de art. 25. Bienes propios de los, V. Indemnización art. 74.
CONDUCCIÓN fuera de las fronteras. V. Libertad art. 150.
CONFIANZA abuso de. art. 138.



CONSPIRACIÓN para la traición art. 233. Exención de pena art. 234.
Contra una potencia aliada art. 235. Para cometer los delitos de
rebelión ó sedición art. 252. Agravación para el funcionario pú-
blico arts. 254 y 255.
CONTADORES, Véase negociaciones incompatibles con el ejercicio de fun-
ciones públicas art. 284.
CONTAGIO DE ENFERMEDAD PELIGROSA art. 219. Por imprudencia, ne-
gligencia ó impericia art. 220. V. Faltas art. 322 inc. 11.
CONTRIBUCIÓN exacción ilegal art. 285. En provecho propio ó de tercero
art. 286.
CORREOS abuso de un empleado de, art. 162.
CORRESPONDENCIA PRIVADA publicación de, art. 163.
CORRUPCIÓN y ultraje al pudor art. 127 al 134. V. Faltas art. 325
inc. 3º.
COSA ASEGUurada. V. Defraudaciones — art. 189 inc. 1º. hallazgo de,
art. 191 inc. 1º y 3º.
COSTAS pago de, art. 35 inc. 3º.
CULTOS libertad de, art. 168.
CERPOS LEGISLATIVOS nacionales y provinciales art. 260 inc. 1º.
CRAIDORES véase negociaciones incompatibles con el ejercicio de fun-
ciones públicas art. 284.

D

DÁDIVAS ofrecimiento de, art. 277.
DAÑOS V. Libertad privación de, art. 147-200. Agravaciones art. 201 y
202. V. Faltas art. 322 inc. 4º.
DEBER cumplimiento del, art. 41 inc. 5º.
DECLARACIÓN de guerra peligro de, art. 236. Falsas, el que insertare ó
hiciere insertar art. 312.
DEFENSA LEGÍTIMA V. Responsabilidad art. 41, inc. 7º, y 8º.
DEFRAUDACIÓN casos particulares de, art. 188 y 189 art. 202.
DEMORA de pagos, art. 283.
DENUNCIA del agraviado V. Ejercicio de acciones art. 76.
DEPORTACIÓN en que consiste, art. 24. V. Condenados por tribunales pro-
vinciales art. 25. V. Prisión preventiva art. 30. Como accesoria
art. 57.
DERECHOS cobro indebido de, art. 287.
DESACATO á un funcionario público art. 263-264.
DESAMPARO art. 109. Agravación y atenuación art. 110. Omisión de au-
xilio art. 111.
DESCARILAMIENTO por imprudencia, negligencia ó impericia art. 213.
DESISTIMIENTO del delito. V. Tentativa arts. 45, y 46.



DESPOJO ver Usurpación art. 197 inc. 1º.
DESTINADOS A OBRAS PÚBLICAS art. 12.
DETENCIÓN art. 23. V. Condenados por tribunales provinciales art. 25. V.
Prisión preventiva art. 30.
DETENIDAS en sus propias casas art. 15.
DEUDOR no comerciante art. 195. Colusión art. 196.
DIFAMACIÓN ver Acciones, arts. 77 - 79 - 113. Prueba de la imputación
art. 114. Prohibición de la prueba art. 115. En juicio art. 119.
DIQUES peligro de destrucción ó inutilización art. 203.
DISOLUCIÓN del tumulto art. 251.
DIVORCIO ver adulterio art. 78.
DOCUMENTOS Suscripción de, art. 138 inc. 3º. Violación de, art. 274.
Falsificación de, art. 311. Supresión ó destrucción de, art. 313. Uso
de documento falso, art. 315. Equiparados á instrumentos públicos,
art. 316. V. Faltas art. 324 inc. 9º. y 10.
DOMICILIO violación de, art. 158. Allanación de, art. 159. Excepciones
art. 160.
DUELO con padrinos art. 100. Sin padrinos art. 101. Instigación art. 102.
Agravaciones art. 103-104. Alevosía de los padrinos art. 105. A
muerte art. 106. Provocación á, art. 263.

E

EBRIEDAD V. Faltas, 325 inc. 1º.
EDIFICIO que amenaza ruína, art. 322 inc. 9º.
EJECUCIÓN. De la pena de muerte arts. 8º. y 9º., de la condena condi-
cional art. 33. De bulas, rescriptos del Papa etc. art. 246.
EJERCICIO de las acciones art. 75 al 81. Prohibido de la profesión. Ver
Faltas art. 324 inc. 7º.
EMISIÓN ILEGAL de moneda art. 306.
ENAJENACIÓN MENTAL art. 41 inc. 1º.
ENCUBRIMIENTO art. 296. Exención de pena de, art. 297 - 298.
ENSASAMIENTO ver Vida delitos contra la, art. 84 inc. 2º.
ENVENENAMIENTO de aguas potables, alimentos ó medicinas art. 217-218.
Agravaciones art. 224.
ERROR apropiación por, art. 191 inc. 2º.
ESCALAMIENTOS significación art. 82, art. 178 inc. 5º.
ESCRITOS é IMÁGENES obscenas, art. 133.
ESTABLECIMIENTOS falta de, art. 12. Penal jefe de, V. Libertad indivi-
dual art. 148 inc. 6º. art. 149.
ESTADO CIVIL supresión y suposición de, art. 143. Agravaciones 144.
ESTAFAS y OTRAS DEFRAUDACIONES art. 187. Casos particulares de de-
fraudación art. 188 art. 189 art. 190-191, art. 202.



- ESTRAGOS art. 203-204 y art. 205-206.
- ESTUPRO. V. Ejercicio de las acciones art. 76. De mujer honesta art. 122.
- Agravaciones art. 125 art. 126. Exento de pena art. 137. Con abuso de autoridad art. 138.
- EVASIÓN con violencia ó fuerza art. 299. Favorecimiento de la, art. 300.
- Por negligencia de un funcionario público art. 301.
- EXACCIONES ilegales art. 285. Convertidas en provecho propio de funcionario público ó de tercero art. 286. Si se supusiere orden superior, comisión, mandamiento judicial ú otra autorización legítima art. 287.
- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD art. 41 V. Hartos art. 202. De pena de traición 234. *De pena*, ver Encubrimiento arts. 297, 298.
- EXCEPTADOS DE PRISIÓN art. 15.
- EXHIBICIONES Y PALAERAS OBSCENAS art. 134.
- EXPLOTACIÓN de un invento ajeno art. 199 inc. 1º.
- EXTINCIÓN DE LA PENA, art. 21. De la condena art. 33 V. Erratas por retractación publica ó explicación. De acciones y penas art. 63 inc. 1º. al 4º. Por amnistia art. 65. Por prescripción art. 66 inc. 1º. al 7º. Desde cuando corre art. 67. Con multa art. 68. Por prescripción art. 69 inc. 1º al 5º. Desde cuando corre art. 170 Separadamente para cada partícipe art. 71. Por indulto art. 72. Perdón del ofendido art. 73.—Indemnización pecuniaria art. 74.
- EXTORSIÓN ver acciones privadas art. 77. Por violencia ó simulación art. 183. Por amenazas de imputaciones contra el honor art. 184. Por rehenes para sacar rescate art. 185. Por substracción de cadáver art. 186.

F

- FACULTADES EXTRAORDINARIAS art. 245.
- FALSIFICACIÓN de moneda art. 301. Introducción, expendio ó circulación de moneda de curso legal alterada ó cercenada art. 302. Recibida de buena fe, expendio ó circulación art. 303. De billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito art. 304. De monedas extranjeras art. 305. Emisión ilegal art. 306. De sellos oficiales art. 307.
- FALSO TESTIMONIO en una causa criminal en perjuicio del encausado, art. 294. En declaración prestada mediante cohecho art. 295.
- FALTAS cometidas en el territorio de la Nación art. 1º. inc. 1º. En el extranjero art. 1º inc. 2º. Disposiciones Generales, art. 321. Contra el orden público, art. 323. Contra la autoridad y administración pública, art. 324. Contra las buenas costumbres. art. 325



FERROCARRIL, muerte en accidente de, art. 178, inc. 3°.
FISCALES ver Prevaricato art. 291.
FONDOS mala aplicación de, art. 279. Públicos oferta fraudulenta art. 319 inc. 2°.
FORMAS LEGALES inobservancia de las, para encausar á un funcionario art. 261.
FRAUDE de materiales de construcción V. Defraudaciones art. 189 inc. 4°.
De un servicio de alimentos art. 190.
FUEGO art. 322 inc. 7°.
FUERZA ó AMENAZAS V. Responsabilidad art. 41 inc. 3°. Pública V. Violación art. 121 inc. 3°. Pública requerimiento indebido art. 270.
FUGA incitación á la, art. 153.
FUNCIONARIO PÚBLICO que autoriza matrimonios art. 147 arts. 259 y 260 inc. 2°. art. 261. Que dictare resoluciones ó órdenes contrarias á la Constitución ó leyes nacionales ó provinciales etc., art. 267. Que omitiere, rehusare hacer ó retardare algún acto de su oficio art. 268. Que requiriere la asistencia de la fuerza pública contra la ejecución de disposiciones ó órdenes legales etc., art. 270. Abandono de destino con daño del servicio público art. 271. Que propusiere ó nombrare para cargo público á persona en quien no concurrieren los requisitos legales art. 272.
FUNCIONES PÚBLICAS negociaciones incompatibles con el ejercicio de, art. 284. Abuso de, art. 317.

G

GANZÚA art. 178 inc. 1°.
GRAVEDAD RELATIVA DE LAS PENAS art. 61.
GRITOS art. 323 inc. 1°.
GUARDADOR ó representante. V. Ejercicio de acciones art. 76. art. 80.
De un menor de 10 años art. 152.

H

HALLAZGO de cosa ajena art. 191 inc. 1°.
HECHOS ó omisiones calificados de delitos cometidos en el extranjero art. 2°. Que cae bajo más de una sanción art. 58. Reprimidos con la misma especie de pena art. 59. Reprimidos con penas diferentes art. 60. Gravedad relativa art. 61. Acumulación en caso de condena ya impuesta art. 62.
HONOR delitos contra el, arts. 112 al 119. Amenaza de imputaciones contra el, art. 184.

HUELGA compeler á la, art. 165 art. 202.
 HURTO art. 177. Calificado art. 178. art. 202.
 HOMICIDIO art. 83. Agravaciones art. 84. Atenuaciones art. 85. Concurso de agravaciones y atenuaciones art. 86. Instigación al suicidio art. 87. Por imprudencia art. 88. Aborto art. 89 inc. 1º y 2º.
 art. 90. art. 91. art. 92. V. lesiones graves art. 99. V. Robo art. 180 V. Piratería art. 216.



I

IMÁGENES OSCENAS art. 133.
 IMPRUDENCIA V. Lesiones art. 98. En su arte ó profesión art. 206. Del que causare incendio ú otro estrago art. 206. Del que causare descarrilamiento, naufragio ú otro accidente art. 213. Contagio por. art. 220. En la substracción de caudales públicos art. 281.
 INCAPACIDADES art. 34 inc. 2º.
 INCENDIO V. Delitos contra la vida, art. 84 inc. 2º. V. Defraudaciones art. 189, inciso 1º. Hurto con ocasión de incendio art. 178 inc. 3º. ó impericia para impedir la extinción de, art. 205. Por imprudencia, negligencia ó impericia, art. 206. V. Faltas, art. 322 inc. 8º.
 INCITACIÓN á la fuga de un menor art. 153.
 INDEMNIZACIÓN PECUNIARIA art. 74.
 INDULTO ver Extinción de pena art. 72.
 INDUSTRIA. Libertad de, art. 166.
 INHABILITACIÓN art. 17. Absoluta art. 25. Especial art. 27.
 INJURIAS. Ver Acciones arts. 77 y 79 art. 112. Divulgación de la art. 113. Prueba de la imputación art. 114. Prohibición de la prueba art. 115. Aplicación de la pena art. 118. En juicio art. 119. V. Desacato art. 263. V. Erratas.
 INMUEBLE usurpación de un, art. 197. V. Erratas.
 INSIGNIAS uso indebido art. 266.
 INSTIGACIÓN al duelo art. 102. Pública á cometer delitos art. 226. Al odio art. 227.
 INTERPRETE violación de deberes art. 262 ver Falso testimonio arts. 204 y 295.
 INTIMACIÓN pública art. 230. A los sublevados art. 250.
 INTIMIDACIÓN. V. Violación art. 121 inc. 3º. Pública art. 230. V. Erratas.
 INUTILIZACIÓN ó destrucción art. 207.
 INVENTO AJENO explotación de, art. 199, inc. 1º.

J

JUEGO Menores en casa de, V. Faltas art. 325 inc. 4°. y art. 326.
JUEZ Cobecho de un, art. 276. Que denegare ó retardare la justicia art. 292.

JUICIO contra funcionarios públicos por inobservancia de formas legales para encausar art. 261.

JUSTICIA Denegación y retardo de, arts. 292 y 293.

L

LESIONES V. Ejercicio de Acciones art. 76. En general art. 93. Graves arts. 94 y 95. Concurso de agravaciones art. 96. Concurso de atenuaciones art. 97. Por imprudencia art. 98. Lesiones graves art. 99.

LEY PENAL su aplicación con relación al territorio art. 1°. Con relación al tiempo art. 3°.

LIBERTAD condicional arts. 18 y 19. V. Revocación art. 20. V. Consecuencias de la revocación art. 22. Política delitos contra la, art. 81. Individual delitos contra la, art. 145. En general art. 146. Agravantes art. 147. Abuso de autoridad en la privación de la, arts. 148 y 149. Conducción fuera de la frontera art. 150. Del trabajo art. 165. De la industria art. 166. De cultos art. 168. De reunión art. 169. De la prensa art. 170. Política art. 171. Del sufragio art. 172.

LIBROS de bordo. V. Faltas art. 324 inciso 11.

LIMITES alteración de, ver Usurpación art. 197 inc. 2°.

LOCO custodia de un, art. 322 inc. 6°.

LOCURA del condenado tiempo de la, art. 31.

LUCRO con la prostitución ajena art. 132. V. Libertad individual delitos contra la, art. 147, inc. 1°.

LLAVE FALSA art. 278 inc. 4°.

M

MAIVERSACIÓN de caudales públicos mala aplicación de, art. 279. Subtracción de, art. 280.

MANCERA ver Adulterio art. 120 inc. 4°.

MANDO ILEGAL de tropas, buque de guerra, plaza fuerte ó de puesto de guardia art. 253. Agravación para el funcionario público arts. 254 y 255.





- MARCAS DE FÁBRICA Ó COMERCIO ver Propiedad art. 199 incs. 2º, 3º, 4º. Falsificación de, art. 308. Uso de marcas inutilizadas art. 309. Con abuso de funciones públicas art. 310.
- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN fraude de, art. 190.
- MATERIAS EXPLOSIVAS, el que infringiera los reglamentos sobre la elaboración, art. 322 inc. 10. V. Faltas art. 322 inc. 10.
- MATRIMONIO de la ofendida art. 137. Ilegal art. 139. En ocultación de impedimento, art. 140, inc. 1º. Simulación de, art. 140 inc. 2º. Oficial que autoriza el, art. 141. De menor impúber. art. 142. V. Faltas art. 324 inc. 5º.
- MAYOR DE 12 AÑOS V. Estupro art. 122. De 18 años V. Erratas. V. Corrupción art. 128. Incitación a la fuga art. 153.
- MEDICINA ejercicio ilegal de la, art. 225.
- MÉDICOS. V. Vida delitos contra la, art. 90. Falso certificado, art. 314.
- MENECIDAD, V. Faltas, art. 323 inc. 4º.
- MONEDA falsificación, expendio ó circulación de, art. 301. Cercenamiento ó alteración de, art. 302. Recibo, expendio y circulación en buena fe, art. 303. Falsificación, cercenamiento ó alteración de monedas extranjeras art. 305. Emisión ilegal art. 306.
- MESES DE 14 años art. 41 inc. 2º. V. Ejercicio de Acciones art. 76. De 10 años ó incapaz art. 109. V. Violación art. 121 inc. 1º. De 15 años ver Estupro art. 122. De 18 años ver Corrupción art. 127. V. Erratas. V. Rapto art. 136. Impúber su representante legítimo art. 142. V. Substracción art. 151. V. Incitación a la fuga art. 153. V. Ocultación art. 154. Abuso de inexperiencia. V. Defraudaciones, art. 189 inc. 2º. De 14 años que cometieren faltas art. 321 inciso 1º. V. Faltas art. 325 incs. 3º y 4º.
- MUERTE (pena del). Hechos ó circunstancias calificativas de la, art. 5º. Aplicación de la, art. 6º. Excepciones, art. 7º. Ejecución de la, arts. 8º y 9º.
- MULTA art. 28.
- MUJER ver Adulterio art. 120 inc. 1º. y 2º. Honesta, ver Estupro art. 122. V. Matrimonio art. 137. V. Faltas art. 325 inc. 6º.
- MUTILACION de un proceso. V. Defraudación art. 188 inc. 8º.

N

- NAUFRAGIO por imprudencia, negligencia ó impericia art. 213.
- NEGATIVA de declarar el nombre V. Faltas art. 324 inc. 1º.
- NEGLIGENCIA que causa descarrilamiento, naufragio ó otro accidente. art. 213 que diere ocasión a la substracción de caudales ó efectos. V. Substracción arts. 280, 281 y 282.



NEGOCIACIONES incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, art. 284.

NODRIZA. V. Faltas art. 322 inc. 11.

NOMBRAMIENTOS ILEGALES art. 272.

O

OBEEDIENCIA V. Responsabilidad art. 41 inc. 6°.

OBJETO QUE CAUSE DAÑO art. 322 inc. 4°.

OCULTACION de menor de 10 años art. 151 De menor de 15 años, art. 154. De un proceso ver Defraudación art. 183, inciso 8°.

OFERTA FRAUDULENTA de fondos públicos art. 319 inc. 2°.

OMISIONES calificadas de delitos cometidos en el extranjero, art. 2°. De auxilios art. 111. Del funcionario público art. 268. De auxilio requerido art. 269.

ORDEN público art. 323. Perturbar el de las sesiones y audiencias, etc. art. 280.

P

PADRINOS ver Duelo art. 100 y 101. Alevosía de los, art. 105. Duelo á muerte, art. 106.

PAGOS demora de, art. 283.

PALABRAS OBSCENAS, art. 134.

PARTICIPE obligación del, art. 38. V. Perdón del ofendido art. 73.

PENA ORDINARIA DEL DELITO art. 42. Reglas para su aplicación, art. 43. Mayor art. 189. Menor art. 190.

PENAS enumeración de, art. 4°. Extinción de, arts. 69 al 74. Reglas para aplicación de, art. 321 inc. 6°.

PERDON DEL OFENDIDO art. 73.

PERTO violación de deberes art. 262, ver Falso testimonio arts. 294 y 295. Véase Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas art. 284.

PERSONAS INCAPACES ver Menor art. 109 ver Violación art. 121 inc. 2°, abuso de inexperiencia de, V. Defraudaciones art. 189 inc. 2°.

PESAS O MEDIDAS falsas. V. Defraudaciones art. 189 inc. 3°.

PIRATERÍA art. 1°, inc. 3°, art. 215, incs. 1° al 8°. art. 216. Depredación ó violencia contra un buque art. 215. Con homicidio art. 216.

PLANOS DE FORTIFICACIONES ó OBRAS MILITARES levantamiento indebido de, art. 241.

PODERES PÚBLICOS NACIONALES, PROVINCIALES ó de territorios, art. 247. Que no guardan la forma prescripta en las constituciones ó leyes respectivas art. 261.



POSESION, turbación de la, V. Usurpación art. 197, inc. 3°.
POZOS, excavaciones, etc. El que abriere, art. 322, inc. 1°.
PREFERENCIA EN LA OBLIGACION DE INDEMNIZAR art. 36.
PRENSA delitos cometidos por la, ver Cómplices, art. 54. Libertad de la, art. 170.
PRESCRIPCION DE ACCIONES art. 66.
PRESIDIO art. 11. Condenados por los tribunales provinciales, art. 25.
PRESUNCION ver Corrupción art. 129.
PREVARICATO de jueces, árbitros y arbitraidores, amigables componedores art. 288. Del juez que decretare prisión preventiva por delito, en virtud del cual no proceda, etc. art. 289. Abogado ó mandatario judicial que defendiere ó representare partes contrarias en el mismo juicio art. 290. De fiscales, asesores y demás funcionarios encargados de emitir dictamen en causa que le estuviere confiada, art. 291.
PRISION por tiempo indeterminado art. 14. Condenados por los tribunales provinciales art. 25. Preventiva art. 30.
PROPAGANDA desleal art. 167.
PROPIEDAD (Delitos contra la) art. 177 al 191. Intelectual é industrial, art. 199.
PROSTITUCION regentes de casas, V. Corrupción art. 129. Lucro con la ajena art. 132.
PROVOCACION á DUELO art. 263.
PRUEBA de la imputación art. 114. Prohibición de la, art. 115. No admision de las imputaciones art. 264.
PUBLICACION DE CORRESPONDENCIA PRIVADA art. 163.
PUBLICIDAD INDEBIDA art. 163.

Q

QUEBREA fraudulenta art. 192. Culpable art. 193. De una sociedad anónima art. 194. Deudor no comerciante art. 195. Estado de, art. 196.

R

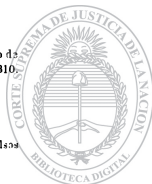
RAPTO V. Ejercicio de acciones art. 76. De mujer art. 135. De una menor art. 136. Exento de pena art. 137. Con abuso de autoridad art. 138.
REBASOS hurto de animales, art. 178 inc. 1°.
REBELION art. 243. Alteración ilícita de la Constitución Nacional art. 244. Facultades extraordinarias art. 245. Ejecución de bulas, rescriptos del Papa etc., art. 246.



RECLUSIÓN CELULAR art. 14.
RECLUTAMIENTO ILEGAL V. Faltas art. 324 inc. 8º.
REGALOS aceptación de, art. 278.
REGENTES DE CASAS DE PROSTITUCIÓN art. 129.
REGISTRO DE ESTADO CIVIL V. Faltas art. 324 inc. 3º y 4º.
REINCIDENCIA art. 55. Reincidentes por segunda vez a) art. 56. Deportación accesoria art. 57. V. Faltas art. 321 inc. 4º.
REMUNERACIÓN SUPUESTA V. Defraudaciones art. 188 inc. 10.
RENUNCIA DE LA PERSONA OFENDIDA art. 64.
REPARACIÓN DE DAÑOS art. 34 inc. 1º. D) perjuicios. art. 35. Cumplimiento de la art. 39.
REPRESALIAS peligro de, art. 236.
REPRESENTANTES LEGALES V. Ejercicio de acciones art. 76. art. 80 Legítimo de menor impúber art. 142.
RESISTENCIA ó desobediencia á un funcionario público arts. 258 y 259.
RESPONSABILIDAD presunción de, art. 40 Excepciones de art. 41. Enajenación mental a) inc. 1º. Menor de 14 años b) inc. 2º. Fuerza ó amenazas c) inc. 3º. Causar un mal por evitar otro mayor d) inc. 4º. Cumplimiento del deber e) inc. 5º. Obediencia f) inc. 6º. Defensa legítima g) inc. 7º. a, b, c. En defensa de la persona ó derechos de otro inc. 8.
RESTITUCIÓN DE LA COSA OBTENIDA POR EL DELITO art. 35 inc. 2º.
RETRACTACION art. 63. V. Erratas.
REUNIÓN Libertad de, art. 169.
REVELACION de secretos y de actuaciones art. 164.
REVOCACION DE LA LIBERTAD CONDICIONAL art. 20. Consecuencias de la, art. 22.
RiSA V. homicidio art. 99.
ROBO art. 179. Con homicidio art. 180. Agravantes arts. 181 y 182.

S

SECRETOS violación de, arts. 161 y 162. Publicación de, art. 163. Revelación de, art. 164. Políticos ó militares, art. 239. Revelaciones por imprudencia ó negligencia, art. 240.
SEDITION contra poderes públicos provinciales ó de territorios nacionales, art. 247. Para alterar la Constitución de la Provincia, art. 248. Atribuirse derechos del pueblo para impedir la ejecución de las leyes, art. 249.
SEDUCCION DE TROPAS art. 253.
SEGURIDAD pública Delitos contra la, arts. 203 al 206. De los medios de transporte y comunicaciones, arts. 207 al 214. General Faltas art. 322.



SELLOS violación de, art. 273. Falsificación de, art. 307, 308 inc. 2°. Uso de sellos inutilizados art. 309. Con abuso de funciones públicas art. 310.

SESALES el que removiére, art. 322 inc. 2°.

SÉPTICOS, cadáveres etc., V. Faltas art. 323 inc. 8°.

SERVICIO PROFESIONAL. V. Faltas art. 322 inc. 12.

SERVIDUMBRE reducción á, art. 145.

SOCIEDADES ANÓNIMAS Ó COOPERATIVAS, V. Quiebra, art. 194. Falsos informes ó balances de, art. 319 inc. 3°.

SOLIDARIDAD EN LA REPARACION art. 37.

SUBSTRACION de menor de 10 años, art. 151. De un cadáver, art. 186. De cosa mueble, por su dueño, art. 188. inc. 5°. De caudales públicos, art. 280.

SUFRAJIO libertad del, art. 172.

SUCIDIO V. homicidio, art. 87.

SUSCRIPCION para el pago de pena pecuniaria V. Faltas art. 324 inc. 6°

T

TELÉGRAFO Y TELÉFONO V. Violación de secretos, arts. 161 y 162. Destinado al ferrocarril, art. 209. Comunicaciones art. 214.

TENTATIVA Definición, art. 44. Desistimiento del delito de, art. 45. Presunción de, desistimiento voluntario, art. 46. Penalidad art. 47. V. Cómplices, art. 53. No es punible art. 321 inc. 1°.

TERRITORIO DE LA NACION delitos cometidos en, art. 1°.

TESTIGO violación de deberes art. 262. V. Falso testimonio, arts. 294 y 295.

TÍTULOS Y HONORES uso indebido de, art. 266. Títulos al portador, V. Falsificación, art. 304.

TOQUES DE CAMPANA ruidos etc., V. Faltas art. 323 inciso 2°.

TRABAJOS forzados, art. 11. Producto del, art. 16. Libertad del, art. 165.

TRAICION art. 231. Agravaciones art. 232. Conspiración para la, art. 233. Exención de pena, art. 234. Delitos de traición contra una potencia aliada, 235.

TRATA DE BLANCAS, art. 131.

TREN detener ó entorpecer la marcha de un, art. 208. Interrupción de telégrafo ó teléfono de un, art. 209. Arrojar cuerpos contundentes ó proyectiles contra un, art. 210. Abandono del servicio de un, art. 212. Descarrilamiento, art. 213.

TRIBUNALES PROVINCIALES admisión de los condenados por, art. 25. De justicia, art. 260, inc. 1°.

TRIBUNALES DE JUSTICIA audiencias de, art. 260 inc. 1°.

TUMULTO disolución del, art. 251.

TUTORES V. Ejercicio de acciones, art. 76. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, art. 284.

U

ULTRAJES al pudor, V. Ejercicio de Acciones, arts. 76, 77 y 79. V. Menor de 18 años, art. 127. V. Mayor de 18 años, art. 128. V. Corrupción art. 130.

USURPACION de inmueble, art. 197. De aguas art. 198. De mando de tropas, buque de guerra, plaza fuerte ó de puesto de guardia, art. 253. De autoridad art. 265.

V

VAGANCIA V. Faltas art. 323 inc. 3°.

VEHÍCULOS V. Faltas art. 322 inc. 13.

VÍAS ó OBRAS inutilización ó destrucción de. art. 207.

VÍCTIMA. V. Vida delitos contra la, art. 85 inc. 1°.

VIDA delitos contra la, arts. 83 al 92.

VIOLACION V. Ejercicio de Acciones, arts. 76 y 77. Y estupro art. 121.

Agravantes, arts. 124 al 126. Exento de pena, art. 137. Conabuso de autoridad, art. 138. Violación de *domicilio*, arts. 158 al 160. *De secretos* arts. 161 al 164. De prescripciones médicas en la preparación de medicinas, art. 221. De medidas antiepidémicas, art. 222. Agravaciones, art. 224. De tratados, treguas, armisticio, etc., art. 237. De inmunidades diplomáticas, art. 238. De instrucciones diplomáticas, art. 242. De deberes de perito ó testigos, art. 262. De los deberes de funcionario público art. 267 al 272. De sellos y documentos art. 273 y 274.

VIOLENCIAS. V. Acciones privadas art. 77. V. Corrupción art. 131. V. Libertad individual delitos contra la, art. 147 inc. 1°. V. Coacción art. 155. Amenaza de, con fuerzas reunidas, art. 153. En general, art. 157. V. Extorsión, art. 183.





ÍNDICE

Libro Primero

DISPOSICIONES GENERALES

	Pág
TÍTULO I <i>Aplicación de la ley penal</i>	1
• II <i>De las penas</i>	2
• III <i>Condennación condicional</i>	2
• IV <i>Reparación de perjuicios</i>	3
• V <i>Responsabilidad</i>	10
• VI <i>Tentativa</i>	13
• VII <i>Autores y cómplices</i>	13
• VIII <i>Reincidencia</i>	15
• IX <i>Concurso de delitos</i>	16
• X <i>Extinción de acciones y de penas</i>	17
• XI <i>Del ejercicio de las acciones</i>	19
• XII <i>Significación de algunos términos empleados en el Código</i>	21

Libro Segundo

DE LOS DELITOS

TÍTULO I <i>Delitos contra las personas</i>	
CAPÍTULO I <i>Delitos contra la vida</i>	22
• II <i>Lesiones</i>	24
• III <i>Homicidio ó lesiones en riña</i> ..	25
• IV <i>Duelo</i>	26
• V <i>Abuso de armas</i>	28
• VI <i>Abandono de personas</i>	28





TÍTULO II	<i>Delitos contra el honor</i>	
• III	<i>Delitos contra la honestidad</i>	
CAPÍTULO I	Adulterio.....	31
• II	Violación y estupro.....	31
• III	Corrupción y ultrajes al pudor.....	32
• IV	Rapto.....	34
• V	Disposiciones comunes á los artículos anteriores.....	34
TÍTULO IV	<i>Delitos contra el estado civil</i>	
CAPÍTULO I	Matrimonios ilegales.....	35
• II	Supresión y suposición del estado civil.....	36
TÍTULO V	<i>Delitos contra la libertad</i>	
CAPÍTULO I	Delitos contra la libertad individual.....	36
• II	Violación de domicilio.....	39
• III	Violación de secretos.....	40
• IV	Delitos contra la libertad del trabajo é industria.....	41
• V	Delitos contra la libertad de cultos.....	42
• VI	Delitos contra la libertad de reunión.....	42
• VII	Delitos contra la libertad de la prensa.....	42
• VIII	Delitos contra la libertad política.....	42
TÍTULO VI	<i>Delitos contra la propiedad</i>	
CAPÍTULO I	Hurto.....	44
• II	Robo.....	45
• III	Extorsión.....	46
• IV	Estafas y otras defraudaciones.....	46
• V	Quebrados y otros deudores punibles.....	50
• VI	Usurpación.....	51
• VII	Delitos contra la propiedad intelectual é industrial.....	52
• VIII	Daños.....	53
• IX	Disposiciones generales.....	54
TÍTULO VII	<i>Delitos contra la seguridad pública</i>	
CAPÍTULO I	Incendios y otros estragos....	54

	Página
CAPÍTULO II Delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación	55
• III Piratería	57
• IV Delitos contra la salud pública	59
TÍTULO VIII <i>Delitos contra el orden público</i>	
CAPÍTULO I Instigación á cometer delitos ..	61
• II Asociación ilícita	61
• III Intimidación pública	61
TÍTULO IX <i>Delitos contra la seguridad de la Nación</i>	
CAPÍTULO I Traición	62
• II Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación ..	63
TÍTULO X <i>Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional</i>	
CAPÍTULO I Rebelión	64
• II Sedición	65
• III Disposiciones comunes á los capítulos precedentes	66
TÍTULO XI <i>Delitos contra la administración pública</i>	
CAPÍTULO I atentado y resistencia contra la autoridad	68
• II Desacato	69
• III Usurpación de autoridad, títulos ú honores	70
• IV Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos	70
• V Violación de sellos y documentos	72
• VI Cohecho	72
• VII Malversación de caudales públicos	73
• VIII Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas	74
• IX Exacciones ilegales	75
• X Prevaricato	75
• XI Denegación y retardo de justicia ..	76
• XII Falso testimonio	77
• XIII Encubrimiento	77
• XIV Evasión	78





TÍTULO XII	<i>Debitos contra la fe publica</i>	
CAPÍTULO I	Falsificación de moneda, billetes de banco, títulos de portador y documentos de crédito.....	79
• II	Falsificación de sellos, timbres y marcas.....	80
• III	Falsificación de documentos en general.....	81
IV	Disposiciones comunes a los capítulos precedentes.....	83
V	De los fraudes al comercio y a la industria.....	83

Libro Tercero

DE LAS FALTAS

TÍTULO I	<i>Disposiciones generales</i>	85
• II	<i>Faltas contra la seguridad general</i>	86
• III	<i>Faltas contra el orden publico</i>	86
• IV	<i>Faltas contra la autoridad y administración publica</i>	90
V	<i>Faltas contra las buenas costumbres</i>	91

ERRATAS



Deberá agregarse al artículo 68:

5°. Por retractación pública ó explicación satisfactoria del acusado por delito contra el honor, siempre que la retractación ó explicación tuvieron lugar antes de contestarse la querrela, y ofrezca el pago de costas y perjuicios.

Deberá agregarse al fin del artículo 127:

«La pena será de dos á seis años, si el autor del hecho fuere algunas de las personas mencionadas en el artículo 121».

Deberá agregarse al fin del artículo 128:

«Regirá en su caso la disposición final del artículo precedente».

En el artículo:	donde dice	deberá leerse:
176	<i>libertad condicional</i>	<i>condenación condicional.</i>
197 inciso 3°.	<i>trabare la posesión</i>	<i>turbare la posesión</i>
231	<i>penitenciaria</i>	<i>presidio</i>

Deberá agregarse al artículo 230:

«Ó fuere sorprendido con bomba explosiva, mezcla ó otro preparativo conocido como destinado á incendiar ó causar estrago, y no diere explicación satisfactoria del objeto á que es destinado».